CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidente Diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año III	Ciudad de México, martes 22 de septiembre de 2026	Sesión 11 Apéndice III

S U M A R I O

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo del artículo 4o., el párrafo tercero del artículo 6o. y el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **3**

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. **45**

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. **64**

EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y MODIFICA LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. **88**

EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL NORTE

Del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte. **152**

EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN, LAS EXPORTACIONES Y EL NEARSHORING

Del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Fomento de la Inversión, las Exportaciones y el Nearshoring. **211**

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **254**

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo décimo del artículo 4°, el párrafo tercero del artículo 6° y el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento y protección de la identidad digital.

Karina Margarita Del Río Zenteno, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 82 numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I) CONTEXTO

El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales. En México el concepto de identidad fue reconocido como derecho humano mediante una reforma al artículo 4° Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014.[1]

Quedando establecido que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de manera inmediata a su nacimiento y señala la obligación del estado mexicano de garantizar el cumplimiento de estos derechos:

> ***"Artículo 4o.*** *...*
> *Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos*

[1] Diario Oficial de la Federación. Martes 17 de junio de 2014. Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_217_17jun14.pdf

derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento."

El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende **a la identidad**, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona.

El derecho a la identidad como todo derecho humano, es universal, no puede tener caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible.

En este contexto, la reivindicación de la dignidad de las personas y el pleno respeto a sus derechos humanos y, dentro de este marco, el **derecho a la identidad** a fin de que este derecho se convierta verdaderamente en la puerta de acceso a todos los demás derechos.

El Derecho a la Identidad tiene dos pilares fundamentales para su ejercicio: la identidad jurídica y la identidad biométrica, ligadas a través del identificador único que es la CURP, y así garantizar su unicidad, sin la cual no hay identidad.[2]

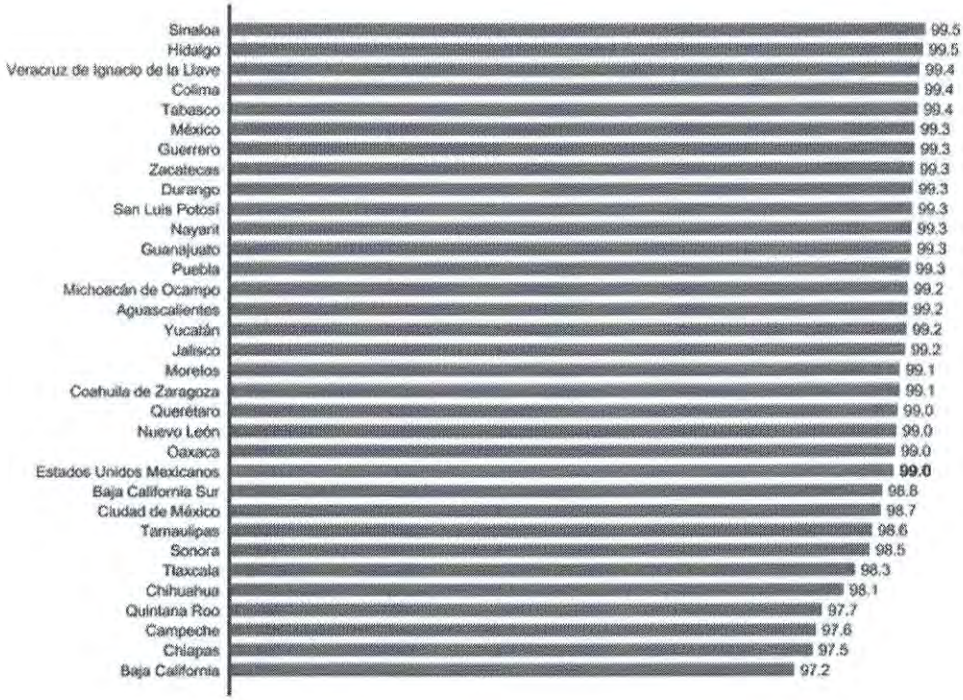
La identidad jurídica de las personas la garantizan tanto el gobierno federal como los gobiernos de las 32 entidades federativas, quienes a través de sus Registros Civiles. El reconocimiento a través del registro de nacimiento permite, además de adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad, acceder a un conjunto de derechos humanos reconocidos en la legislación de un país.

[2] Gobierno de México. Derecho a la identidad, la puerta de acceso a tus derechos. https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-identidad-la-puerta-de-acceso-a-tus-derechos

Con la información del Cuestionario Ampliado del Censo 2020, se estima que en México 99.0% del total de la población ha sido registrada.[3] Por otra parte, se estima que los estados donde la población presenta el mayor porcentaje de registro de nacimiento son: Sinaloa e Hidalgo con 99.5%, seguidas por Veracruz de Ignacio de Llave, Colima y Tabasco con 99.4% cada uno. En contraste, las entidades federativas con el menor porcentaje de población registrada son: Campeche, Chiapas y Baja California con 97.6, 97.5 y 97.2% respectivamente.[4] Tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Censo de Población y Vivienda 2020

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON REGISTRO DE NACIMIENTO EN EL PAÍS POR ENTIDAD FEDERATIVA



Fuente: **INEGI**. Censo de Población y Vivienda 2020, Cuestionario Ampliado

[3] INEGI. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 Estados Unidos Mexicanos. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198060.pdf

[4] Ibid.

Actualmente, México no cuenta con una base de datos que vincule la identidad jurídica y la biométrica de toda la población, lo que impide vincular y proteger la identidad legal y la identidad digital, lo cual facilita el robo de identidad, el fraude y la inseguridad.

Sin embargo, el desarrollo de la tecnología nos ha llevado a una realidad inesperada: el **mundo digital**. En el siglo XXI, la vida humana se desarrolla de manera indisoluble entre el entorno físico y el entorno digital. Las interacciones sociales, las transacciones económicas, el acceso a servicios públicos y el ejercicio de derechos fundamentales ocurren cada vez más en el ciberespacio. En este contexto, ha surgido una nueva dimensión de la personalidad jurídica: la **identidad digital**.

La Identidad Digital se ha convertido en una forma de extensión de la persona que no se limita a las credenciales de acceso o contraseñas; abarca la huella digital, los datos biométricos, el historial de navegación, el comportamiento en línea y el perfilamiento algorítmico que terceros realizan sobre los individuos.

Actualmente, nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales y los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), pero el marco resulta insuficiente frente a la minería de datos masiva (Big Data), la inteligencia artificial y el robo de identidad en plataformas tecnológicas.

Es decir, tenemos la identidad legal como un derecho humano básico que garantiza el reconocimiento oficial de una persona mediante atributos como el nombre, la filiación y la nacionalidad. Por su parte, la identidad digital es la proyección y el conjunto de datos de esa misma persona en el entorno virtual.

- Ambos conceptos buscan salvaguardar el valor de la persona, garantizando que sea reconocida de forma justa y sin sufrir engaños o ataques a su imagen.

- Los dos se apoyan en normativas de derechos humanos y leyes de protección de datos para evitar abusos por parte de terceros o de empresas tecnológicas.

Sin embargo, existen amplias diferencias:

1. El derecho a la identidad opera principalmente en el mundo físico y legal tradicional, mientras que la identidad digital vive en redes, bases de datos y plataformas de internet.
2. Los atributos esenciales de la identidad tradicional son otorgados e inscritos por el Estado, como el acta de nacimiento, en cambio, la identidad digital suele construirse mediante acciones del usuario, publicaciones y rastros informáticos que a veces escapan a su control total.
3. La identidad legal se compone de datos fijos y formales, mientras que la identidad digital incluye datos de comportamiento, historiales de navegación, perfiles y reputación en línea.

Diversos análisis jurídicos y académicos, como los trabajos sobre el Derecho a la identidad digital publicados en normativas europeas y iberoamericanas, discuten cómo extender los principios tradicionales de la personalidad hacia el ecosistema de algoritmos y redes. Asimismo, autores como Stefano Rodotà han estudiado la identidad como un reflejo dinámico frente a los nuevos retos tecnológicos.

En México, el marco legal que divide y entrelaza el derecho a la identidad y la identidad digital se encuentra en una etapa de profunda transformación. Mientras que el primero está consolidado constitucionalmente, el segundo se construye a través de reformas recientes y nuevas agencias gubernamentales.

Cabe señalar que la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheiubaum Pardo, en su primer informe de gobierno, se refirió específicamente a **identidad digital** y señalo:

"Crear la Identidad Digital Nacional[5]

Con el objetivo de garantizar plenamente el derecho a la identidad, se impulsó la iniciativa de integrar datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP),[6] transformándola en un documento de identidad digital nacional capaz de reconocer de forma única e inequívoca a cada persona. Este documento contará con dos modalidades: física y digital. Entre enero[7] y junio de 2025 se realizaron diversas acciones, de las cuales se destacan las siguientes:

• Hasta el 30 de junio de 2025, las distintas instituciones del Gobierno Federal responsables de recabar datos biométricos, reportaron aproximadamente 29 millones de registros con fotografía y huellas dactilares. Adicionalmente, 25 millones de registros incluyen fotografías, mientras que 76 millones de personas no tienen registro con biométricos.

• Para agilizar la incorporación de datos biométricos a la CURP, se implementará un programa de enrolamiento en todos los estados del país, coordinado por el Registro Nacional de Población (RENAPO). En una primera etapa, está prevista la adquisición de al menos 4 mil kits de enrolamiento, con la proyección de incrementar la capacidad hasta 8 mil kits en fases posteriores. Además, se sumarán a la estrategia de enrolamiento la Secretaría del Bienestar.

• Hasta el momento se ha alcanzado un registro de más de 8.8 millones de usuarios en la Llave MX, que facilita el acceso a los servicios de inscripción

---

[5] 1er. Informe de Gobierno. 2024- 2025. Página 234 – 235.
https://www.informegobierno.gob.mx/usercontent/68b4162a4d926-11G-INFORME-INTEGRADO-FINAL_26_08_2025

[6] Este documento contará con dos modalidades: física y digital. En su versión digital, podrá obtenerse a través de la aplicación APP MX (la cual está siendo desarrollada por la misma Agencia). El proceso consistirá en ingresar la CURP para realizar una búsqueda en los registros oficiales que contengan datos biométricos. En caso de localizar un registro, se solicitará una prueba de vida para verificar la identidad de la persona y asociar su CURP Identidad. La aplicación opera con altos estándares de seguridad y validación, garantizando la protección de los datos personales de la ciudadanía. Esta aplicación servirá como un mecanismo de autenticación que unificará el acceso a diversos servicios gubernamentales en una primera etapa y privados una vez que su adopción y maduración lo permita. Todo el procedimiento se realizará con el consentimiento expreso del titular, incluyendo la autorización para transferir los datos biométricos al RENAPO, cuando estos se encuentren en una base distinta a la de dicha Institución.

[7] La Reforma a la Ley Orgánica de la APF, publicada el 28 de noviembre de 2024 en el DOF, creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que inició actividades el 1 de enero de 2025.

a Programas del Bienestar; emisión de documentos oficiales; realización de trámites de manera digital como son la apertura de negocios.

• Gracias a este mecanismo digital que interopera en 67 sistemas o plataformas web del Gobierno de México, virtualmente se pudieron gestionar los siguientes apoyos y servicios públicos:

1. Registro de candidaturas para elección del Poder Judicial, proyecto en el que 25,689 aspirantes se inscribieron, de los cuales 18,447 fueron considerados elegibles;

2. Registro de poco más de 5 millones de madres, padres y tutores de estudiantes de nivel básico para solicitar la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina"; 3. Cerca de 1.5 millones de estudiantes de educación media superior utilizaron Llave MX para solicitar la "Nueva Beca Universal Benito Juárez" y;

4. Alrededor de medio millón de madres, padres y tutores del estado de Oaxaca pudieron generar el "Registro para la entrega de apoyos para uniformes" a estudiantes de nivel básico.

Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización de Trámites Administrativos

A fin de habilitar el Modelo de Nacional de Simplificación y Digitalización, se presentó ante la Cámara de Senadores el proyecto de Decreto por el que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el objetivo de establecer herramientas, instrumentos y acciones de observancia obligatoria para las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de facilitar el acceso y obtención de trámites y servicios.

• En este sentido, y derivado de los trabajos realizados en materia de simplificación, con el propósito de disminuir trámites, requisitos y tiempo de resolución, al 30 de junio de 2025 se presentaron propuestas de simplificación de 965 trámites de 42 autoridades de la Administración Pública Federal, de los cuales 579 ya fueron simplificados mediante instrumentos

jurídicos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Dando como resultado los siguientes logros:

A. Se eliminó un 57% de los trámites.

B. Se redujo un 57% de requisitos solicitados.

C. Se redujo un 40% el tiempo máximo de resolución de los trámites.

• Asimismo, se desarrolló la primera etapa de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, a través de la cual las personas empresarias pueden realizar un cuestionario para conocer los trámites, requisitos, tiempo de resolución y autoridad responsable de los tres órdenes de gobierno, necesarios para constituir, construir y operar una empresa en México. Desde su publicación, el 21 de abril de 2025, y hasta el 10 de junio, la ventanilla ha contado con más de 10 mil usuarios activos, de 45 países distintos.

• Fue desarrollado un nuevo Portal de Turismo con un modelo de inteligencia artificial para fomentar el turismo mexicano, brindando, conforme a las necesidades de cada persona, destinos turísticos, actividades y eventos por cada Entidad Federativa. Desde el 26 de abril de 2025, fecha de su lanzamiento, y hasta el 10 de junio, la página ha sido visitada por más de 72 mil usuarios activos.

• Se realizó una colaboración con diferentes Secretarías de Estado con el objetivo de mapear y simplificar procesos, así como diseñar interfaces gráficas y generar pruebas digitales para el desarrollo y modernización de ventanillas de trámites. Entre los proyectos destacados se encuentran la Ventanilla Digital CONAGUA y la Renovación del Portal Mi Consulado.

• Con el fin de eliminar la corrupción y reducir la evasión fiscal, se puso en marcha un nuevo semáforo de inteligencia aduanera en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Aduanas de México, el cual aumenta la precisión del semáforo mejorando la detección de patrones de riesgo de contrabando y evasión, lo cual permite reducir el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías aumentando así la recaudación fiscal."

Cabe señalar que a pesar de los enormes esfuerzos gubernamentales que se han

realizado para "*Crear la Identidad Digital Nacional*", hasta el momento, en legislación vigente aún no se ha reconocido ni protegido el derecho a la identidad digital. De ahí la importancia de la iniciativa que se presenta para establecer a nivel Constitucional, el derecho a la identidad digital, así como la consecuente tutela y salvaguarda.

Para ilustrar la necesidad de legislar en la materia de identidad digital, el estudio denominado *"Desarrollo e implementación de procesos de identificación digital en los países de América Latina"*[8], elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de febrero de 2026, entre otros puntos, señala que:

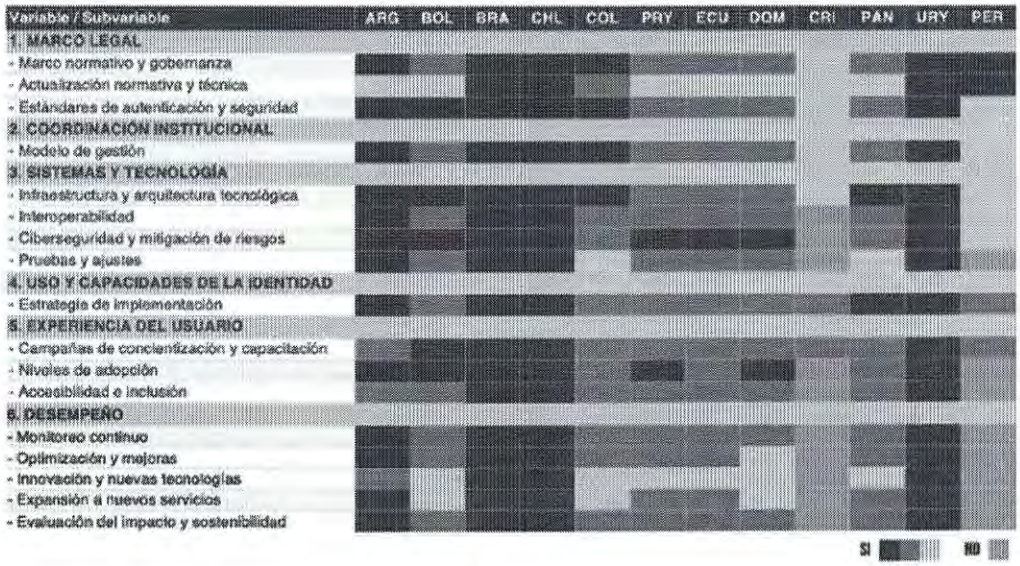
> *"**A nivel internacional, la identificación digital ha experimentado un desarrollo significativo, ofreciendo experiencias y aprendizajes valiosos para la región.** La implementación exitosa de estos sistemas se ha basado en la existencia de condiciones previas robustas, como marcos legales sólidos, una infraestructura de tecnología de la información bien desarrollada y una alta penetración de internet. Por otro lado, el desarrollo de medidas de seguridad y un diseño pensado en el usuario promueve la confianza de estos. Asimismo, la interoperabilidad surge como un patrón claro en estos casos de éxito. Otro aspecto destacado es el modelo federado adoptado por algunos de estos países, donde diferentes entidades gubernamentales y privadas pueden conectarse e intercambiar información a través de un marco de identificación digital común.*
>
> ***Experiencia de otros países en desarrollo resultan particularmente útiles para América Latina por contar con desafíos estructurales similares.** El panorama africano es heterogéneo. Mientras algunos países arrastran sistemas legados coloniales, otros están adoptando arquitecturas de "tercera generación" (identidad digital nativa) financiadas por organismos internacionales como el Banco Mundial (programa ID4D). Países como*

[8] BID.

Nigeria, Kenia, Etiopía y Marruecos han desplegado sistemas nacionales de identificación digital basados en identificadores únicos y verificación biométrica, concebidos como infraestructuras habilitantes para la provisión de servicios públicos.

El desarrollo de la identificación digital en América Latina se encuentra en distintas etapas y presenta diversidad en sus enfoques.

Análisis comparativo de los sistemas de identificación digital



Fuente: análisis SmC+.

Nota: la escala de colores se basa en una calificación cualitativa de 0 a 3, donde el color más oscuro representa un nivel de desarrollo avanzado (3), asociado a marcos normativos consolidados, altos estándares de interoperabilidad y adopción ciudadana sostenida; el tono intermedio identifica un nivel medio (2), caracterizado por avances parciales en la implementación; el tono claro señala un desarrollo inicial (1), con presencia normativa o institucional incipiente; y el gris corresponde a ausencia o falta de evidencia pública (0). La clasificación fue validada con los organismos nacionales responsables de cada sistema a partir de información oficial disponible hasta agosto de 2025.

La identificación digital tiene el potencial de contribuir en más de 1.600 mil millones USD al PIB de América Latina y Caribe*. Se plantearon dos escenarios de adopción de la identificación digital (uno moderado y uno acelerado), en los cuales su impacto económico regional podría llegar a alcanzar el 1,8% y al 2,1%, respectivamente, del Producto Interno Bruto (PIB). En el escenario de "adopción moderada", se espera que entre el 41% y el 90% de la población adopte la identificación digital de manera gradual, considerando factores como la infraestructura existente y la resistencia al*

cambio. A modo de referencia, países como Estonia y Singapur han logrado tasas de adopción digital significativamente más altas (cercanas al 100%) en sistemas que ya llevan más de una década desde su implementación. En contraste, el escenario de 'adopción acelerada' considera una adopción entre el 54% y el 99% de la población. Este escenario se utiliza como ejercicio teórico para explorar el máximo potencial de impacto.

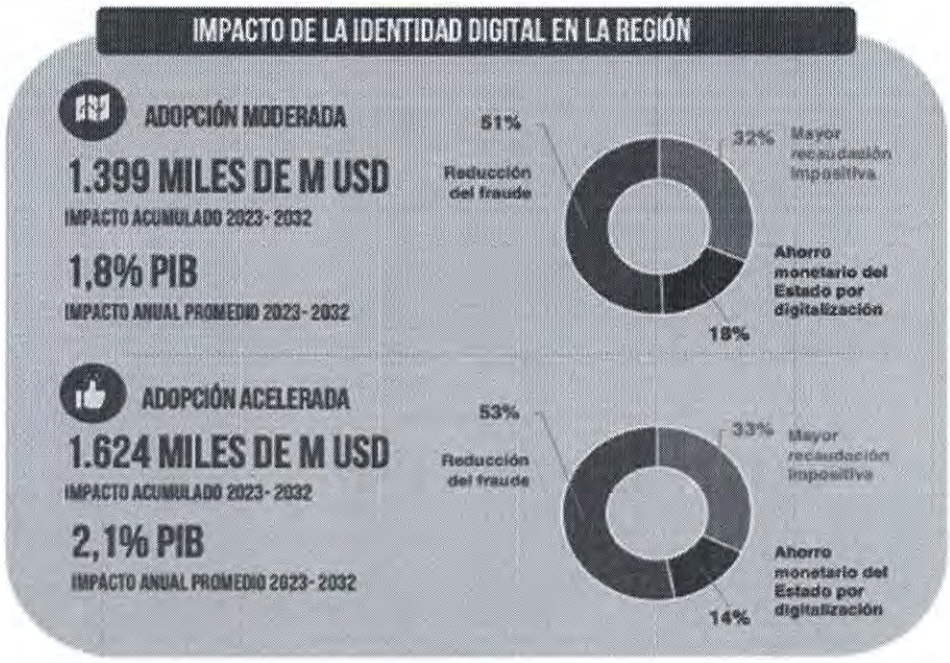
Las principales variables del estudio de impacto, considerando su relevancia económica son la reducción del fraude a gobiernos, el incremento de la recaudación impositiva y ahorros producto de un mayor nivel de digitalización.

	VARIABLE DE IMPACTO ECONÓMICO	RELEVANCIA EN EL IMPACTO*
	Reducción del fraude a gobiernos	51%
	Incremento de la recaudación impositiva	32%
	Generación de ahorros para gobiernos producto de un mayor nivel de digitalización	18%

Notas: (*) valores de referencia para el escenario de adopción moderada.
Fuente: análisis SmC+

Los resultados del impacto de la identificación digital en el PIB muestran variaciones entre los países analizados, dependiendo del nivel de adopción y las variables consideradas en el modelo. En un escenario de adopción acelerado, donde se alcanza entre el 54% y el 99% de adopción, en algunos países se observa un impacto económico en el PIB de hasta un 3,5% para el año 2032. Para la extrapolación a nivel regional (América Latina y Caribe), se ha proyectado el impacto de la identificación digital en estos países tomando como referencia su PIB.

Resultados del estudio de impacto económico para América Latina y Caribe



Fuente: análisis SmC+

La adopción de la identificación digital en la región de América Latina y el Caribe debe sortear una serie de barreras para alcanzar niveles de uso relevantes. *Las barreras identificadas para la implementación y adopción de la identificación digital incluyen aspectos tecnológicos, la brecha digital, la disponibilidad de recursos económicos y factores relacionados con la cultura organizacional y la gobernanza, como ser la necesidad de un liderazgo y la cultura organizacional para la digitalización de procesos de gobierno.*

Principales barreras para la implementación de la identificación digital en América Latina



Fuentes: análisis SmC+ a partir de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Grupo Banco Mundial. (2022). Acceso y Uso de Internet en América Latina y el Caribe. Resultados de las encuestas telefónicas de alta frecuencia de ALC 2021; OCDE. (2020). Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better; Edelman. (2022). Edelman Trust Barometer.

Se proponen estrategias para guiar a los países según su nivel de desarrollo en sistemas de identificación digital. *Para los países en etapas iniciales, como Perú y Costa Rica, se recomienda enfocar esfuerzos en establecer una arquitectura institucional y normativa básica. Esto incluye definir una autoridad rectora, establecer estándares de seguridad e interoperabilidad, y crear una hoja de ruta nacional. Paralelamente, deben priorizar la digitalización de servicios públicos esenciales (como salud, educación y registro civil) y lanzar campañas de alfabetización digital para fomentar el uso inclusivo de estos sistemas. Es importante destacar que, en el caso específico de Costa Rica, estos cuatro elementos se encuentran delineados, aunque aún requieren procesos de consolidación y formalización. Más que crear una arquitectura básica, el desafío radica en fortalecer la existente.*

Para los países de la primera ola de adopción masiva, como Paraguay, Panamá, República Dominicana y Bolivia, resulta prioritario consolidar la gobernanza de sus sistemas de identidad digital, formalizando marcos

legales sobre autenticación, protección de datos y firma digital. Es fundamental integrar gradualmente servicios prioritarios bajo plataformas únicas de autenticación, asegurando la interoperabilidad entre instituciones. El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la inversión en infraestructura digital también son claves en esta fase.

En la segunda ola de adopción, que incluye a Colombia y Ecuador, una posible línea de acción es avanzar hacia modelos federados de identidad digital, que permitan autenticar a los usuarios mediante múltiples mecanismos (como certificados digitales, biometría o banca digital), a través de brokers de identidad. Es prioritario fortalecer la experiencia de usuario (con autenticación multifactor, accesibilidad y diseño centrado en el ciudadano) y mejorar la interoperabilidad entre bases de datos estatales.

En países con mayor desarrollo en la materia, como Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, una prioridad es consolidar la interoperabilidad tanto interna como regional. Esto implica ampliar el alcance de la identificación digital hacia nuevos casos de uso, como trámites diferenciados por segmento poblacional (jubilaciones, servicios para menores, etc.) o por contexto (emergencias sanitarias o climáticas). Además, deben adoptar tecnologías avanzadas de autenticación como biometría y 2FA16, y fortalecer sus mecanismos de ciberseguridad. Para sostener la mejora continua, es fundamental establecer métricas claras sobre satisfacción ciudadana, facilidad de uso y confianza en el sistema, que guíen la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia."

II) MARCO LEGAL

El derecho a la identidad se encuentra establecido en primer término en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes, federales y locales, así como en diversos instrumentos internacionales.

1. Constitucional

La adición constitucional, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 17 de junio de 2014, del artículo 4, párrafo octavo, fue el parteaguas para reconocerse en México el derecho a la identidad como derecho fundamental para que las personas tengan le certeza de que el Estado tiene que reconocer y buscar los mecanismos legales para hacerla efectiva.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo décimo, menciona: *"toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento"*.[9]

2. Legales

A) Código Civil Federal

En el ámbito civil federal, este derecho e institución se rige a través del **Libro Primero del** Código Civil Federal (CCF), específicamente en el **Título Cuarto (Del Registro Civil)**:

> ***"Artículo 35.-*** *En el Distrito Federal, estará a cargo de los Jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las Delegaciones del Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.*

[9] Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Artículo 54.- *Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquél hubiere nacido."*

B) **La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescent**es en México, en su artículo 19, señala los elementos del derecho a la identidad, el cual a la letra dice:

"Artículo 19*. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:*

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.[3]

..."

2. Fundamentación Convencional e Internacional

Diversos organismos internacionales reconocen que la identidad digital es un catalizador clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16.9 de la Agenda 2030 de la ONU: *"Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos"*).

Asimismo, en el ámbito comparado (como el Reglamento eIDAS de la Unión Europea y las directrices de la Organización de los Estados Americanos), se ha

demostrado que el reconocimiento constitucional de la identidad digital salvaguarda principios clave:

- **Autodeterminación informativa:** El control exclusivo del ciudadano sobre sus atributos identitarios.
- **Privacidad desde el diseño:** Garantía de que los sistemas de identidad no se conviertan en instrumentos de vigilancia o control estatal masivo.

III) OBJETO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa que se presenta tiene como objeto elevar a rango constitucional el reconocimiento a la identidad digital y su protección, al efecto se propone:

Reformar el párrafo décimo del artículo 4° y se mandata al Estado Mexicano a garantizar el reconocimiento, la protección, el uso seguro y la inclusión de las personas en el entorno digital, sentando las bases para una futura Ley General en la materia.

Así mismo se propone reformar el párrafo tercero del artículo 6° para establecer que: *"El Estado garantizará la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad y la salvaguarda integral de la identidad digital y los datos personales y biométricos de las personas. La ley regulará los mecanismos de autodeterminación informativa y asegurará que la adopción de medios digitales no discrimine ni excluya el acceso a trámites o servicios en formato presencial."*

Y por último, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Federal, para que el Estado mexicano garantice que el desarrollo tecnológico no ocurra a expensas de la dignidad humana y la privacidad, se **Proteja a los ciudadanos frente al perfilamiento automatizado, el uso no autorizado de su** identidad digital e **información biométrica** y se incorpore el derecho a la **portabilidad** de los datos personales, un estándar internacional indispensable para la libre competencia y el control del usuario sobre su propia información.

Para mejor compresión de lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto vigente	Propuesta de la Iniciativa
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.	**Artículo 4o.- ...**
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.	...
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la	...

bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales.	
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.	...
Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.	...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.	... ...

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.	Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. **Este derecho comprende la identidad digital segura, interoperable y gratuita.** El Estado garantizará **la protección y** cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento **y la clave de identidad digital vinculada a su registro. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, estableciendo los mecanismos tecnológicos y normativos que aseguren la inclusión, privacidad, ciberseguridad e interoperabilidad en el entorno digital, en los términos que establezca la ley.**
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.	...
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y	...

principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. La Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años, en los términos que fije la ley. El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con	... ...

discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho años de edad, en términos que fije la ley.	
Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley.	...
A las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad, y a todas las personas mayores de esa edad les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores.	...
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.	...
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.	...
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque	...

multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización de conformidad con lo previsto en los artículos 21, párrafo noveno y 73, fracción XXI, penúltimo párrafo de esta Constitución. El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.	 ... ...
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún	**Artículo 6o**. ...

delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.	
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.	...
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.	El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. **El Estado garantizará la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad y la salvaguarda integral de la identidad digital y los datos personales y biométricos de las personas. La ley regulará los mecanismos de autodeterminación informativa y asegurará que la adopción de medios digitales no discrimine ni excluya el acceso a trámites o servicios en formato presencial.**

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:	...
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:	**...**
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.	...
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será	....

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.	
Por lo que hace a la información relacionada con los datos personales en posesión de particulares, la ley a la que se refiere el artículo 90 de esta Constitución determinará la competencia para conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones.	...
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.	...
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes.	...
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que	...

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.	
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.	...
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.	...
VIII. Los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.	...
Los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que ésta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases,	...

principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.	
El ejercicio de este derecho se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.	...
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.	...
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:	**...**
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.	...
II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.	...
III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la	...

veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.	
IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.	...
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de	...

ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.	
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.	...
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.	...
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las	...

Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.	 ...
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.	**Artículo 16.** ... Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales **y de su identidad digital**, al acceso, rectificación, cancelación **y portabilidad** de los mismos, así como a manifestar su oposición **y a no ser objeto de decisiones automatizadas que afecten sus derechos**, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. **El Estado**

	garantizará la protección del individuo frente al perfilamiento, el rastreo y el uso no autorizado de su información biométrica y comportamiento en entornos digitales, reconociendo la identidad digital como una extensión de la dignidad humana.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.	...
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.	...
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.	...

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.	...
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.	...
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.	...

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.	...
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.	...
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.	...
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por	...

alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.	
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.	...
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u	...

ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.	
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.	...
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.	...
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.	...
En tiempo de paz ningún miembro de la Fuerza Armada permanente -el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional- podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento,	...

bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.	

IV) DECRETO

Sirvan los razonamientos y argumentos arriba expresados para someter a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo decimo del artículo 4°, el párrafo tercero del artículo 6° y el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **en materia del reconocimiento y protección de la identidad digital**, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman el párrafo decimo del artículo 4°; el párrafo tercero del artículo 6° y el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **en materia del reconocimiento y protección de la identidad digital**, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. **Este derecho comprende la identidad digital segura, interoperable y gratuita.** El Estado garantizará **la protección y** cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia

certificada del acta de nacimiento **y la clave de identidad digital vinculada a su registro. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, estableciendo los mecanismos tecnológicos y normativos que aseguren la inclusión, privacidad, ciberseguridad e interoperabilidad en el entorno digital, en los términos que establezca la ley.**

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 6o. ...

...

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. **El Estado garantizará la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad y la salvaguarda integral de la identidad digital y los datos personales y biométricos de las personas. La ley regulará los mecanismos de autodeterminación informativa y asegurará que**

la adopción de medios digitales no discrimine ni excluya el acceso a trámites o servicios en formato presencial.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales **y de su identidad digital**, al acceso, rectificación, cancelación **y portabilidad** de los mismos, así como a manifestar su oposición **y a no ser objeto de decisiones automatizadas que afecten sus**

derechos, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. **El Estado garantizará la protección del individuo frente al perfilamiento, el rastreo y el uso no autorizado de su información biométrica y comportamiento en entornos digitales, reconociendo la identidad digital como una extensión de la dignidad humana.**

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo no mayor a **360 días naturales** contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir la **Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital**, así como para armonizar el marco legal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ciberseguridad y firma electrónica.

TERCERO. El Ejecutivo Federal, en coordinación con las entidades federativas, implementará el Sistema Nacional de Identidad Digital dentro de un plazo máximo de **dos años** posteriores a la entrada en vigor del Decreto correspondiente a la Ley General señalada en el artículo Transitorio Segundo, garantizando en todo momento la gratuidad, la accesibilidad universal y la adopción de tecnologías de cifrado y ciberseguridad avanzada.

ATENTAMENTE

KARINA MARGARITA DEL RÍO ZENTENO

Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de septiembre de 2026.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE LAS ADICCIONES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO VÁZQUEZ AHUED, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Quien suscribe, **Pablo Vázquez Ahued**, Diputado del **Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano** en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente, **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de regulación, supervisión y seguridad en la atención residencial de las adicciones,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El consumo de sustancias psicoactivas constituye uno de los principales desafíos de salud pública en México. Sus efectos impactan no sólo la salud física y mental de las personas, sino también la convivencia familiar, el desarrollo comunitario y la seguridad pública. Por ello, la prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones forman parte de las obligaciones que corresponden al Estado mexicano en el marco del derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida entre la población de 12 a 65 años pasó de 9.9% en 2016 a 13.1% en 2025.[1] Frente a esta realidad, los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones desempeñan una función relevante dentro de la red de servicios destinados al tratamiento y rehabilitación de las personas usuarias. En muchos casos, estos espacios constituyen una de las principales alternativas de atención para personas que enfrentan trastornos por consumo de sustancias y requieren acompañamiento especializado durante procesos de recuperación.

[1] Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), disponible en: https://www.gob.mx/conasama/documentos/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2025

Sin embargo, el crecimiento de este tipo de establecimientos también ha evidenciado importantes retos en materia de regulación, supervisión y cumplimiento normativo. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) ha señalado que en México se han identificado más de 2 mil 500 establecimientos residenciales para la atención de trastornos ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas, de los cuales el 84% son privados y únicamente el 7% (192) cumplen con la normatividad aplicable.[2]

La propia CONASAMA ha señalado que una proporción considerable de estos establecimientos presenta incumplimientos relacionados con la ausencia de avisos de funcionamiento, condiciones de hacinamiento, fauna nociva, alimentos en descomposición, infraestructura inadecuada, falta de modelos de tratamiento y prácticas que pueden vulnerar los derechos humanos de las personas usuarias.[3]

La problemática también ha sido documentada por autoridades estatales, ejemplo de ello es que en Guanajuato, la Secretaría de Salud informó que diversos centros de rehabilitación operan bajo la figura de asociaciones civiles que únicamente notifican su funcionamiento, sin cumplir necesariamente con las disposiciones regulatorias aplicables. Asimismo, se reportó la existencia de 260 anexos registrados ante la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, de los cuales una parte importante presentó observaciones relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de las personas internadas.[4]

Así mismo, en el estado de Jalisco, autoridades estatales identificaron establecimientos que operaban sin cumplir requisitos mínimos de funcionamiento y detectaron situaciones relacionadas con hacinamiento, maltrato[5], circunstancias que evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y protección de derechos humanos en este tipo de centros.

Estos antecedentes advierten que el desafío principal no se limita a casos aislados o a una entidad federativa en particular, sino que refleja un problema relacionado con la ausencia de mecanismos homogéneos de registro, supervisión, evaluación y seguimiento de los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones en el país.

---

[2] Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, *Guía para la Operación de Establecimientos Residenciales Privados que brindan Servicios de Atención a las Adicciones en México*, Cuarta Edición, junio de 2025, p. 1. Disponible en: https://www.conasama.salud.gob.mx/Residenciales/Guia_de_Operacion_estableciemientos.pdf

[3] *Ídem.*

[4] Milenio, "Anexos inspeccionados vulneran derechos de los internos", 24 de abril de 2024. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-anexos-inspeccionados-vulneran-derechos-de-los-internos

[5] El Occidental, Clausuran otro centro de rehabilitación por anomalías; van siete de 37 inspeccionados, disponible en: https://oem.com.mx/eloccidental/policiaca/clausuraron-otro-centro-de-rehabilitacion-por-anomalias-van-siete-de-37-inspeccionados-29926509

II. La atención de niñas, niños y adolescentes que enfrentan problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas requiere un enfoque diferenciado respecto de la población adulta. Ello obedece no sólo a las particularidades de su desarrollo físico, psicológico y emocional, sino también a la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de garantizar el interés superior de la niñez en todas las decisiones que les involucren.

De conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de este grupo poblacional al disfrute del más alto nivel posible de salud y a recibir servicios adecuados para la prevención, tratamiento y rehabilitación de padecimientos físicos y mentales.

La evidencia disponible demuestra que el contacto con sustancias psicoactivas puede presentarse desde edades tempranas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, la edad de inicio del consumo de alcohol entre adolescentes disminuyó de 13.6 a 13.2 años. Asimismo, la encuesta señala que la población adolescente presenta mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia y diversas conductas de riesgo en comparación con la población adulta.[6]

De igual forma, el estudio *"Consumo de alcohol, tabaco y drogas en la infancia y adolescencia en México 2023"*, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advierte que el consumo de sustancias durante la adolescencia constituye un factor de riesgo que puede impactar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y atención especializada de este fenómeno.[7]

A pesar de la relevancia de esta problemática, el marco normativo vigente, integrado principalmente por la Ley General de Salud, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como diversas disposiciones administrativas en materia de regulación sanitaria y protección de derechos humanos, no establece de manera expresa un conjunto de obligaciones específicas para los

---

[6] ENCODAT 2025, Resumen Ejecutivo, pp. 3 y 4. Disponible en: https://www.gob.mx/conasama/documentos/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2025

[7] REDIM, "Consumo de alcohol, tabaco y drogas en la infancia y adolescencia en México 2023", disponible en: https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/05/16/consumo-de-alcohol-tabaco-y-drogas-en-la-infancia-y-adolescencia-en-mexico-2023/

establecimientos residenciales para la atención de las adicciones que reciban niñas, niños y adolescentes.

Si bien existen disposiciones generales en materia de salud, protección de derechos humanos y atención a las adicciones, persisten áreas de oportunidad relacionadas con la definición de estándares diferenciados de atención, mecanismos de supervisión y salvaguardas institucionales dirigidas a esta población.

La necesidad de fortalecer el marco regulatorio de los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones no constituye una preocupación nueva dentro del Poder Legislativo Federal. En febrero de 2024, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en sentido positivo respecto de diversas iniciativas orientadas a fortalecer la regulación de los centros de rehabilitación, reconociendo la importancia de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas usuarias, mejorar los mecanismos de supervisión institucional y asegurar que dichos establecimientos cuenten con las autorizaciones y registros sanitarios correspondientes[8], el dictamen fue aprobado con 451 votos a favor, y turnado al Senado de la República, donde se detuvo su proceso de aprobación.

En dicho dictamen, la Comisión de Salud destacó que los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación deben operar bajo estándares mínimos de calidad, seguridad y legalidad, así como sujetarse a mecanismos de control sanitario que permitan salvaguardar la salud, la integridad y los derechos humanos de las personas usuarias. Asimismo, reconoció la importancia de que el personal que interviene en los procesos de atención cuente con conocimientos especializados y actúe bajo principios de respeto a la dignidad humana y protección de derechos fundamentales.

III. La atención de las adicciones exige no sólo la existencia de servicios especializados de prevención, tratamiento y rehabilitación, sino también la implementación de mecanismos efectivos de supervisión que garanticen condiciones adecuadas de atención y protección para las personas usuarias. Ello resulta particularmente relevante tratándose de establecimientos residenciales, donde las personas permanecen internadas durante periodos prolongados y se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad derivada de su estado físico, emocional o psicológico.

[8] Gaceta de Cámara de DIputados, Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Salud a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de centros de rehabilitación, febrero de 2024, disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240208-VI-1.pdf#page=2

Actualmente, la regulación aplicable a estos establecimientos se encuentra dispersa entre diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como diversos instrumentos administrativos emitidos por las autoridades sanitarias. No obstante, la evidencia disponible demuestra que persisten importantes desafíos relacionados con la supervisión efectiva de los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones, particularmente en lo relativo a la identificación de centros en operación, el seguimiento de sus condiciones de funcionamiento y la verificación periódica del cumplimiento de la normatividad aplicable. A ello se suma la inexistencia de un mecanismo legal que garantice la incorporación y actualización permanente de la información de los establecimientos que prestan estos servicios, lo que dificulta que las autoridades sanitarias cuenten con un universo cierto de los centros en operación y ejerzan una supervisión efectiva sobre ellos.

La propia Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ha señalado que únicamente una proporción reducida de los establecimientos identificados en el país cumple plenamente con las disposiciones normativas vigentes, situación que limita la capacidad institucional para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, calidad en la atención y respeto a los derechos humanos de las personas usuarias.

A esta problemática se suman hallazgos recientes que evidencian las consecuencias de la insuficiente regulación y supervisión de los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones. En julio de 2026, un reportaje de Reporte Índigo documentó que la ausencia de mecanismos efectivos de control ha propiciado la operación de establecimientos en los que presuntamente se han cometido actos de tortura, malos tratos, internamientos involuntarios y otras violaciones a derechos humanos. Asimismo, el reportaje advierte que algunos de estos espacios han sido aprovechados por grupos de la delincuencia organizada para el reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, lo que pone de manifiesto que la falta de supervisión no sólo representa un problema sanitario, sino también un riesgo para la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de las personas usuarias.[9]

Estos hechos evidencian que la ausencia de un registro completo y actualizado de los establecimientos residenciales, aunada a las limitaciones en los mecanismos de supervisión, dificulta la actuación oportuna de las autoridades sanitarias para prevenir riesgos, detectar irregularidades y garantizar condiciones mínimas de funcionamiento conforme a la legislación aplicable.

[9] Reporte Índigo, 'Anexos' en México: falta de regulación facilita tortura, abusos y reclutamiento criminal https://www.reporteindigo.com/nacional/anexos-en-mexico-falta-de-regulacion-facilita-tortura-abusos-y-reclutamiento-criminal-20260702-0003.html

Asimismo, distintos análisis académicos han advertido que los procesos de violencia, exclusión y desintegración comunitaria asociados al fenómeno de las adicciones generan afectaciones que trascienden el ámbito individual e impactan directamente a las familias y comunidades. Como ha señalado el antropólogo Claudio Lomnitz, la violencia deteriora las redes de interdependencia y apoyo que permiten la cohesión social, debilitando los mecanismos comunitarios necesarios para afrontar problemáticas complejas y persistentes.[10]

El mismo antropólogo Claudio Lomnitz, ha documentado la existencia de centros de rehabilitación de las adicciones o "anexos" utilizados por grupos de la delincuencia organizada ya sea para el reclutamiento de jóvenes o para mantener sumergidos en las adicciones a jóvenes de organizaciones rivales.[11]

A partir de entrevistas realizadas en Zacatecas a trabajadores de centros de rehabilitación, docentes y jóvenes vinculados a contextos de violencia criminal, el autor documenta testimonios que describen cómo organizaciones criminales habrían utilizado a menores de edad para introducir drogas sintéticas en entornos escolares y expandir redes de consumo entre adolescentes. Asimismo, analiza la manera en que las escuelas, los barrios y las redes juveniles pueden convertirse en espacios estratégicos para la expansión de mercados de drogas y para la incorporación progresiva de jóvenes a economías criminales.[12]

Lomnitz señala que estos espacios concentran a personas en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica, muchas de las cuales han tenido contacto previo con redes de narcomenudeo, consumo problemático o violencia criminal. El autor advierte que, en contextos de débil supervisión, estos establecimientos pueden convertirse en puntos de reclutamiento, sometimiento y control ejercidas por organizaciones delictivas sobre jóvenes.[13]

Asimismo, se han señalado presuntos casos de reclutamiento y utilización de jóvenes consumidores por parte de grupos criminales, así como denuncias recientes documentadas en distintas entidades federativas respecto de la extracción forzada o captación de personas internadas en centros de rehabilitación. Aunque estos casos no permiten afirmar la existencia de una práctica generalizada, sí aportan elementos suficientes para valorar si

[10] Claudio Lomnitz, "México: el tejido roto", Nexos, abril de 2021. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=54499
[11] Claudio Lomnitz, *Antropología de la zona de silencio*, Ciudad de México, Ediciones Era, 2025.
[12] Ibíd, pp. 130-133.
[13] Ibíd., pp. 134-136.

existe un vacío institucional en la supervisión de estos establecimientos y en la prevención de riesgos asociados al reclutamiento criminal.[14]

De la misma manera, en un estudio realizado Pablo Deng Chiw Díaz[15] en cinco anexos no regulados de Baja California Sur, concluyó que muchos de estos establecimientos operan bajo esquemas informales de internamiento y obtención de recursos económicos, documentando prácticas como hacinamiento, trabajos forzados, violencia física, amenazas y mecanismos coercitivos de control.

Como se ha mencionado, si bien en la LXV Legislatura se abordó el tema de los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones, los avances alcanzados no fueron suficientes para atender de manera integral los desafíos que persisten en la materia, continúa siendo necesario fortalecer las herramientas jurídicas que permitan una actuación más eficaz por parte de las autoridades, particularmente mediante el fortalecimiento del padrón nacional de establecimientos, el establecimiento de obligaciones de inscripción y actualización de la información correspondiente, así como el reforzamiento de los mecanismos de verificación sanitaria, además de garantizar condiciones adecuadas de atención para las personas usuarias.

IV. Con el propósito de fortalecer el registro, regulación y supervisión de los establecimientos residenciales para la atención de las adicciones, así como reforzar la protección de las personas usuarias mediante mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública, la presente iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, se propone en la Ley General de Salud:

- **Artículo 192.** Incorporar en el Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia las acciones de regulación, supervisión y seguimiento de los establecimientos que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia. Asimismo, adicionar una fracción III para establecer que los gobiernos de las entidades federativas coadyuven con la Secretaría de Salud en dichas acciones.

- **Artículo 192 Quáter.** Reformar la fracción I para establecer que el padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de

[14] Ibíd., pp. 136-139.
[15] Pablo Deng Chiw Díaz, Lucro y tortura: un acercamiento etnográfico al próspero negocio de los anexos en México, disponible en:https://share.google/JLlLw7r8e7oGe3TLK

prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia deberá mantenerse actualizado. Asimismo, prever la obligación de dichas instituciones y organismos de inscribirse en el padrón y mantener actualizada la información correspondiente, así como ampliar la información que éste deberá contener respecto de su ubicación, modalidad de atención, capacidad instalada, población usuaria atendida y situación regulatoria.

Adicionar una fracción III para establecer la realización de visitas periódicas de verificación sanitaria a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones relativas al padrón y de las disposiciones aplicables en materia de salud, prevención y tratamiento de las adicciones.

Asimismo, adicionar una fracción IV para establecer que, durante dichas visitas, se verifiquen las condiciones que puedan afectar la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas usuarias, conforme a los criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de Salud; y una fracción V para prever que se solicite la participación de las instituciones de seguridad pública cuando, conforme a dichos criterios, se requiera su intervención, en el ámbito de sus respectivas competencias.

- **Artículo 192 Quáter Bis.** Adicionar un artículo para establecer que los establecimientos residenciales que brinden servicios a niñas, niños y adolescentes deberán garantizar la protección integral de este grupo poblacional, observando el principio del interés superior de la niñez.

  Prever que dichos establecimientos deberán contar con programas de atención especializados, espacios diferenciados de los destinados a personas adultas, personal capacitado y medidas de protección para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños y adolescentes, así como permitir las visitas de verificación sanitaria y proporcionar la información que les sea requerida.

De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se propone:

- Adicionar, dentro de las funciones de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, respectivamente, la de coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias.

V. A continuación se ofrece un cuadro comparativo con las propuesta de modificación planteadas en esta iniciativa:

Ley General de Salud.	
Texto vigente	**Texto propuesto**
Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia. Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. De conformidad con los términos	**Artículo 192.-** La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, **así como las acciones de regulación, supervisión y seguimiento de los establecimientos que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia**, y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia. Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. De conformidad con los términos

establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de: I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; ~~y~~ II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos. **SIN CORRELATIVO**	establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de: I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos**, y** **III. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en las acciones de supervisión y seguimiento de los establecimientos que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, en términos de las disposiciones aplicables.**
Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá:	**Artículo 192 Quáter.-** Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, ~~que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y~~	I. Crear **y mantener actualizado** un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, **quienes deberán inscribirse en dicho padrón y mantener actualizada la información correspondiente, el cual contendrá las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, así como información relativa a su ubicación, modalidad de atención, capacidad instalada, población usuaria atendida y situación regulatoria;**
II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.	**II.** Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen**;**
SIN CORRELATIVO.	**III. Realizar visitas periódicas de verificación sanitaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción I del presente artículo, así como de las disposiciones aplicables en materia de salud, prevención y tratamiento de las adicciones;** **IV. Verificar, durante las visitas previstas en la fracción anterior, las condiciones que puedan afectar la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas usuarias, conforme a los criterios que**

	para tal efecto establezca la Secretaría de Salud; y **V. Solicitar la participación de las instituciones de seguridad pública cuando, conforme a los criterios previstos en la fracción anterior, se requiera su intervención, en el ámbito de sus respectivas competencias.**
SIN CORRELATIVO	**Artículo 192 Quáter Bis.- Los establecimientos residenciales que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia y que brinden servicios a niñas, niños y adolescentes deberán garantizar la protección integral de este grupo poblacional, observando en todo momento el principio del interés superior de la niñez. Para tal efecto, deberán contar, al menos, con:** **I. Programas de atención especializados acordes con la edad, desarrollo y necesidades específicas de las personas menores de edad;** **II. Espacios diferenciados de aquellos destinados a la atención de personas adultas;** **III. Personal con capacitación para la atención de niñas, niños y adolescentes en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones;** **IV. Medidas de protección que salvaguarden su integridad física, psicológica y emocional; y** **V. Permitir las visitas de verificación sanitaria que realicen las autoridades**

	competentes y proporcionar la información que les sea requerida para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública	
Texto vigente	**Texto propuesto**
Artículo 49. Los cuerpos de policía de la Secretaría, de sus órganos administrativos desconcentrados, de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional se consideran Instituciones Policiales de la Federación, y tienen las siguientes funciones: I. a VI. … ~~VII. Aquellas otras que establezca la demás legislación aplicable.~~	Artículo 49. Los cuerpos de policía de la Secretaría, de sus órganos administrativos desconcentrados, de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional se consideran Instituciones Policiales de la Federación, y tienen las siguientes funciones: I. a VI. … **VII. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias;** **VIII. Aquellas otras que establezca la demás legislación aplicable.**
Artículo 50. Las Instituciones Policiales de las entidades federativas tendrán las siguientes funciones: I. a XI. …	Artículo 50. Las Instituciones Policiales de las entidades federativas tendrán las siguientes funciones: I. a XI. …

~~XII. Las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normas aplicables.~~	**XIII. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias; y** **XII. Las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normas aplicables.**
Artículo 52. Las Instituciones Policiales de los municipios, cuando cuenten con ellas y de conformidad con la legislación local aplicable, tendrán las siguientes funciones: I. a IV. … ~~V. Las demás establecidas en otra normativa aplicable.~~ …	**Artículo 52.** Las Instituciones Policiales de los municipios, cuando cuenten con ellas y de conformidad con la legislación local aplicable, tendrán las siguientes funciones: I. a IV. … **V. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias, y** **VI. Las demás establecidas en otra normativa aplicable.** …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo y las fracciones I y II del artículo 192; se reforman las fracciones I y II y se adicionan las fracciones III, IV y V al artículo 192 Quáter; y se adiciona un artículo 192 Quáter Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, **así como las acciones de regulación, supervisión y seguimiento de los establecimientos que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia**, y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos;

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos**, y**

III. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en las acciones de supervisión y seguimiento de los establecimientos que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y

entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá:

I. Crear **y mantener actualizado** un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, **quienes deberán inscribirse en dicho padrón y mantener actualizada la información correspondiente, el cual contendrá las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, así como información relativa a su ubicación, modalidad de atención, capacidad instalada, población usuaria atendida y situación regulatoria;**

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen**;**

III. Realizar visitas periódicas de verificación sanitaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción I del presente artículo, así como de las disposiciones aplicables en materia de salud, prevención y tratamiento de las adicciones;

IV. Verificar, durante las visitas previstas en la fracción anterior, las condiciones que puedan afectar la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas usuarias, conforme a los criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de Salud; y

V. Solicitar la participación de las instituciones de seguridad pública cuando, conforme a los criterios previstos en la fracción anterior, se requiera su intervención, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 192 Quáter Bis.- Los establecimientos residenciales que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia y que brinden servicios a niñas, niños y adolescentes deberán garantizar la protección integral de este grupo poblacional, observando en todo momento el principio del interés superior de la niñez. Para tal efecto, deberán contar, al menos, con:

I. Programas de atención especializados acordes con la edad, desarrollo y necesidades específicas de las personas menores de edad;

II. Espacios diferenciados de aquellos destinados a la atención de personas adultas;

III. Personal con capacitación para la atención de niñas, niños y adolescentes en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones;

IV. Medidas de protección que salvaguarden su integridad física, psicológica y emocional; y

V. Permitir las visitas de verificación sanitaria que realicen las autoridades competentes y proporcionar la información que les sea requerida para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones VII del artículo 49 y V del artículo 52, recorriéndose en su orden las subsecuentes, y se adiciona una fracción XII al artículo 50, recorriéndose la actual fracción XII para quedar como XIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 49. Los cuerpos de policía de la Secretaría, de sus órganos administrativos desconcentrados, de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional se consideran Instituciones Policiales de la Federación, y tienen las siguientes funciones:

I. a VI. …

VII. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias;

VIII. Aquellas otras que establezca la demás legislación aplicable.

Artículo 50. Las Instituciones Policiales de las entidades federativas tendrán las siguientes funciones:

I. a XI. …

XIII. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias; y

XII. Las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normas aplicables.

Artículo 52. Las Instituciones Policiales de los municipios, cuando cuenten con ellas y de conformidad con la legislación local aplicable, tendrán las siguientes funciones:

I. a IV. …

V. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes, en las visitas de verificación sanitaria a que se refiere el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en los términos previstos en dicho ordenamiento y en el ámbito de sus respectivas competencias, y

VI. Las demás establecidas en otra normativa aplicable.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad pública, contará con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir los criterios y demás disposiciones administrativas, así como realizar las adecuaciones normativas, administrativas y operativas necesarias para su cumplimiento, incluidas aquellas relativas a la coordinación y participación de las instituciones de seguridad pública en las visitas de verificación sanitaria previstas en el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

TERCERO. Las instituciones y organismos públicos y privados que, a la entrada en vigor del presente Decreto, realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia deberán inscribirse en el padrón previsto en el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud y proporcionar la información necesaria para su integración y actualización, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Así mismo, la Secretaría de Salud deberá integrar y mantener actualizado el padrón previsto en el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud con la información recabada conforme

al presente Decreto, procurando su disponibilidad para consulta pública en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales.

ATENTAMENTE



Dip. Pablo Vázquez Ahued
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
LXVI Legislatura
Septiembre de 2026

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DURANTE CONTINGENCIAS AMBIENTALES, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito, Diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de facultades extraordinarias de las entidades federativas durante contingencias ambientales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México enfrenta un incremento sostenido en la frecuencia e intensidad de contingencias ambientales derivadas del cambio climático, los incendios

forestales, la contaminación atmosférica, las olas de calor, las emisiones industriales extraordinarias y los fenómenos hidrometeorológicos extremos.[1]

Este fenómeno ha sido documentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el cual advierte que el calentamiento global incrementa la probabilidad e intensidad de eventos extremos, afectando de manera creciente a los países con alta vulnerabilidad climática como México[2].

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres han señalado un aumento en la ocurrencia de sequías, ciclones tropicales, inundaciones y olas de calor durante la última década[3].

Durante los últimos años, diversas zonas metropolitanas del país, particularmente el Valle de México, Monterrey y Guadalajara, han experimentado episodios recurrentes de mala calidad del aire, mientras que numerosas regiones han enfrentado incendios forestales de gran magnitud, escasez de agua y eventos climáticos extraordinarios. Estas situaciones generan impactos directos en la salud pública, la economía, la movilidad, la actividad industrial y los ecosistemas.[4]

---

[1] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1
[2] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, disponible en: https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
[3] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1
[4] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/pronostico-meteorologico-y-de-calidad-del-aire

Si bien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conserva atribuciones sobre diversas fuentes fijas de jurisdicción federal y la declaratoria de determinadas contingencias, la coordinación entre órdenes de gobierno continúa dependiendo de mecanismos administrativos cuya oportunidad puede resultar insuficiente frente a eventos de rápida evolución[5].

Esto provoca retrasos en la respuesta gubernamental, duplicidad administrativa y en ocasiones, vacíos de actuación justo cuando la rapidez resulta indispensable para proteger la salud de la población. La experiencia comparada en gestión de riesgos muestra que los sistemas de gobernanza más eficaces son los que habilitan mecanismos extraordinarios de actuación inmediata durante emergencias, sin alterar el reparto constitucional de competencias entre los distintos órdenes de gobierno[6].

La problemática es particularmente evidente en el estado de **Nuevo León**, cuya Zona Metropolitana de Monterrey ha enfrentado de manera recurrente episodios de contaminación atmosférica que han obligado a la activación de alertas y contingencias ambientales[7]. Tan sólo durante 2024, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado emitió diversas declaratorias de **Alerta Atmosférica** por concentraciones elevadas de partículas PM10 y PM2.5, derivadas de emisiones industriales, fuentes móviles, incendios y condiciones meteorológicas adversas[8]. En diversos episodios, la autoridad

---

[5] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/inecc/prensa/inecc-pone-a-disposicion-boletin-de-pronostico-meteorologico-y-de-calidad-del-aire-para-la-toma-de-decisiones-en-medio-ambiente-y-salud

[6] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1

[7] Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), disponible en: https://aire.nl.gob.mx/

[8] Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, disponible en: https://aire.nl.gob.mx/docs/reportes/mensuales/2024/12_Reporte_Diciembre_2024.pdf

estatal exhortó a la industria, a los municipios y a la población a aplicar medidas extraordinarias para disminuir las emisiones contaminantes, evidenciando la necesidad de contar con mayores herramientas jurídicas para actuar de manera inmediata y coordinada cuando la salud de la población se encuentra en riesgo[9].

De acuerdo con información del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, durante distintos periodos de 2024 la mayor parte de las estaciones de monitoreo registraron condiciones de **mala** y **muy mala** calidad del aire[10]. Asimismo, diversos análisis elaborados con base en información oficial del SIMA señalaron que **aproximadamente ocho de cada diez días del primer cuatrimestre de 2024** presentaron niveles de contaminación perjudiciales para la salud de la población.[11] Esta situación ha impactado particularmente a municipios como Apodaca, Juárez, Cadereyta, Escobedo y Santa Catarina, confirmando que las entidades federativas requieren instrumentos legales que les permitan adoptar medidas extraordinarias de manera oportuna sin depender exclusivamente de la intervención federal[12].

Si bien la **Ley Ambiental del Estado de Nuevo León** contempla un régimen de contingencias ambientales y faculta a las autoridades estatales para emitir programas y declaratorias cuando exista un riesgo para la salud o el

---

[9] Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, disponible en: https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_ambiental_del_estado_de_nuevo_leon/
[10] Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), disponible en: https://aire.nl.gob.mx/SIMA2017phpgoogle/mapasimaprbBing_icars.php
[11] N+, disponible en: https://www.nmas.com.mx/nuevo-leon/medio-ambiente/nuevo-leon-vive-8-de-cada-10-dias-contaminados-apodaca-y-juarez-los-mas-afectados/
[12] Gobierno de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/boletines/informara-gobierno-de-nuevo-leon-pronostico-de-calidad-del-aire-refineria-fuente-mas

ambiente,[13] dichas atribuciones encuentran límites cuando las fuentes de contaminación corresponden a actividades reguladas por la Federación, de conformidad con el sistema de distribución de competencias previsto en la **Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente**[14].

En consecuencia, resulta necesario fortalecer el marco de coordinación previsto en la **Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente** para que, durante contingencias ambientales extraordinarias, las entidades federativas puedan adoptar medidas preventivas inmediatas, temporales y proporcionales que garanticen la protección efectiva del **derecho humano a un medio ambiente sano**, reconocido por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[15].

El artículo **4o.** de la Constitución reconoce el **derecho humano a un medio ambiente sano**, mientras que el artículo **73, fracción XXIX-G**, establece un sistema de **concurrencia** entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de protección al ambiente y preservación del equilibrio ecológico[16].

Esto implica que las competencias deben ejercerse de manera **coordinada y complementaria**, particularmente frente a riesgos extraordinarios, conforme a la distribución de atribuciones prevista en la **Ley General del**

---

[13] Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, disponible en: https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_ambiental_del_estado_de_nuevo_leon/
[14] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
[15] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[16] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al principio de coordinación entre órdenes de gobierno[17].

No obstante, la legislación vigente continúa concentrando diversas decisiones en autoridades federales aun cuando las consecuencias de una emergencia ambiental recaen principalmente sobre la población local[18].

Las entidades federativas son las primeras autoridades en responder ante incendios, explosiones industriales, contingencias atmosféricas, derrames de sustancias peligrosas, sequías extremas o episodios de contaminación severa. Sin embargo, su margen de actuación continúa siendo limitado respecto de fuentes fijas federales, actividades industriales estratégicas o medidas extraordinarias de control ambiental, debido al régimen competencial previsto en la legislación ambiental vigente[19].

Fortalecer las capacidades estatales no significa debilitar la rectoría federal, sino establecer mecanismos temporales y excepcionales de actuación inmediata bajo criterios claramente definidos en la ley, en concordancia con el principio de federalismo cooperativo, ampliamente reconocido por la doctrina constitucional y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[20].

---

[17] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
[18] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2017/19/3_210087_4563_firmado.pdf
[19] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
[20] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/environment/country-reviews/

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la gobernanza ambiental moderna requiere mecanismos multinivel que permitan respuestas oportunas y coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, particularmente frente a eventos derivados del cambio climático y la contaminación atmosférica[21].

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha destacado que la gestión de riesgos ambientales debe privilegiar la actuación preventiva, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades locales[22].

La presente iniciativa propone incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente un capítulo específico que establezca facultades extraordinarias para las entidades federativas durante contingencias ambientales oficialmente declaradas, con fundamento en el sistema constitucional de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, y en el deber del Estado de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano reconocido por el artículo 4o. constitucional[23].

Entre dichas facultades destacan:

- Ordenar la suspensión temporal de actividades altamente contaminantes;
- Imponer restricciones extraordinarias a emisiones atmosféricas;

---

[21] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-environmental-performance-reviews-mexico-2013_9789264180109-en.html

[22] Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, disponible en: https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

[23] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- Establecer límites temporales de operación industrial;
- Restringir actividades generadoras de riesgos ambientales;
- Ordenar medidas preventivas inmediatas para proteger la salud pública;
- Coordinar acciones obligatorias entre autoridades estatales, municipales y federales;
- Solicitar información inmediata a empresas responsables de emisiones contaminantes;
- Emitir declaratorias estatales de emergencia ambiental cuando exista riesgo grave e inminente[24].

Todas estas medidas tendrían carácter temporal, proporcional y sujeto a control judicial, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la seguridad jurídica[25].

La reforma permitirá:

- Reducir los tiempos de respuesta ante contingencias ambientales, mediante la adopción de medidas preventivas inmediatas y una mejor coordinación institucional[26];
- Proteger de manera más eficaz la salud de la población, al posibilitar la actuación oportuna de las autoridades frente a riesgos ambientales graves[27];

---

[24] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
[25] Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228
[26] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[27] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf

- Fortalecer el federalismo cooperativo en materia ambiental, favoreciendo una distribución más eficiente de competencias y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno[28];
- Mejorar la coordinación entre Federación, estados y municipios para la atención de contingencias ambientales y la implementación de acciones preventivas[29];
- Incrementar la resiliencia frente al cambio climático mediante el fortalecimiento de la gobernanza multinivel y la capacidad institucional de respuesta[30];
- Prevenir daños irreversibles a los ecosistemas, conforme a los principios de prevención y precaución del derecho ambiental[31];
- Dotar de mayor certeza jurídica a las autoridades responsables de atender emergencias ambientales, al establecer facultades expresas, procedimientos definidos y límites temporales para el ejercicio de medidas extraordinarias[32].

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado un criterio consistente en reconocer que el derecho humano a un medio ambiente sano, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental de eficacia inmediata que impone obligaciones positivas a todas las autoridades, en el ámbito de sus

---

[28] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/better-regulation-for-the-green-transition_c91a04bc-en.html
[29] Ley General de Protección Civil, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf
[30] Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, disponible en: https://www.unep.org/topics/climate-action
[31] Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, disponible en: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
[32] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005766

respectivas competencias, para prevenir, controlar y reparar los daños ambientales. Asimismo, ha señalado que este derecho debe interpretarse conforme a los principios de prevención, precaución, no regresión y equidad intergeneracional, privilegiando la protección más amplia de las personas y de los ecosistemas[33].

Particularmente relevante resulta la Jurisprudencia 1a./J. 158/2025 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2030816, de rubro:

"DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y A LA SALUD PÚBLICA. SU GARANTÍA NO PUEDE CONDICIONARSE A CRITERIOS PURAMENTE ECONÓMICOS."[34]

En este criterio, la Suprema Corte sostuvo que la protección del derecho al medio ambiente sano y de la salud pública constituye un mandato constitucional que prevalece frente a consideraciones exclusivamente económicas, por lo que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos ambientales cuando exista evidencia científica suficiente sobre posibles afectaciones a la población[35].

De igual forma, la Primera Sala estableció que las entidades federativas cuentan con margen de configuración para desarrollar su política ambiental; sin embargo, no pueden establecer parámetros de protección inferiores a los

---

[33] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

[34] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2025-08/Precedentes_y_tesis_1aSala-agosto-2025.pdf

[35] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2025-08/Precedentes_y_tesis_1aSala-agosto-2025.pdf

previstos en las **Normas Oficiales Mexicanas** emitidas por la Federación. Este criterio confirma el modelo constitucional de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución, bajo el cual los estados pueden adoptar medidas complementarias y más protectoras, siempre que respeten los estándares mínimos nacionales.[36].

Asimismo, en el **Amparo en Revisión 640/2019,** la Segunda Sala reconoció que el derecho a un medio ambiente sano no constituye una disposición meramente programática, sino un derecho plenamente exigible que impone a todas las autoridades el deber de garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental y la adopción de medidas eficaces para evitar afectaciones ambientales[37].

En el mismo sentido, el **Amparo en Revisión 71/2016** reafirmó que la protección del medio ambiente constituye un interés colectivo cuya tutela exige la existencia de mecanismos eficaces de prevención, restauración y reparación del daño ambiental, así como la actuación coordinada de las autoridades competentes[38].

Por ello, la presente iniciativa no pretende modificar el régimen constitucional de distribución de competencias, sino fortalec el principio de federalismo cooperativo mediante la incorporación de facultades extraordinarias y temporales para las entidades federativas durante contingencias

---

[36] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[37] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2021-10/AR%20640-2019.pdf
[38] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2016/2/2_193073_3259_firmado.pdf

ambientales, siendo entendidas como aquellas circunstancias excepcionales, derivadas de fenómenos naturales, actividades humanas o fallas tecnológicas, que generen un riesgo inminente o un daño al equilibrio ecológico o a la salud de la población, las cuales serán declaradas por las autoridades ambientales locales o regionales competentes de cada zona metropolitana o entidad federativa, permitiéndoles adoptar medidas inmediatas de protección dentro del marco de coordinación previsto por la Constitución y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente[39].

Jurisprudencia que conviene citar en el apartado de referencias

1. **Jurisprudencia 1a./J. 158/2025 (11a.)**
   - **Registro digital: 2030816**
   - **Rubro: *Derecho a un medio ambiente sano y a la salud pública. Su garantía no puede condicionarse a criterios puramente económicos.***
2. **Tesis de la Primera Sala (2025)**
   - **Registro digital: 2030851**
   - **Rubro: *Las entidades federativas no pueden establecer parámetros de contaminación más laxos que las Normas Oficiales Mexicanas para la activación de fases de contingencia ambiental.* Este criterio es especialmente relevante porque sustenta la reforma: los estados pueden actuar en materia ambiental, pero respetando el piso mínimo de protección fijado por la Federación.**

---

[39] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

3. **Amparo en Revisión 640/2019**

- **Derecho humano al medio ambiente sano como derecho fundamental plenamente exigible y participación ciudadana en asuntos ambientales.**

4. **Amparo en Revisión 71/2016**

- **Protección colectiva del medio ambiente y deber del Estado de establecer mecanismos eficaces para prevenir y reparar el daño ambiental.**

Estas tesis fortalecen la constitucionalidad de la iniciativa, pues respaldan que la creación de facultades estatales extraordinarias durante contingencias ambientales debe entenderse como un mecanismo de protección reforzada, compatible con el principio de concurrencia y sin invadir las competencias federales, siempre que las medidas estatales respeten los estándares mínimos establecidos por la Federación.

En países como Canadá, Australia y España, las autoridades regionales cuentan con facultades para adoptar medidas extraordinarias durante emergencias ambientales y de protección civil, incluyendo restricciones temporales a determinadas actividades, medidas preventivas de mitigación y acciones inmediatas para proteger la salud pública y el medio ambiente, conforme a sus respectivos marcos constitucionales y legales de distribución de competencias[40].

El modelo de **España** reconoce a las comunidades autónomas la facultad de adoptar medidas cautelares de aplicación inmediata cuando exista un riesgo

[40] Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, disponible en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/772857/EPRS_STU(2025)772857_ES.pdf

para la salud pública o el medio ambiente. Estas medidas pueden comprender la suspensión temporal de actividades, la imposición de restricciones operativas o la adopción de acciones preventivas, incluso respecto de instalaciones sujetas al régimen de autorización ambiental integrada, siempre dentro del marco de coordinación con la autoridad estatal y conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. Esta experiencia demuestra que es posible fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades regionales sin menoscabar las competencias del gobierno central[41].

En Canadá las provincias cuentan con atribuciones para emitir órdenes de emergencia ambiental cuando se presentan riesgos graves para la población o los ecosistemas. Dichas órdenes pueden incluir restricciones temporales a las operaciones de industrias contaminantes, la exigencia de medidas inmediatas de mitigación y otras acciones preventivas que permanecen vigentes mientras subsistan las condiciones que dieron origen a la emergencia. Este esquema evidencia que la actuación oportuna de las autoridades subnacionales constituye un elemento esencial para la protección ambiental dentro de un modelo de federalismo cooperativo[42].

De manera similar en **Australia** disponen de facultades para adoptar medidas extraordinarias frente a contingencias ambientales severas, entre ellas la imposición de límites temporales a las emisiones industriales, restricciones en el aprovechamiento de los recursos hídricos y controles sobre determinadas actividades extractivas. Estas atribuciones permiten

---

[41] Boletín Oficial del Estado de España, disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf

[42] Gobierno de Canadá, disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31/

responder con rapidez a situaciones de riesgo, minimizando los daños al medio ambiente y a la salud de la población, sin alterar la distribución constitucional de competencias entre los distintos niveles de gobierno.[43].

Las experiencias comparadas demuestran que es posible fortalecer las capacidades de actuación de las autoridades subnacionales durante contingencias ambientales, sin menoscabar la rectoría del gobierno central ni alterar el régimen constitucional de distribución de competencias. En el caso mexicano, este enfoque encuentra sustento en diversos preceptos de nuestra Constitución, los cuales conforman el marco jurídico de protección ambiental y de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.[44].

En primer término, el artículo 4o. reconoce el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, imponiendo al Estado la obligación de garantizar su respeto y protección[45].

Por su parte, el artículo 25 establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, incorporando criterios de preservación y equilibrio ecológico en las políticas públicas[46].

El artículo 27 consagra el principio del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mientras que el artículo 73, fracción XXIX-G, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de

---

[43] https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc
[44] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[45] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[46] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico[47].

Asimismo, el artículo 115 reconoce las atribuciones de los municipios para participar en la prestación de servicios públicos y en la protección del entorno dentro de su ámbito competencial, y el artículo 124 reafirma el principio federal de distribución de competencias al reservar a las entidades federativas aquellas facultades que no se encuentren expresamente conferidas a la Federación[48].

En conjunto, estos preceptos constitucionales justifican el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, permitiendo que las entidades federativas cuenten con facultades extraordinarias, temporales y claramente delimitadas para responder de manera eficaz ante contingencias ambientales que pongan en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico, sin alterar el diseño constitucional de competencias[49]. Este planteamiento es congruente con el principio de federalismo cooperativo reconocido en el sistema constitucional mexicano y con los principios de prevención y precaución del derecho ambiental internacional. [50].

---

[47] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[48] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[49] Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, disponible en: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
[50] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, disponible en: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer el federalismo cooperativo en materia ambiental mediante el otorgamiento, a las entidades federativas, de facultades extraordinarias, temporales y claramente delimitadas que les permitan responder con mayor oportunidad y eficacia ante contingencias ambientales.

Con ello se busca mejorar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, privilegiar los principios de prevención y precaución, y garantizar una protección más efectiva del derecho humano a un medio ambiente sano, en los términos que se establecen en la siguiente:

PROPUESTA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente	
Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 5o.- Son facultades de la Federación: **I.** a **VI.** ... **VII.-** La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.	**Artículo 5o.-** Son facultades de la Federación: **I.** a **VI.** ... **VII.-** La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan, **así como establecer los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios para la atención inmediata de dichas contingencias, garantizando una**

	respuesta oportuna, eficaz y acorde con los principios de prevención, precaución y concurrencia previstos en esta Ley;
VIII. a XX...	**VIII. a XX...**
XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático~~, y~~	**XXI.-** La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
XXII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.	**XXII.- Autorizar, mediante los mecanismos de coordinación previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, que las entidades federativas adopten, de manera excepcional, temporal y proporcional, medidas preventivas o de mitigación respecto de actividades o fuentes de competencia federal, cuando exista una contingencia ambiental declarada por la autoridad competente que represente un riesgo grave e inminente para la salud de la población, el equilibrio ecológico o los ecosistemas, sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y sanción que correspondan a la Federación, y**

Sin correlativo...	**XXIII.** Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.
Artículo 7. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:	**Artículo 7.** Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I. a **XI.** ...	**I.** a **XI.** ...
XII.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;	**XII.** La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan, **así como la adopción de medidas extraordinarias de carácter temporal y preventivo, en coordinación con la Federación y los municipios, en los términos previstos por esta Ley, cuando exista un riesgo grave para la salud pública, el equilibrio ecológico o los ecosistemas;**
XIII. a XX...	**XIII. a XX...**

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático~~, y~~	**XXI.-** La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
XXII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.	**XXII.-** La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación, **y**
Sin correlativo...	**XXIII. Durante la vigencia de una contingencia ambiental declarada por la autoridad competente, podrán implementar programas emergentes de reducción de emisiones, establecer medidas preventivas inmediatas respecto de las fuentes contaminantes sujetas a su competencia, requerir información técnica a las personas físicas o morales responsables de actividades que generen riesgos ambientales y coordinar acciones con las autoridades federales y municipales para la protección de la salud y del medio ambiente.**

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ÚNICO. Se reforman las VII y XXI del artículo 5, las fracciones XII, XXI y XXII del artículo 7; se adiciona la fracción XXIII al artículo 5 y la fracción XXIII al artículo 7, todo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue

Artículo 5o.- Son facultades de la Federación:

I. a **VI.** ...

VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan, **así como establecer los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios para la atención inmediata de dichas contingencias, garantizando una respuesta oportuna, eficaz y acorde con los principios de prevención, precaución y concurrencia previstos en esta Ley;**

VIII. a XX...

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

XXII.- Autorizar, mediante los mecanismos de coordinación previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, que las entidades

federativas adopten, de manera excepcional, temporal y proporcional, medidas preventivas o de mitigación respecto de actividades o fuentes de competencia federal, cuando exista una contingencia ambiental declarada por la autoridad competente que represente un riesgo grave e inminente para la salud de la población, el equilibrio ecológico o los ecosistemas, sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y sanción que correspondan a la Federación, y

XXIII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Artículo 7. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a **XI.** ...

XII. La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan, **así como la adopción de medidas extraordinarias de carácter temporal y preventivo, en coordinación con la Federación y los municipios, en los términos previstos por esta Ley, cuando exista un riesgo grave para la salud pública, el equilibrio ecológico o los ecosistemas;**

XIII. a XX...

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

XXII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación, **y**

XXIII. Durante la vigencia de una contingencia ambiental declarada por la autoridad competente, podrán implementar programas emergentes de reducción de emisiones, establecer medidas preventivas inmediatas respecto de las fuentes contaminantes sujetas a su competencia, requerir información técnica a las personas físicas o morales responsables de actividades que generen riesgos ambientales y coordinar acciones con las autoridades federales y municipales para la protección de la salud y del medio ambiente.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, las entidades federativas y los municipios, emitirá o adecuará los lineamientos, protocolos y mecanismos de coordinación necesarios para la aplicación de las facultades previstas en los artículos 5 y 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Tercero. Las entidades federativas deberán armonizar, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de protección al ambiente y contingencias

ambientales, a efecto de garantizar el ejercicio coordinado de las facultades previstas en esta Ley.

Cuarto. La Federación y las entidades federativas deberán actualizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los programas de prevención, atención y respuesta a emergencias y contingencias ambientales, incorporando los mecanismos de coordinación, intercambio de información y actuación inmediata previstos en el presente Decreto.

Quinto. Las acciones que deriven de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los recursos humanos, materiales y presupuestarios aprobados a las dependencias y entidades competentes en el Presupuesto de Egresos correspondiente, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para su implementación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2026.

Atentamente

Diputado Eduardo Gaona Domínguez
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cámara de Diputados
LXVI Legislatura

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

El que suscribe, Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Sexta Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción y se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La corrupción en México ha persistido como un fenómeno estructural que socava la confianza ciudadana, la rendición de cuentas y el desarrollo económico. Pese a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2015-2016, subsiste una debilidad crítica: la ausencia de un marco jurídico integral de protección a las personas que denuncian o testimonian hechos de corrupción. Actualmente, quienes se atreven a denunciar enfrentan riesgos de represalias laborales, personales y patrimoniales sin garantías suficientes, lo que inhibe las denuncias y perpetúa la impunidad.

Servidores públicos y ciudadanos con información relevante a menudo optan por el silencio ante el temor fundado de sufrir despidos, hostigamiento o amenazas, debilitando con ello la eficacia del SNA. Esta realidad evidencia una necesidad estructural impostergable: dotar al Estado de un Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, robusto que garantice seguridad y acompañamiento a denunciantes y testigos de corrupción, y así incentivar la denuncia como herramienta de combate a la corrupción.

La propuesta responde a compromisos y recomendaciones internacionales en la materia. Diversos instrumentos internacionales obligan o instan a los Estados a implementar mecanismos efectivos de protección a denunciantes de corrupción. En particular, el Artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) exhorta a adoptar medidas apropiadas para proteger contra

cualquier trato injustificado a quienes denuncien de buena fe hechos de corrupción.

Asimismo, evaluaciones de la OCDE y la OEA han señalado la falta de una legislación específica de protección a denunciantes como una debilidad del sistema anticorrupción mexicano, recomendando subsanarla. Países como Estados Unidos (Ley de Protección del Denunciante), la Unión Europea (Directiva de Protección a los Denunciantes) y naciones latinoamericanas (Brasil, Chile, etc.) han avanzado en la creación de marcos jurídicos para proteger a informantes de actos ilícitos. México *no puede rezagarse* frente a estas tendencias internacionales. El presente proyecto busca cumplir dichas obligaciones internacionales y adoptar mejores prácticas globales, creando un mecanismo integral de protección que eleve los estándares nacionales al nivel de dichos referentes.

En el ámbito interno, la protección al denunciante ha sido incipiente. La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) prevé la posibilidad de denuncias anónimas y sanciona revelar la identidad del denunciante, pero no establece medidas claras de protección ni procedimientos para activarlas. Tampoco la Ley del SNA contempla expresamente una política integral de protección. Esto ha dejado un vacío institucional que desalienta la denuncia y reduce la información disponible para detectar y sancionar actos corruptos.

Reconociendo esta brecha, se han presentado en años recientes iniciativas parciales para proteger denunciantes; por ejemplo, reformas a la LGRA para

sancionar represalias. Sin embargo, estas medidas aisladas resultan insuficientes. Es necesario un enfoque sistémico, articulado en el ámbito federal, que involucre a las autoridades competentes de la Federación (órganos internos de control, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Auditoría Superior de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras) bajo reglas comunes de protección.

Un sistema federal debidamente normado permitirá garantizar la coordinación interinstitucional y la homogeneidad de criterios en la protección de denunciantes en el ámbito federal. La presente iniciativa opta deliberadamente por un ordenamiento de carácter federal: en ausencia de una cláusula constitucional que faculte de manera expresa al Congreso de la Unión para expedir una ley general en esta materia específica, la vía federal asegura la plena regularidad constitucional del nuevo ordenamiento, con fundamento en los artículos 73, fracciones XXIV y XXXII, y 108 a 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que constituya un modelo normativo replicable por las Legislaturas de las entidades federativas en sus respectivos órdenes jurídicos.

El presente proyecto legislativo propone expedir la **Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción**, así como reformar y armonizar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para integrar este nuevo sistema. Los ejes centrales son:

- **a) Mecanismos sólidos de coordinación interinstitucional:** Se establece el Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción como el conjunto articulado de autoridades y procedimientos destinados a la protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción. La nueva Ley Federal define a las autoridades federales facultadas para su aplicación, incluyendo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y obliga a todos los entes públicos federales a colaborar en la implementación de las medidas de protección.

  Asimismo, se prevé que el Comité Coordinador del SNA, con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva, dé seguimiento a la operación del Sistema con base en los informes que rindan las autoridades competentes, privilegiando la protección de los datos personales de las personas denunciantes y evitando la concentración innecesaria de información sensible.

- **b) Activación automática de medidas de protección:** La Ley prevé que las medidas protectoras se otorguen de oficio y de manera inmediata desde el momento en que se presente la denuncia o testimonio si existe situación de riesgo, sin necesidad de esperar la evolución del proceso. Por ejemplo, se preserva automáticamente la confidencialidad de la identidad del

denunciante desde la admisión de la denuncia. Para servidores públicos denunciantes, se prohíben de inmediato actos como destituciones, suspensiones, traslados o cualquier modificación a sus condiciones laborales que pudieran ser retardatorias.

Estas salvaguardas operan en paralelo al procedimiento administrativo principal, de forma autónoma, precisamente para evitar que la persona quede expuesta mientras avanza la investigación. Adicionalmente, se contempla que, si derivado de la denuncia surge la posible comisión de un delito, las autoridades competentes inicien de oficio la protección bajo este esquema y, llegado el caso, coordinen la transición al ámbito penal. En suma, el sistema busca que ninguna denuncia válida quede desprotegida en sus primeras etapas: la activación de medidas es oportuna y preventiva.

- **c) Medidas de protección integrales y graduadas según el nivel de riesgo:** El régimen propuesto es integral, abarcando medidas de distinta naturaleza legales, laborales, psicológicas y de seguridad personal orientadas a salvaguardar la integridad, derechos y bienes de los denunciantes. La Ley enumera un catálogo claro de medidas de protección, que incluyen: reserva de datos personales (anonimato), protección policial en casos de riesgo físico, traslado temporal o cambio de adscripción del denunciante servidor público a otra área segura, asistencia legal gratuita en eventuales procedimientos, acompañamiento psicológico, mecanismos para evitar la comparecencia física (declaración por videoconferencia, etc.),

restricciones de proximidad para impedir acercamiento del inculpado, e incluso la preservación de contratos (en caso de denunciantes contratistas) evitando rescindirlos por represalia.

Estas medidas se adaptarán al nivel de riesgo del caso: la autoridad evaluará la vulnerabilidad del denunciante, la gravedad de las amenazas, la importancia de la información aportada y la trascendencia del caso, para decidir qué medidas otorgar. Se contemplan niveles de riesgo desde amenazas leves hasta riesgo elevado de integridad física, con la posibilidad de escalar la intensidad de protección en consecuencia.

Por ejemplo, medidas extraordinarias como el cambio de domicilio o la utilización de medios tecnológicos en lugar de comparecencia presencial solo se aplicarán en situaciones de riesgo extremo. Esta graduación garantiza eficiencia y proporcionalidad: protección suficiente sin descuidar recursos, enfocada donde más se necesita.

- **d) Obligatoriedad, justiciabilidad y sanciones por incumplimiento:** La propuesta se cuida de que las disposiciones no sean meros lineamientos voluntarios, sino obligaciones legales exigibles. En primer término, todas las autoridades competentes están obligadas por ley a otorgar y ejecutar las medidas de protección decretadas, bajo apercibimiento de sanción en caso de desobediencia.

Para reforzar su cumplimiento, la Ley prevé medidas de apremio: la autoridad que conceda una medida puede emplear desde apercibimientos

hasta multas contra quien obstruya su ejecución. Se establecen también recursos de impugnación para garantizar la justiciabilidad: las resoluciones relacionadas con la protección podrán impugnarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, e incluso acudirse al juicio de amparo cuando se vulneren derechos del denunciante.

En paralelo, el proyecto tipifica y sanciona con mayor contundencia los actos de represalia: se reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que constituya falta administrativa grave cualquier acto de intimidación, discriminación o represalia contra un denunciante por motivo de su denuncia. Revelar la identidad de un denunciante anónimo o no iniciar la investigación de sus señalamientos en plazo también son considerados actos de obstrucción de la justicia sancionables administrativamente. Incluso se prevé, en el ámbito penal, la posibilidad de perseguir conductas de represalia graves bajo tipos delictivos existentes (amenazas, lesiones, etc.). Con ello, el mensaje es claro: la protección al denunciante es obligatoria y su violación será castigada. Las personas bajo protección *no están solas*: cuentan con derechos exigibles ante la ley.

- **e) Continuidad hacia la vía penal y protección de testigos:** La iniciativa reconoce que muchos actos de corrupción configuran delitos y que los denunciantes podrían devenir testigos clave en procesos penales. Por ello, está diseñado con conexión a la materia penal. En primer lugar, forma parte del propio Sistema Nacional Anticorrupción, de modo que el Comité

Coordinador del SNA emitirá la Política Federal de Protección en la materia y asegurará su articulación con las autoridades de procuración de justicia.

La Ley Federal incluye expresamente entre las autoridades aplicadoras a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, previendo así que cuando una denuncia administrativa escale a investigación penal, las medidas de protección continúen vigentes sin solución de continuidad. De hecho, se establece el deber de denunciar ante la autoridad penal competente si en cualquier momento de la investigación administrativa se advierten hechos delictivos.

Una vez en sede penal, los denunciantes protegidos podrán acogerse a las figuras de testigos protegidos o medidas cautelares propias del proceso penal, *sin perder la protección administrativa ya concedida*. Adicionalmente, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) obligará a dicho Tribunal a preservar la identidad y seguridad de los denunciantes/testigos en el juicio de responsabilidades, permitiendo, por ejemplo, desahogar testimonios sin presencia física o reservar datos personales cuando la publicidad del juicio pudiera exponerlos. Esto asegura que la colaboración ciudadana en la denuncia tenga seguimiento y respaldo en todas las instancias, desde la administrativa hasta la judicial penal, cerrando el círculo de protección.

La implementación del Sistema propuesto implica ajustes institucionales pero sus costos son manejables y están justificados por sus beneficios. Gran parte de las

medidas pueden instrumentarse a través de instancias existentes con capacitación y protocolos específicos, por lo que no se creará una burocracia onerosa de nueva creación. Se prevé aprovechar estructuras actuales: el Secretariado Ejecutivo del SNA podría apoyar técnicamente al Comité Coordinador en el seguimiento del Sistema; las contralorías internas fungirán como primer contacto para solicitudes de protección de servidores públicos; y las fiscalías anticorrupción adaptarán sus unidades de atención a víctimas para incluir a denunciantes de corrupción.

El impacto presupuestal inicial será limitado, concentrándose en capacitación, difusión y eventuales medidas de seguridad excepcionales. Estas erogaciones, sin embargo, son una inversión estratégicamente rentable: el costo de proteger denunciantes es ínfimo frente a los montos que se pierden anualmente por corrupción. Además, una vez instaurada la cultura de la denuncia segura, se espera un incremento en la detección oportuna de irregularidades, lo que permitirá ahorros significativos al evitar desvíos de recursos públicos.

En el plano administrativo, el proyecto fortalece la capacidad operativa del Estado: con más denuncias confiables, las autoridades podrán investigar y sancionar más eficientemente, elevando la eficacia del régimen de responsabilidades. Institucionalmente, se consolida el paradigma de cooperación entre entes fiscalizadores, de control interno y de procuración de justicia, alrededor de un objetivo común: proteger a quienes ayudan a combatir la corrupción.

La adopción de este marco normativo tendrá un impacto transversal. Socialmente, se espera una recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones y un

aumento de la participación cívica en la vigilancia de la gestión pública. Saber que el Estado ofrece garantías reales al denunciante animará a más personas honestas a romper el silencio, generando con el tiempo una cultura de denuncia y cero tolerancias a la corrupción.

Políticamente, el mensaje es contundente: se reducen los márgenes de discrecionalidad y *se reafirma el compromiso de las autoridades con la transparencia y la rendición de cuentas*. Se envía una señal institucional de cero tolerancias: en México, denunciar la corrupción no solo *no* será motivo de represalias, sino que será reconocido y protegido por el Estado. Esto contribuye a equilibrar las relaciones de poder entre gobernantes y sociedad, empoderando al ciudadano que actúa con integridad.

A largo plazo, el fortalecimiento del Estado de derecho y la disminución de la impunidad deberán traducirse en un entorno más propicio para el desarrollo económico y la competitividad, pues la corrupción deja de ser *"un mal necesario"* para convertirse en un riesgo cierto para quien la comete. En resumen, esta iniciativa representa un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo institucional basado en la legalidad, la honestidad y la participación ciudadana. Si bien no erradicará por sí sola la corrupción, sí cierra una brecha fundamental en el andamiaje anticorrupción: la protección efectiva de la denuncia ciudadana.

En virtud de lo expuesto, la creación de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción y las reformas complementarias constituyen una oportunidad histórica para afianzar el Sistema

Nacional Anticorrupción y garantizar que ningún ciudadano honesto tema alzar la voz contra la corrupción. Se trata de reconocer legalmente que denunciar es un derecho y un acto de valentía cívica que el Estado debe respaldar. Con un marco robusto de protección, México se alinea con estándares internacionales, cumple sus compromisos en la materia y, sobre todo, da un paso firme hacia un servicio público más íntegro.

Armonización Legislativa

En la presente iniciativa también se modifican ordenamientos secundarios con el propósito de que sus disposiciones guarden congruencia y armonización con la nueva Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción. Las reformas se circunscriben a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Se modifican los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La reforma al artículo 64 precisa que la revelación de la identidad de un denunciante anónimo protegido constituye obstrucción de la justicia, y remite a la legislación aplicable en materia de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción, federal o local según corresponda, para el otorgamiento

de medidas. La reforma al artículo 91 vincula el tratamiento de denuncias anónimas con las medidas de protección previstas en dicha legislación

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: **I.** Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; **II.** No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad	**Artículo 64.** Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: **I.** … **II.** …

competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y	
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta Ley.	**III.** Revelen la identidad de un denunciante anónimo **protegido bajo los preceptos establecidos en la legislación aplicable en materia de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción.**
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables.	Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección en términos de la legislación aplicable en materia de

La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.	protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción, federal o local según corresponda, sin perjuicio de las que deban otorgarse de oficio conforme a dicha legislación. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con	**Artículo 91.** La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras otorgarán las medidas

carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.	de protección necesarias de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción, y mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Se adicionan dos fracciones al artículo **9** (facultades del Comité Coordinador) y una fracción al artículo **35** (funciones del Secretario Técnico) de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Las adiciones tienen por objeto incorporar explícitamente al marco legal del SNA la coordinación del Sistema Federal de Protección al Denunciante y la emisión de la Política Federal de Protección a Denunciantes, como atribuciones propias del Comité Coordinador y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, dotando de base legal expresa a las funciones que dichos órganos ejercerán conforme a la nueva Ley Federal.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: **I. a XVII. …** **XVIII.** Las demás señaladas por esta Ley.	**Artículo 9.** El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: **I. a XVII. …** **XVIII. Coordinar el Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, en términos de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción. Para tal efecto, aprobará la Política Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción con base en**

	la propuesta que elabore la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y emitirá las recomendaciones no vinculantes que correspondan para el fortalecimiento de la protección a denunciantes y testigos en el ámbito federal; **XIX. Conocer, aprobar y publicar el informe anual sobre los avances y resultados del Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con base en los informes que le rindan las autoridades competentes, en los términos previstos en la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, y** **XX. Las demás señaladas por esta Ley.**

Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.	**Artículo 35.** Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:	El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:
I. a XII. …	**I. a XII.** …
	XIII. Elaborar la propuesta de Política Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para su aprobación por el Comité Coordinador, en los términos de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos

	de Corrupción, y dar seguimiento a su implementación por parte de las autoridades federales competentes.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 38, así como una fracción XIII, recorriéndose la actual fracción XIII para quedar como fracción XIV, al artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las adiciones tienen por objeto incorporar de manera expresa la obligación del Tribunal a través de sus Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas y de sus Magistrados instructores de adoptar las medidas necesarias para preservar la identidad, seguridad e integridad de los denunciantes y testigos de hechos de corrupción que intervengan en los procedimientos sancionadores que conoce este órgano jurisdiccional, en congruencia con lo dispuesto en la nueva **Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción**. Con ello, el Tribunal queda expresamente vinculado a las medidas de protección que hubieran sido concedidas en sede administrativa, evitando lagunas de tutela cuando el denunciante deba comparecer en los juicios de responsabilidades administrativas graves. Se prevé expresamente el uso de videoconferencia y otros medios

tecnológicos para el desahogo de testimonios cuando la comparecencia presencial pudiera poner en riesgo la seguridad del declarante.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 38. Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: **A)** Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con las siguientes facultades: **I. a III. …** **B)** Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: **I. a IV. …**	**Artículo 38.** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: **A)** Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con las siguientes facultades: **I. a III. …** **B)** Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:

	I. a IV. … **Cuando en los procedimientos que conozcan las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas intervengan denunciantes o testigos que sean sujetos de protección en términos de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, el Tribunal adoptará las medidas procesales necesarias para preservar su identidad e integridad. En particular, podrá ordenar:** **a) la reserva de los datos personales del compareciente en el expediente, empleando seudónimos o identificadores;** **b) el desahogo del testimonio o diligencia mediante**

	videoconferencia u otros medios tecnológicos que impidan la identificación física del declarante; **c) la celebración de audiencias a puerta cerrada en la parte que corresponda a la intervención del sujeto protegido; y** **d) cualquier otra medida que sea congruente con las otorgadas por la autoridad administrativa competente conforme a la Ley citada.** **Estas providencias no menoscaban el derecho de las partes al debido proceso ni a la debida defensa; en todo caso, el Magistrado instructor velará porque la información esencial para resolver el fondo sea accesible a las partes procesales en la forma que permita respetar simultáneamente la protección otorgada.**

Artículo 39. Los Magistrados instructores de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, tendrán las siguientes atribuciones:	**Artículo 39.** Los Magistrados instructores de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, tendrán las siguientes atribuciones:
I. a XII. …	**I. a XII.** …
XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.	**XIII. Adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas de protección procesales procedentes en favor de los denunciantes o testigos que sean sujetos de protección y que intervengan en el procedimiento sancionatorio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción y con las medidas que hubiera otorgado la autoridad administrativa**

	competente. **Entre dichas medidas, podrá ordenar la reserva de datos personales del denunciante o testigo en todas las actuaciones del expediente, el desahogo de testimonios por videoconferencia u otros medios tecnológicos que eviten su identificación física, y la celebración de audiencias a puerta cerrada en la parte que corresponda.** **El Magistrado instructor comunicará a la autoridad administrativa competente que hubiera otorgado las medidas de protección cualquier incidencia relevante que afecte la seguridad del sujeto protegido durante la tramitación del procedimiento; y** **XIV.** Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales

	aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:

FUNDAMENTO LEGAL

Lo constituyen los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, precisados desde el inicio de este documento.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

DECRETO

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN; SE

REFORMAN LA FRACCIÓN III Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64, ASÍ COMO EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTÍCULO 9, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN XVIII PARA QUEDAR COMO FRACCIÓN XX, Y UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38, Y UNA FRACCIÓN XIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA QUEDAR COMO FRACCIÓN XIV, AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Objeto, Ámbito de Aplicación y Principios

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de aplicación en el ámbito federal en todo el territorio nacional. Tiene por objeto establecer y coordinar las medidas de protección que las autoridades federales deberán otorgar a:

I) Las personas denunciantes de posibles actos de corrupción, y

II) Los testigos u otras personas que aporten información relevante en procedimientos de investigación de faltas administrativas por corrupción.

Estas medidas buscan garantizar la integridad, derechos y esfera jurídica de dichas personas, para que puedan denunciar actos de corrupción en condiciones de seguridad y con plena certeza en el respeto a sus derechos. Para su aplicación coordinada, la presente Ley regula el Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, el cual deriva del deber de protección establecido en este ordenamiento y constituye el conjunto de autoridades, mecanismos y procedimientos del orden federal en la materia.

Artículo 2. El lenguaje empleado en esta Ley se entiende en sentido incluyente y libre de estereotipos de género. Cualquier referencia en género masculino o femenino abarca a todas las personas, en igualdad de circunstancias, promoviendo en todo momento la perspectiva de género en la aplicación de esta Ley.

Artículo 3. Son objetivos de esta Ley:

I. Brindar protección efectiva a denunciantes y testigos de posibles hechos de corrupción en materia administrativa, a fin de incentivar la denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades;

II. Salvaguardar la integridad física, psicológica, laboral, patrimonial y familiar de quienes aporten información sobre actos de corrupción, previniendo y evitando cualquier forma de represalia en su contra;

III. Armonizar la coordinación entre las autoridades federales competentes para la implementación homogénea de medidas de protección, estableciendo procedimientos claros y expeditos para su activación;

IV. Garantizar la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes y testigos, así como la reserva de la información sensible que proporcionen, evitando su divulgación indebida;

V. Fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana en el combate a la corrupción, mediante la creación de un entorno de confianza en el que denunciar no represente un riesgo sino un acto protegido por la ley;

VI. Definir las medidas de protección de carácter legal, laboral, psicológico y de seguridad personal que podrán otorgarse a los sujetos de protección bajo esta Ley, estableciendo criterios para determinar su procedencia según el nivel de riesgo;

VII. Establecer las obligaciones de las autoridades competentes en la recepción de denuncias y en el otorgamiento, ejecución y seguimiento de las medidas de protección, incluyendo mecanismos de coordinación interinstitucional; y

VIII. Determinar consecuencias y sanciones claras frente a actos de intimidación, discriminación, represalia u obstrucción relacionados con la denuncia de actos de corrupción, reforzando la prohibición de tales conductas en el marco jurídico.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Autoridad Investigadora: la instancia facultada para investigar faltas administrativas, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Incluye a las autoridades de investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, del Poder Judicial de la Federación, de los Órganos Internos de Control de los entes públicos federales, así como la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus competencias.

II. Autoridad Substanciadora: la instancia encargada de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad hasta la conclusión de la audiencia inicial, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Corresponde a unidades de las Secretarías, Órganos Internos de Control y Auditoría Superior de la Federación, distintas de la Autoridad Investigadora.

III. Autoridad Resolutora: la instancia competente para resolver las faltas administrativas e imponer sanciones. Tratándose de faltas no graves, será la unidad o servidor público del Órgano Interno de Control designado; para faltas graves de servidores públicos y faltas de particulares, será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

IV. Autoridad Competente en materia de protección: aquella facultada para aplicar la presente Ley, es decir, recibir solicitudes de protección, resolver sobre su otorgamiento, ejecutar las medidas y garantizar su cumplimiento. Las autoridades competentes se enumeran en el Artículo 7 de esta Ley.

V. Autoridad Obligada: cualquier autoridad federal a la que corresponda ejecutar, observar o garantizar una medida de protección decretada en favor de un sujeto de protección. Incluye autoridades de seguridad pública, unidades de recursos humanos u otras que deban colaborar para hacer efectiva la medida otorgada.

VI. Comité: el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para efectos de esta Ley, el Comité desempeña funciones de coordinación estratégica del Sistema Federal de Protección al Denunciante, en los términos previstos en el Título Tercero de este ordenamiento.

VII. Denunciante: la persona física —incluyendo servidores públicos— o el representante de persona moral que pone en conocimiento de la autoridad competente posibles hechos de corrupción, mediante la presentación formal de una denuncia en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de otras disposiciones aplicables. Se considerará denunciante, a los efectos de esta Ley, a quien denuncie una falta administrativa no grave, grave o un hecho de corrupción, siempre que lo haga de buena fe aportando información.

VIII. Testigo: toda persona que posee información o conocimiento relevante sobre posibles hechos de corrupción y que está dispuesta a colaborar con la autoridad competente mediante declaración testimonial, informe, estudio técnico, aportación de documentación o cualquier otro medio de prueba que contribuya a esclarecer los hechos. Se equipará a testigo, para efectos de protección, a cualquier tercero cuyo testimonio o peritaje sea crucial en la investigación de una falta administrativa grave o acto de corrupción.

IX. Hechos de Corrupción: cualquier acción u omisión cometida por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, con la intención de obtener un beneficio indebido, propio o para terceros, o aceptar su promesa, en contravención de la legislación aplicable, particularmente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Incluye las faltas administrativas graves y los actos de particulares vinculados a éstas.

X. Faltas Administrativas: las conductas calificadas como faltas administrativas en el Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, subdivididas en faltas no graves, faltas graves de servidores públicos, y faltas de particulares vinculadas con hechos de corrupción.

XI. Información Sensible: cualquier dato, documento, testimonio, indicio, evidencia técnica o elemento probatorio que pueda ser utilizado para acreditar la existencia de un acto de corrupción o falta administrativa, cuya divulgación indebida podría poner en riesgo la investigación o la seguridad del denunciante o testigo.

XII. Represalias: toda conducta adversa o intimidatoria realizada contra un denunciante o testigo como consecuencia de su denuncia o cooperación en la investigación de hechos de corrupción. Incluye, de manera enunciativa, amenazas verbales o físicas, hostigamiento laboral, despido o cambio injustificado de puesto, difamación, presión social o cualquier otra acción que menoscabe sus derechos por motivo de su participación en la denuncia.

XIII. Medidas de Protección: el conjunto de acciones y providencias, de carácter temporal o permanente, ordenadas por la autoridad competente, orientadas a salvaguardar la vida, integridad, libertad, seguridad, esfera psicológica, patrimonio y condiciones laborales de los denunciantes, testigos y demás personas que aporten información sensible en un proceso de denuncia e investigación de hechos de corrupción.

XIV. Sujetos de Protección: las personas físicas servidores públicos o particulares que hayan denunciado o atestiguado actos de corrupción, o aportado información sensible sobre los mismos, y a quienes se les hayan otorgado medidas de protección conforme a esta Ley. También serán consideradas sujetos de protección, en su caso, los familiares hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad del denunciante o testigo, cuando las medidas se extiendan a ellos.

XV. Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Para efectos de esta Ley, funge como instancia de apoyo técnico y operativo al Comité Coordinador en la coordinación interinstitucional y el seguimiento de la Política Federal de Protección.

XVI. Sistema Federal de Protección al Denunciante (el Sistema): el conjunto de mecanismos, políticas, procedimientos y autoridades del orden federal, coordinados bajo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, en términos de esta Ley.

Artículo 5. Son sujetos obligados al cumplimiento de la presente Ley todos los entes públicos federales, incluidos los órganos constitucionales autónomos de carácter federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. En particular, todas las autoridades y servidores públicos que intervengan en la prevención, detección, investigación, substanciación o sanción

de faltas administrativas deben cumplir las disposiciones de esta Ley y colaborar para la efectiva protección de los denunciantes y testigos. La inobservancia de estas obligaciones acarreará las responsabilidades y sanciones establecidas en la normativa aplicable.

Artículo 6. El otorgamiento, ejecución y seguimiento de las medidas de protección objeto de esta Ley se realizará conforme al procedimiento establecido en la misma. Estas medidas operarán de manera autónoma e independiente de los procedimientos administrativos sancionadores en curso, y tienen por objeto incentivar la cultura de la denuncia y garantizar que la participación ciudadana en el combate a la corrupción no conlleve riesgos para quien aporta información. En ningún caso, la solicitud o el otorgamiento de protección podrán interpretarse en perjuicio de los derechos procesales del denunciado; se buscará siempre equilibrar la tutela de la integridad del denunciante o testigo con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia del investigado.

Capítulo II

Autoridades Competentes y Coordinación Institucional

Artículo 7. En el ámbito de su competencia, son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, denominadas en lo sucesivo Autoridades Competentes del Sistema:

I. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México, a través de sus unidades competentes Órgano Interno de Control de cada dependencia, Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés u homólogas;

II. Las secretarías o contralorías internas de los Poderes Judicial y Legislativo de la Federación, así como los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionales autónomos federales, en lo que toca a la protección de denunciantes en sus respectivos ámbitos;

III. La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones de fiscalización y denuncia de hechos de corrupción;

IV. Los Órganos Internos de Control de los entes públicos federales, incluidas las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado. Los Órganos Internos de Control ejercerán la función de recepción de denuncias, evaluación inicial de riesgo y canalización a la autoridad competente correspondiente para el otorgamiento de medidas; y

V. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de sus Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, en la esfera de protección a denunciantes y testigos cuando intervengan en procedimientos jurisdiccionales por faltas administrativas graves.

Todas estas autoridades deberán actuar de forma coordinada e interinstitucional para cumplir los fines de esta Ley. La aplicación de medidas de protección en sede administrativa no excluye la coordinación con otras instancias; las autoridades deberán comunicarse y coadyuvar para asegurar la continuidad y eficacia de la protección en cada caso.

Artículo 8. Las autoridades federales competentes concurrirán en el cumplimiento de esta Ley. En el marco del Sistema Federal de Protección al Denunciante, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los demás entes públicos federales suscribirán convenios de colaboración, protocolos de actuación y demás instrumentos necesarios para hacer efectiva la coordinación. En particular, se buscará que:

1. Existan canales de comunicación expeditos entre los Órganos Internos de Control y las instancias de seguridad pública para reaccionar rápidamente ante situaciones de riesgo;
2. Se homologuen protocolos de evaluación de riesgo y de implementación de medidas, de modo que un mismo nivel de riesgo detone respuestas similares en diferentes instituciones;
3. Las autoridades federales compartan entre sí información relevante, respetando las normas de confidencialidad, sobre personas protegidas, para evitar duplicidad de medidas o vacíos de protección;
4. Se brinde asistencia recíproca entre las autoridades federales en casos de alto riesgo, previa solicitud fundada; y

5. Se respeten las competencias de cada autoridad, evitando interferencias, pero privilegiando la seguridad de la persona denunciante sobre consideraciones de competencia en casos de urgencia.

Artículo 9. Las autoridades competentes para la aplicación de esta Ley tienen, además de las previstas en sus ordenamientos orgánicos, las siguientes obligaciones específicas:

I. Recibir y admitir las denuncias de hechos de corrupción presentadas ante ellas, garantizando en todo momento la confidencialidad de la identidad del denunciante desde el primer contacto;

II. Orientar activamente al denunciante o testigo sobre la existencia del Sistema de Protección. En el momento de recepción de una denuncia o testimonio, la autoridad receptora deberá informar al interesado sobre su derecho a solicitar medidas de protección si considera que enfrenta riesgos, así como los procedimientos para hacerlo;

III. Canalizar la solicitud de protección a la instancia competente, en caso de que la autoridad que reciba la petición no tenga facultad para resolverla. Ninguna solicitud de medidas podrá ser ignorada o desechada por falta de competencia; la autoridad receptora deberá turnarla de inmediato a la autoridad competente, notificando de ello al solicitante;

IV. Evaluar de manera expedita la situación de riesgo expuesta por el denunciante o testigo, conforme a los criterios establecidos en esta Ley, e

inferir un nivel de riesgo preliminar que guíe la selección de medidas de protección proporcionales;

V. Resolver motivada y fundadamente sobre el otorgamiento o negativa de medidas de protección solicitadas, dentro de los plazos previstos de cinco días hábiles como máximo, salvo casos urgentes que requieran resolución inmediata. En caso de negativa, deberán expresarse claramente las razones y notificarse al solicitante junto con los recursos disponibles para impugnar;

VI. Implementar sin demora las medidas de protección concedidas. Una vez emitido el acuerdo que las otorga, la autoridad obligada deberá ejecutarlas en el menor tiempo posible, garantizando su eficacia. La dilación o negligencia en la ejecución será sancionable;

VII. Mantener la confidencialidad de toda la información relacionada con la solicitud y otorgamiento de medidas de protección. Los expedientes de protección estarán clasificados como reservados en términos de la legislación de transparencia, y solo podrán tener acceso a ellos las autoridades directamente involucradas, el propio sujeto de protección y quienes éste autorice expresamente;

VIII. Dar seguimiento continuo a la situación del sujeto protegido. La autoridad que haya otorgado medidas deberá monitorear periódicamente si subsisten las condiciones de riesgo, para valorar la eventual ampliación, modificación o conclusión de las medidas;

IX. Coordinarse con las demás autoridades cuando la protección involucre a múltiples entidades, articulando la coordinación entre todas las instancias para asegurar que las acciones se implementen armónicamente;

X. Imponer medidas de apremio y dar vista para sanciones, en caso de que algún servidor público obstaculice o incumpla las medidas de protección. Si el desacato persistiera, se dará vista al Órgano Interno de Control respectivo para iniciar las acciones disciplinarias que correspondan;

XI. Proteger los datos personales del denunciante y testigo en todas las actuaciones. En ningún documento público ni base de datos accesible se consignarán nombres, domicilios u otros datos que permitan su identificación, salvo en los registros internos y reservados del Sistema;

XII. No condicionar la protección a la participación testimonial. La concesión de medidas de protección al denunciante no lo obliga a declarar en contra de su voluntad ni puede condicionarse a que se obtenga una sanción o resultado específico en el procedimiento principal;

XIII. Actuar con enfoque diferencial y especializado cuando se trate de personas particularmente vulnerables, tomando en cuenta sus necesidades específicas para garantizar una protección adecuada;

XIV. Informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los casos relevantes y los resultados del Sistema. Las autoridades rendirán informes periódicos a la Secretaría Ejecutiva sobre las medidas de

protección otorgadas, estadísticas de denuncias con protección, dificultades encontradas y áreas de mejora; y

XV. Las demás que se deriven de esta Ley, de sus disposiciones reglamentarias y de los protocolos aprobados en el marco del Sistema.

Capítulo III

Derechos de los Denunciantes y Testigos; y Deber de Protección

Artículo 10. Toda persona servidor público, particular o representante de persona moral que denuncie hechos de corrupción ante autoridad competente, o que funja como testigo o aporte información esencial en un procedimiento de responsabilidad administrativa, tiene derecho a las medidas de protección previstas en esta Ley, cuando se encuentre en situación de riesgo a consecuencia de dicha denuncia o colaboración. Este derecho comprende:

1) **Derecho a solicitar protección:** El denunciante o testigo podrá, en cualquier momento del procedimiento, solicitar las medidas de protección que estime necesarias, dirigiéndose a cualquiera de las autoridades competentes listadas en el Artículo 7, la cual estará obligada a canalizarla adecuadamente.
2) **Derecho a la confidencialidad:** Desde el primer contacto y durante todo el proceso, la identidad y datos personales del denunciante o testigo serán estrictamente confidenciales. Dentro de los expedientes se emplearán códigos o seudónimos cuando así se requiera para su seguridad.

3) **Derecho a la no represalia:** El denunciante o testigo goza del derecho a no ser sujeto de ninguna forma de represalia. Cualquier acto de esta naturaleza dará lugar a sanciones para el responsable e incluso a medidas de protección reforzada.
4) **Derecho a la asistencia y apoyo institucional:** Los sujetos de protección tendrán derecho a recibir orientación y apoyo de las autoridades para hacer valer sus derechos, incluyendo asesoría jurídica gratuita y apoyo psicológico si lo requieren.
5) **Derecho a la información:** El denunciante o testigo protegido tiene derecho a ser informado sobre el estado de su solicitud, las medidas específicas otorgadas, su duración, y cualquier cambio o terminación de éstas.
6) **Derecho a participar en el proceso con seguridad:** Si el denunciante es también parte coadyuvante en el procedimiento, tiene derecho a hacerlo en condiciones seguras, mediante mecanismos que no expongan su identidad ni su integridad.

Estos derechos serán garantizados sin discriminación alguna. Toda persona que denuncie de buena fe merece protección, independientemente del nivel jerárquico del denunciante o de la magnitud del caso.

Artículo 11. Las autoridades competentes tienen la obligación indeclinable de proteger los derechos de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción. Esto incluye conceder oficiosamente medidas de protección desde el momento en que se presente la denuncia o se rinda el testimonio, aun si el

denunciante no las hubiera solicitado, cuando de los hechos se desprenda una situación de riesgo para su persona.

La protección otorgada no condiciona ni prejuzga la actuación del denunciante en el procedimiento principal: brindar protección no implica asumir la veracidad de sus dichos ni anticipar una sanción al denunciado, sino únicamente salvaguardar la integridad de quien colabora con la lucha anticorrupción.

Artículo 12. Las denuncias de posibles actos de represalia contra denunciantes o testigos serán atendidas con prioridad. Cualquier sujeto de protección que sufra un despido, disminución salarial, cambio de adscripción, degradación de funciones, hostigamiento u otro trato adverso derivado de su denuncia, podrá informarlo inmediatamente a la Autoridad competente que conozca de su caso. Dicha autoridad realizará las indagatorias necesarias y, de comprobarse la relación entre la denuncia de corrupción y las represalias sufridas, deberá:

1. Ordenar medidas cautelares para cesar de inmediato la agresión, sin perjuicio de las definitivas que se determinen;
2. Emitir las medidas de protección complementarias que procedan en favor del denunciante afectado;
3. Dar vista al Órgano Interno de Control o autoridad disciplinaria que corresponda, para que inicie procedimiento sancionador contra quien resultare responsable de la represalia, por falta administrativa grave; y
4. Documentar los antecedentes y remitirlos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para su seguimiento.

La persona víctima de represalia recibirá orientación jurídica para hacer valer sus derechos laborales y administrativos. La protección que brinda esta Ley se extiende a estos supuestos, de modo que quien sufre una represalia por denunciar tendrá doble calidad: sujeto protegido por la denuncia original y probable ofendido en la denuncia por represalia.

Artículo 13. La información generada, obtenida o recopilada por las autoridades competentes en aplicación de esta Ley tendrá carácter de información reservada en términos de la legislación de transparencia y protección de datos personales. En particular, los expedientes de personas protegidas, los registros de medidas otorgadas, los datos personales de denunciantes y testigos, y cualquier dato que permita inferir su identidad o ubicación serán estrictamente confidenciales y solo accesibles al personal autorizado. La publicidad de resoluciones o informes del Sistema se hará de forma estadística o anonimizada.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Capítulo I

Inicio del Procedimiento y Evaluación del Riesgo

Artículo 14. Las medidas de protección se otorgarán de oficio y de manera inmediata desde el momento en que la persona haga del conocimiento de la autoridad competente posibles hechos de corrupción y se advierta una situación de riesgo derivada de dicha denuncia o colaboración, sin que sea necesaria solicitud previa. Sin perjuicio de lo anterior, el denunciante, testigo o cualquier persona que aporte información sensible sobre posibles hechos de corrupción y que se encuentre en situación de riesgo derivada de ello, tiene derecho a solicitar las medidas de protección que estime necesarias en los términos de esta Ley. La solicitud podrá presentarse desde el momento de la denuncia o en cualquier etapa posterior, incluso si el procedimiento principal ya concluyó, siempre que persistan riesgos vinculados a aquella colaboración.

La solicitud deberá presentarse preferentemente por escrito, dirigida a la autoridad investigadora que conoce del asunto, o por medios electrónicos establecidos por la autoridad, admitiéndose también en casos urgentes de manera verbal, confirmándola posteriormente por escrito. En la solicitud, el peticionario deberá señalar, bajo protesta de decir verdad:

1. Una descripción de la información aportada o hechos denunciados para acreditar la relevancia y vínculo con corrupción;
2. Los indicios de riesgo o hechos concretos que le hacen temer por su seguridad, como amenazas recibidas, actos de vigilancia o antecedentes de represalias;
3. La identificación de la persona o personas de quienes proviene el riesgo, en la medida de lo posible; de no conocerse, deberá indicarlo;

4. La especificación de las medidas de protección que solicita y a quiénes deberían beneficiar; y
5. Datos de contacto donde pueda recibir notificaciones confidenciales.

Si la solicitud inicial no cumple con alguno de estos requisitos, la autoridad deberá prevenir al solicitante por única vez, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para subsanar la omisión, sin que ello suspenda la adopción de oficio de las medidas urgentes que procedan. Presentada la solicitud, la autoridad receptora le asignará de inmediato un número de expediente confidencial, separado pero vinculado al expediente principal de la denuncia.

Artículo 15. Al recibir una denuncia de posibles hechos de corrupción o una solicitud de protección, la autoridad competente realizará de oficio y sin demora una evaluación preliminar de la situación de riesgo del denunciante, testigo o solicitante, tomando en cuenta al menos los siguientes criterios:

I. La vulnerabilidad particular del solicitante: se considerarán sus circunstancias personales, edad, género, estado de salud, discapacidad o pertenencia a algún grupo vulnerable— que pudieran agravar el riesgo o dificultar su autoprotección;

II. La situación de riesgo referida: se analizará la naturaleza y credibilidad de las amenazas o peligros denunciados, así como el grado de inminencia;

III. Importancia del caso: se valora que casos de corrupción de alto impacto podrían generar reacciones más fuertes contra el denunciante, requiriendo medidas más robustas; y

IV. Trascendencia de la información presentada: se evaluará cuán crítica es la aportación del denunciante o testigo, considerando si su testimonio o prueba es esencial para sancionar la corrupción.

Con base en estos criterios, la autoridad asignará un nivel de riesgo que orientará la selección de las medidas de protección pertinentes. Esta calificación será documental, formará parte del expediente reservado y deberá motivarse brevemente.

Artículo 16. La autoridad competente deberá emitir la resolución que otorgue o niegue las medidas de protección solicitadas dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia o de la solicitud. Si la situación descrita es de alto riesgo inminente, la autoridad deberá resolver de manera inmediata, incluso dentro de las primeras veinticuatro horas, dictando las medidas urgentes antes de formalizar la resolución escrita:

1. **Resolución que concede medidas:** deberá indicar la identidad protegida del solicitante, las medidas específicas otorgadas, la autoridad obligada a ejecutar cada una, la vigencia inicial y las obligaciones de conducta del sujeto protegido. Esta resolución solo será notificada al solicitante y a las autoridades encargadas de su cumplimiento.
2. **Resolución que niega las medidas:** deberá estar debidamente fundada y motivada, explicando por qué la situación planteada no encuadra en los supuestos de la Ley. Se notificará al solicitante informándole los medios de impugnación disponibles. La negativa no

impedirá que se vuelva a solicitar protección si surgen nuevos hechos que incrementen el riesgo.

3. **Solicitudes de mala fe:** si se advierten indicios de que el solicitante ha presentado hechos falsos con el fin de obtener un beneficio indebido, la autoridad podrá rechazar la solicitud e iniciar las acciones administrativas conducentes, cancelando de inmediato las medidas que pudieran haberse otorgado provisionalmente.

Artículo 17. Una vez resueltas las medidas, la autoridad competente deberá notificar de forma inmediata y segura al sujeto de protección las medidas concedidas y proporcionarle los datos de contacto de las autoridades encargadas de ejecutarlas. Todo ello se realizará manteniendo la mayor discreción hacia el exterior, de modo que terceros no adviertan que la persona está bajo protección, salvo que alguna medida sea visible por su naturaleza.

Capítulo II

Ejecución de las Medidas de Protección

Artículo 18. Una vez acordadas, las medidas de protección deberán ejecutarse sin dilación. La autoridad obligada designada en la resolución asumirá de inmediato la responsabilidad de hacer cumplir la medida:

I. Si es una medida de orden laboral, la unidad administrativa correspondiente deberá emitir los oficios o acuerdos necesarios en un plazo no mayor a tres días, garantizando que el puesto sea similar en rango y salario para no afectar al servidor público protegido.

II. Si es una medida de seguridad personal, la autoridad de seguridad pública asignada desplegará al personal necesario de inmediato. En caso de restricción perimetral, se notificará al presunto agresor que debe abstenerse de acercarse o comunicarse con el protegido, bajo apercibimiento de sanción.

III. Si es reserva de datos en actuaciones administrativas o jurisdiccionales, la autoridad procedimental dictará acuerdo clasificando la información y empleando seudónimos en los expedientes. Si hubiera audiencias próximas, podrá ordenarse su desahogo mediante videoconferencia donde se protejan la imagen y voz del testigo.

IV. Si es apoyo psicológico o legal, la autoridad deberá canalizar al sujeto de protección con los profesionales competentes, asegurando la gratuidad del servicio para el protegido.

La finalidad primordial es que la protección se haga efectiva antes de que el riesgo se materialice. Durante la ejecución, la autoridad obligada mantendrá comunicación con el sujeto protegido para ajustar detalles prácticos y asegurar que la medida esté cumpliendo su objetivo.

Artículo 19. Las medidas de protección se concederán por el tiempo necesario para mitigar el riesgo, pudiendo ser temporales o, en casos excepcionales, de duración indefinida. Inicialmente, la autoridad fijará un plazo al cabo del cual evaluará la continuación, modificación o cese de la medida. No obstante, si antes del vencimiento el sujeto protegido informa de nuevos hechos que agravan el riesgo, o por el contrario las circunstancias mejoran, la autoridad podrá revisar anticipadamente la medida. En cualquier momento, el protegido puede solicitar una ampliación si estima que la protección es insuficiente, o proponer el cese si ya no la requiere. La protección otorgada durante un procedimiento administrativo podrá mantenerse incluso después de concluido éste, si persisten riesgos para el denunciante o testigo.

Artículo 20. La persona protegida también tiene deberes para con el éxito del programa de protección. Entre ellos:

I. Colaborar con veracidad en la investigación o procedimiento en el que participa, aportando información con buena fe y exactitud;

II. Cumplir las recomendaciones de seguridad que le sean indicadas, para no poner en peligro la eficacia de las medidas;

III. Informar a la autoridad de cualquier hecho nuevo que altere su nivel de riesgo, para que las medidas puedan ajustarse;

IV. No abusar ni hacer uso indebido de la protección otorgada; y

V. Mantener confidencialidad respecto a las medidas que se le otorgan, sin publicitar que cuenta con protección especial para no revelar tácticas o identidades del personal de seguridad.

El incumplimiento grave o reiterado de estas obligaciones por parte del sujeto protegido podría conllevar la revocación de las medidas, previo apercibimiento, si con ello se pone en riesgo al personal protector o se inutiliza el programa. La autoridad evaluará caso por caso, privilegiando siempre la protección de la vida e integridad.

Artículo 21. Las medidas de protección concluirán cuando:

I. El sujeto protegido renuncie expresamente a ellas, manifestando que ya no las requiere;

II. Se verifique que no se cumplen las condiciones que dieron origen a la protección;

III. Fallezca el sujeto de protección;

IV. Se haya dictado resolución definitiva en el proceso principal y la autoridad considere que con ello cesan los riesgos; o

V. Haya transcurrido el plazo por el cual se otorgaron sin que se haya solicitado prórroga y de la evaluación final se concluya que el riesgo ha desaparecido.

En todos los casos, la conclusión se formalizará mediante acuerdo fundado de la autoridad que otorgó la medida, notificándolo al interesado. Si el interesado discrepa de la terminación, podrá impugnar dicha decisión por los medios

conducentes, durante cuyo trámite se podrán mantener las medidas como precautorias.

Artículo 22. En ningún caso, las medidas previstas en esta Ley eximen al sujeto de protección de las responsabilidades administrativas en las que pudiera incurrir de manera independiente. Si un denunciante comete una falta administrativa sin relación con su denuncia, no podrá escudarse en su condición de protegido para evitar la acción de la justicia. Las autoridades deberán manejar esos supuestos con discreción, pero aplicando la ley de manera imparcial.

Artículo 23. Para garantizar la ejecución de sus determinaciones, la autoridad que otorgue una medida de protección podrá emplear las siguientes medidas de apremio contra quienes obstaculicen su cumplimiento:

I. Apercibimiento: llamado de atención formal al servidor público remiso, advirtiéndole de las consecuencias de incumplir la orden de protección;

II. Multa de hasta 2,000 Unidades de Medida y Actualización, por cada evento de incumplimiento o desacato. La imposición de multas reiteradas no exime de cumplir la orden; y

III. En caso de persistencia o gravedad, la autoridad de protección solicitará al superior jerárquico del infractor que intervenga y dará vista al Órgano Interno de Control para que inicie el procedimiento por responsabilidad administrativa grave que corresponda, remitiendo los antecedentes a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para su seguimiento.

Estas medidas de apremio buscan asegurar que las órdenes de protección sean cumplidas sin demora. El compromiso institucional es firme: no se tolerará que una orden de proteger a un denunciante quede letra muerta.

TÍTULO TERCERO

DE LA POLÍTICA FEDERAL DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES

Y TESTIGOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN

Capítulo Único

Política Federal de Protección

Artículo 24. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, formulará y aprobará la Política Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción. Esta política servirá como marco de referencia y coordinación entre todas las instancias involucradas y deberá incluir:

I. Los objetivos estratégicos en la materia;

II. Los lineamientos generales para la evaluación de riesgo, la selección de medidas, la capacitación de funcionarios encargados, la

asignación presupuestal y la supervisión del desempeño del Sistema;

III. Protocolos unificados o mínimos recomendables para la actuación de Órganos Internos de Control al recibir denuncias y manejar solicitudes de protección;

IV. Esquemas de cooperación y asistencia técnica entre las autoridades federales competentes, así como, en su caso, mecanismos de colaboración con las entidades federativas que lo soliciten;

V. Mecanismos de difusión para dar a conocer el Sistema a servidores públicos y ciudadanía; e

VI. Indicadores de resultado y metas anuales para dar seguimiento a la implementación de la política.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción elaborará una propuesta inicial de dicha política en un plazo no mayor a noventa días a partir de la publicación de este Decreto, para someterla a aprobación del Comité Coordinador. Una vez aprobada, la política será revisada y actualizada periódicamente con base en la experiencia y los resultados obtenidos.

Artículo 25. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción incluirá en su informe anual un apartado específico sobre los avances y resultados del Sistema Federal de Protección al Denunciante. Dicho apartado, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con base en los informes que le rindan las autoridades competentes, deberá contener datos como: número de personas protegidas en el año, tipo de medidas más otorgadas, distribución por

sectores, desafíos enfrentados, incumplimientos sancionados y recomendaciones para fortalecer el Sistema. El Comité podrá emitir en cualquier momento recomendaciones no vinculantes dirigidas a las autoridades federales competentes para mejorar la protección de denunciantes, las cuales deberán ser atendidas conforme a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

TÍTULO CUARTO

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 26. Las resoluciones, actos u omisiones de las autoridades competentes en la aplicación de esta Ley podrán ser impugnados por el solicitante o el sujeto de protección mediante los recursos y medios que prevé la legislación administrativa general. En particular, serán aplicables de forma supletoria:

I. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de recurso de revisión, para impugnar las resoluciones administrativas que nieguen, modifiquen o den por concluidas medidas de protección. Únicamente el solicitante o el sujeto de protección tendrán interés jurídico para interponer dicho recurso ante la misma autoridad que emitió la resolución.

II. El juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación contra actos u omisiones que vulneren los derechos del denunciante o testigo establecidos en esta Ley.

Durante la tramitación de los recursos o juicios, el denunciante podrá solicitar al órgano resolutor la adopción de medidas cautelares para que, provisionalmente, se le otorgue o mantenga la protección mientras se decide el fondo. Las resoluciones que otorguen medidas de protección no admitirán medio de impugnación alguno por parte de la persona señalada como responsable de los hechos denunciados ni de terceros, y la interposición de cualquier recurso o juicio no suspenderá la ejecución de las medidas otorgadas.

Artículo 27. En lo no previsto expresamente por la presente Ley, resultarán aplicables de manera supletoria la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y demás disposiciones vinculadas. Siempre que haya duda interpretativa, deberá optarse por la alternativa que brinde mayor protección a los derechos del denunciante o testigo, en congruencia con el objeto de esta Ley y los principios constitucionales de promoción y protección de los derechos humanos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción III y el segundo párrafo del artículo 64, así como el segundo párrafo del artículo 91, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo **protegido bajo los preceptos establecidos en la legislación aplicable en materia de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción.**

Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección en términos de la legislación aplicable en materia de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción, federal o local según corresponda, sin perjuicio de las que deban otorgarse de oficio conforme a dicha legislación. **La solicitud deberá ser**

evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras **otorgarán las medidas de protección necesarias de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción**, y mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 9, recorriéndose la actual fracción XVIII para quedar como fracción XX; y se adiciona una fracción XIII al artículo 35 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

I. a XVII. …

XVIII. Coordinar el Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, en términos de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción. Para tal efecto, aprobará la Política Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción con base en la propuesta que elabore la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y emitirá las recomendaciones no vinculantes que correspondan para el fortalecimiento de la protección a denunciantes y testigos en el ámbito federal;

XIX. Conocer, aprobar y publicar el informe anual sobre los avances y resultados del Sistema Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con base en los informes que le rindan las autoridades competentes, en los términos previstos en la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, y

XX. Las demás señaladas por esta Ley.

Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:

I. a XII. …

XIII. Elaborar la propuesta de Política Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para su aprobación por el Comité Coordinador, en los términos de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, y dar seguimiento a su implementación por parte de las autoridades federales competentes.

ARTÍCULO CUARTO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 38; y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual fracción XIII para quedar como fracción XIV, al artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 38. Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de:

A) …

B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:

I. a IV. …

Cuando en los procedimientos que conozcan las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas intervengan denunciantes o testigos que sean sujetos de protección en términos de la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, el Tribunal adoptará las medidas procesales necesarias para preservar su identidad e integridad. En particular, podrá ordenar:

a) la reserva de los datos personales del compareciente en el expediente, empleando seudónimos o identificadores;

b) el desahogo del testimonio o diligencia mediante videoconferencia u otros medios tecnológicos que impidan la identificación física del declarante;

c) la celebración de audiencias a puerta cerrada en la parte que corresponda a la intervención del sujeto protegido; y

d) cualquier otra medida congruente con las otorgadas por la autoridad administrativa competente conforme a la Ley citada.

Estas providencias no menoscaban el derecho de las partes al debido proceso ni a la debida defensa; en todo caso, el Magistrado instructor velará porque la información esencial para resolver el fondo sea accesible a las partes procesales en la forma que permita respetar simultáneamente la protección otorgada.

Artículo 39. Los Magistrados instructores de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, tendrán las siguientes atribuciones:

I. a XII. …

XIII. Adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas de protección procesales procedentes en favor de los denunciantes o testigos que sean sujetos de protección y que intervengan en el procedimiento sancionatorio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción y con las medidas que hubiera otorgado la autoridad administrativa competente.

Entre dichas medidas, podrá ordenar la reserva de datos personales del denunciante o testigo en todas las actuaciones del expediente, el desahogo de testimonios por videoconferencia u otros medios tecnológicos que eviten su identificación física, y la celebración de audiencias a puerta cerrada en la parte que corresponda.

El Magistrado instructor comunicará a la autoridad administrativa competente que hubiera otorgado las medidas de protección cualquier incidencia relevante que afecte la seguridad del sujeto protegido durante la tramitación del procedimiento; y

XIV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

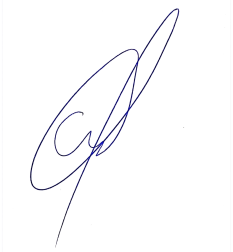
SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción elaborará, dentro de los noventa días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, la propuesta de Política Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, para someterla a aprobación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

TERCERO. Las erogaciones que, con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Comité Coordinador del Sistema Nacional

Anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos durante el presente ejercicio fiscal ni se generarán compromisos de gasto que impliquen modificaciones a la estructura programática autorizada.

CUARTO. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa realizará las adecuaciones a su Reglamento Interior y a los protocolos de sus Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, en lo que corresponda al cumplimiento del presente Decreto, dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2026.



DIPUTADO ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL NORTE, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito, Diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad pública constituye una de las funciones esenciales del Estado mexicano y representa una condición indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática. Sin embargo, las transformaciones experimentadas por la delincuencia organizada durante las últimas décadas han modificado profundamente la naturaleza de los riesgos que enfrentan las instituciones de seguridad, obligando a replantear los mecanismos de coordinación previstos en el marco jurídico vigente[1].

[1] Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cnspe/2024/

La violencia y la delincuencia organizada han evolucionado hacia estructuras criminales altamente especializadas, con capacidad financiera, logística y tecnológica para operar de manera simultánea en diversas entidades federativas. A diferencia de los esquemas tradicionales de criminalidad, las organizaciones delictivas actuales desarrollan sus actividades mediante redes regionales e interestatales que trascienden los límites político-administrativos de los municipios e incluso de las entidades federativas, aprovechando las diferencias institucionales, la fragmentación operativa y la falta de interoperabilidad entre las corporaciones de seguridad[2].

Actualmente, los grupos criminales utilizan corredores carreteros, vías ferroviarias, puertos fronterizos, cruces internacionales, aeropuertos, zonas industriales, parques logísticos y áreas metropolitanas para desarrollar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, armas de fuego, personas migrantes, hidrocarburos, mercancías ilícitas, recursos financieros de procedencia ilegal, robo al transporte de carga, extorsión, secuestro, robo de vehículos, delitos cibernéticos y lavado de dinero[3].

La realidad territorial de México demuestra que las principales dinámicas económicas y sociales del país se desarrollan en zonas metropolitanas integradas por diversos municipios que comparten infraestructura estratégica, sistemas de transporte, corredores industriales, parques tecnológicos, aduanas, centros de distribución y una intensa movilidad cotidiana de

---

[2] Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Gobierno de México, 06 de julio de 2020; disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica-238637

[3] Promover el desarrollo del ecosistema de semiconductores en México; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 27 de febrero de 2026; disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/promoting-the-development-of-the-semiconductor-ecosystem-in-mexico_02c81dec-en/full-report/understanding-the-policy-and-regulatory-landscape_01546ba3.html

personas y mercancías. Esta integración territorial genera importantes ventajas competitivas, pero también incrementa los riesgos asociados a la delincuencia organizada cuando no existen mecanismos eficaces de coordinación institucional[4].

Particularmente en la región norte del país, la seguridad metropolitana adquiere una dimensión estratégica por la concentración de infraestructura industrial, manufacturera y logística vinculada al comercio internacional. Las zonas metropolitanas de Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Saltillo, La Laguna, Reynosa-Río Bravo, Nuevo Laredo y Matamoros constituyen algunos de los principales motores económicos de México. En conjunto concentran una parte significativa de la producción manufacturera nacional, de las exportaciones industriales, de la inversión extranjera directa y de la infraestructura aduanera que conecta al país con los mercados internacionales[5].

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el acelerado proceso de relocalización de cadenas globales de suministro (*nearshoring*) han fortalecido aún más la importancia estratégica de la frontera norte. Miles de empresas nacionales y extranjeras han decidido establecer nuevas inversiones en esta región debido a su cercanía con el principal mercado de exportación del país, la disponibilidad de infraestructura logística y la consolidación de ecosistemas industriales altamente competitivos. No obstante, el éxito de este proceso depende, en gran medida, de la existencia de condiciones de seguridad, certeza jurídica y gobernanza

[4] Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2025; Consejo Nacional de Población; Gobierno de México 26 de enero de 2018, disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
[5] Ídem

institucional que permitan proteger las inversiones y garantizar la continuidad de las cadenas de suministro[6].

En este contexto, la inseguridad constituye uno de los principales factores que limitan la competitividad regional. La incidencia de delitos como el robo al autotransporte de carga, la extorsión, el robo de mercancías, el bloqueo de carreteras y el tráfico ilícito de bienes produce elevados costos económicos para las empresas, incrementa las primas de seguros, desincentiva nuevas inversiones y afecta directamente la productividad de las cadenas de valor instaladas en el norte del país[7].

Uno de los principales desafíos institucionales radica en que la actuación de las autoridades de seguridad pública continúa organizada bajo criterios predominantemente territoriales y administrativos, mientras que los fenómenos delictivos operan mediante una lógica regional y metropolitana. La fragmentación de competencias entre Federación, entidades federativas y municipios provoca que las estrategias de prevención, inteligencia e investigación se desarrollen con distintos criterios operativos, sistemas tecnológicos incompatibles y capacidades institucionales desiguales[8].

---

[6] Estudios económicos de la OCDE: México 2024; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 27 de febrero de 2024; disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-mexico-2024_b8d974db-en/full-report/component-6.html

[7] Promover el desarrollo del ecosistema de semiconductores en México; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 27 de febrero de 2026, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/promoting-the-development-of-the-semiconductor-ecosystem-in-mexico_02c81dec-en/full-report/understanding-the-policy-and-regulatory-landscape_01546ba3.html

[8] Estudios Económicos de la OCDE: México 2019; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2019/05/oecd-economic-surveys-mexico-2019_24b7956d/fde7bbbe-es.pdf

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, dichos instrumentos fueron concebidos bajo un esquema general de cooperación institucional y no responden plenamente a las necesidades específicas de las grandes zonas metropolitanas fronterizas, donde la movilidad cotidiana de millones de personas y mercancías exige sistemas permanentes de inteligencia compartida, interoperabilidad tecnológica y planeación regional[9].

La ausencia de un marco jurídico especializado para la coordinación metropolitana de la seguridad pública genera duplicidad de funciones, dispersión de recursos, intercambio limitado de información estratégica y vacíos institucionales que son aprovechados por las organizaciones criminales para trasladar sus actividades de un municipio a otro o de una entidad federativa a otra, dificultando su persecución y debilitando la capacidad de respuesta del Estado mexicano[10].

Por ello, resulta indispensable transitar hacia un modelo de gobernanza metropolitana de la seguridad pública que permita consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios que integran las principales regiones metropolitanas del norte del país. Dicho modelo debe privilegiar la inteligencia regional, el intercambio oportuno de información, la interoperabilidad tecnológica, la homologación de protocolos operativos, la evaluación mediante indicadores comunes y la

---

[9] Red Nacional Metropolitana, Quinta Edición; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Gobierno de México, 18 de enero de 2024, disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/red-nacional-metropolitana-quinta-edicion

[10] Conoce los beneficios de pertenecer a una zona metropolitana; Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno de México, 08 de junio de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/conoce-los-beneficios-de-pertenecer-a-una-zona-metropolitana

planeación estratégica conjunta, fortaleciendo las capacidades institucionales sin invadir las competencias constitucionales[11] de cada orden de gobierno[12].

El marco constitucional mexicano reconoce que la seguridad pública constituye una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, quienes deben actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Asimismo, la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública deben coordinarse a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de desarrollar políticas, estrategias y acciones conjuntas para prevenir e investigar los delitos, así como para preservar el orden y la paz públicos[13].

En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las conferencias nacionales, los registros administrativos, la Plataforma México, los sistemas nacionales de información y diversos instrumentos de colaboración institucional[14].

---

[11] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

[12] Estudios Territoriales de la OCDE: Valle de México, México; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 15 de octubre de 2015; disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-territorial-reviews-valle-de-mexico-mexico_9789264245174-en.html

[13] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

[14] Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf

No obstante, si bien dicho ordenamiento ha permitido fortalecer la coordinación nacional en materia de seguridad pública, su diseño responde principalmente a una lógica de coordinación vertical entre Federación, entidades federativas y municipios, así como a la distribución tradicional de competencias administrativas. En consecuencia, no incorpora un esquema jurídico especializado que atienda las necesidades particulares de las zonas metropolitanas, donde los fenómenos delictivos operan de manera simultánea en múltiples municipios, e incluso entre distintas entidades federativas y regiones fronterizas[15].

Esta situación resulta especialmente relevante en la región norte del país, donde las áreas metropolitanas constituyen espacios funcionales altamente integrados por la movilidad cotidiana de personas, mercancías, servicios e infraestructura estratégica vinculada al comercio internacional. En estos territorios, la actuación de las organizaciones criminales responde a una lógica regional que rebasa los límites político-administrativos de cada municipio, aprovechando las diferencias operativas entre corporaciones policiales, las limitaciones en el intercambio de información y la ausencia de mecanismos permanentes de planeación conjunta[16].

Por otra parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano reconoce jurídicamente la existencia de zonas metropolitanas y prevé instrumentos de coordinación para materias como movilidad, infraestructura, desarrollo urbano y planeación territorial; sin

---

[15] Diario Oficial de la Federación, 16 de mayor de 2019; disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#gsc.tab=0

[16] Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015; Consejo Nacional de Población; Gobierno de México, 26 de enero de 2018; disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015

embargo, no incorpora a la seguridad pública como un componente estratégico de la gobernanza metropolitana, ni establece mecanismos específicos para la coordinación policial, la inteligencia regional o la gestión conjunta de riesgos en estos territorios[17].

Como consecuencia, actualmente no existe en el orden jurídico federal una ley especializada que permita establecer mecanismos permanentes para:

- Generar sistemas de inteligencia criminal de alcance metropolitano;
- Compartir bases de datos e información operativa en tiempo real entre instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- Ejecutar operativos regionales permanentes con protocolos homologados;
- Coordinar estrategias metropolitanas de prevención del delito y persecución criminal;
- Homologar estándares tecnológicos, sistemas de videovigilancia y plataformas de análisis criminal;
- Administrar Centros Metropolitanos de Comando, Control, Inteligencia, Comunicaciones y Cómputo (C5 Metropolitanos) con cobertura regional;
- Establecer indicadores comunes para evaluar el desempeño institucional y la incidencia delictiva en las zonas metropolitanas;
- Coordinar la inversión pública destinada al fortalecimiento de infraestructura tecnológica y equipamiento para la seguridad metropolitana[18].

La ausencia de estos instrumentos genera importantes áreas de oportunidad en la coordinación institucional. La duplicidad de funciones, la dispersión de

---

[17] Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU.pdf

[18] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/acuerdos-normateca-del-sesnsp?idiom=es

recursos públicos, la limitada interoperabilidad de los sistemas de información, la heterogeneidad de los protocolos policiales y la falta de órganos permanentes de coordinación dificultan la formulación de estrategias regionales integrales y reducen la capacidad del Estado para responder de manera eficaz frente a fenómenos delictivos cuya operación es esencialmente metropolitana[19].

Asimismo, organismos internacionales han señalado que los principales desafíos de las zonas metropolitanas modernas requieren modelos de gobernanza basados en la cooperación intergubernamental, el intercambio permanente de información, la interoperabilidad tecnológica y la planeación estratégica regional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado que la fragmentación institucional entre distintos niveles de gobierno representa uno de los principales obstáculos para mejorar la seguridad, la competitividad y la gestión eficiente de las grandes áreas metropolitanas[20].

En este contexto, resulta evidente la necesidad de dotar al Estado mexicano de un marco jurídico especializado que fortalezca la coordinación metropolitana en materia de seguridad pública, respetando el régimen constitucional de distribución de competencias, pero incorporando instrumentos modernos de inteligencia, coordinación operativa, interoperabilidad tecnológica, evaluación regional y gobernanza metropolitana

[19] Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2025/
[20] Estudios Territoriales de la OCDE: Valle de México, México; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; 15 de octubre de 2015, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-territorial-reviews-valle-de-mexico-mexico_9789264245174-en.html

que permitan responder eficazmente a los desafíos de seguridad que enfrentan las principales regiones del norte del país.

Es necesario mencionar que México atraviesa uno de los procesos de transformación económica más relevantes de las últimas décadas como consecuencia de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y del fenómeno conocido como *nearshoring* o relocalización de procesos productivos. Las tensiones geopolíticas, la necesidad de reducir costos logísticos, las lecciones derivadas de la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de cadenas de suministro más resilientes han llevado a numerosas empresas multinacionales a trasladar parte de sus operaciones hacia países con ventajas geográficas, comerciales y productivas. En este contexto, México se ha consolidado como uno de los principales destinos para la inversión extranjera directa orientada a abastecer el mercado de América del Norte, gracias a su ubicación estratégica, su amplia red de tratados comerciales y, particularmente, al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La región norte del país concentra buena parte de las ventajas competitivas asociadas a este proceso. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Sonora han experimentado un crecimiento sostenido en proyectos de inversión vinculados a la industria automotriz, de electromovilidad, semiconductores, dispositivos médicos, electrónica, manufactura avanzada, logística y tecnologías de la información. Estas entidades albergan algunos de los corredores industriales y logísticos más importantes del país, así como la mayor infraestructura aduanera y de comercio exterior con los Estados Unidos, lo que las convierte en un punto

estratégico para el establecimiento de nuevas plantas productivas y centros de distribución internacional[21].

La Secretaría de Economía ha señalado que el fenómeno del *nearshoring* representa una oportunidad histórica para incrementar la inversión extranjera directa, fortalecer las exportaciones, generar empleos de alto valor agregado e impulsar el desarrollo regional. De manera complementaria, el denominado Plan México identifica a la frontera norte como una de las regiones prioritarias para consolidar polos de desarrollo industrial, infraestructura logística y cadenas de proveeduría nacional, con el propósito de incrementar la competitividad del país en el contexto de América del Norte[22].

No obstante, el aprovechamiento de esta oportunidad depende no solamente de la disponibilidad de infraestructura física, capital humano y capacidad productiva, sino también de la existencia de condiciones de seguridad pública, Estado de derecho y gobernanza institucional que otorguen certidumbre a las inversiones de largo plazo. Diversos organismos internacionales coinciden en que la seguridad constituye un componente esencial del clima de negocios, al incidir directamente en la continuidad de las operaciones productivas, la protección de activos, la movilidad del personal, la integridad de las cadenas logísticas y la reducción de costos asociados a la delincuencia[23].

En este sentido, la OCDE ha advertido que México podrá aprovechar plenamente el potencial del *nearshoring* únicamente si fortalece sus

---

[21] Información Económica 2024; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/

[22] Plan México; Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida; Proyectos México Oportunidades de Inversión; Gobierno de México, disponible en: https://www.proyectosmexico.gob.mx/plan-mexico/

[23] Indicadores de gobernanza a nivel mundial; Grupo Banco Mundial, disponible en: https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators

instituciones, mejora el Estado de derecho, reduce los costos derivados de la inseguridad y desarrolla mecanismos eficaces de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, destaca que la calidad institucional, la certeza jurídica, la seguridad y la eficiencia gubernamental constituyen factores determinantes para atraer y retener inversión extranjera directa en sectores estratégicos de alta tecnología y manufactura avanzada[24].

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que el proceso de relocalización industrial representa una oportunidad sin precedentes para América Latina; sin embargo, advierte que la consolidación de estas inversiones requiere fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la logística, garantizar el cumplimiento del Estado de derecho y reducir los riesgos asociados a la inseguridad[25].

En el ámbito nacional, diversos estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que la seguridad pública y la certeza jurídica se encuentran entre los factores más relevantes para la toma de decisiones de inversión, especialmente en industrias intensivas en capital y tecnología. Del mismo modo, el Banco Mundial ha reconocido que la calidad de las instituciones, la gobernanza y la seguridad jurídica constituyen elementos indispensables para mejorar la productividad, reducir los costos de transacción y fomentar un crecimiento económico sostenido[26].

---

[24] Estudios económicios de la OCDE: México 2024; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 27 de febrero de 2024; disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-mexico-2024_b8d974db-en.html

[25] Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023; Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 29 de noviembre de 2023, disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/67989-estudio-economico-america-latina-caribe-2023-financiamiento-transicion

[26] Índice de Competitividad Estatal 2025; Centro de Investigación en Política Pública; 09 de junio de 2025, disponible en: https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2025/

En consecuencia, la seguridad pública debe entenderse como un componente estratégico de la política de desarrollo económico y no únicamente como una función policial. En regiones altamente integradas como las zonas metropolitanas del norte del país, la existencia de mecanismos permanentes de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios permite fortalecer la protección de la infraestructura crítica, garantizar la continuidad de las cadenas de suministro, reducir los riesgos operativos para las empresas y generar condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera.

Por ello, una política moderna de coordinación metropolitana en materia de seguridad pública no sólo contribuye a prevenir y combatir la delincuencia, sino que constituye un instrumento de competitividad regional, desarrollo económico y fortalecimiento del federalismo cooperativo. La consolidación de esquemas de inteligencia compartida, interoperabilidad tecnológica, planeación regional y coordinación operativa fortalecerá la confianza de los inversionistas, incrementará la resiliencia de las cadenas productivas y permitirá que los beneficios derivados del T-MEC y del fenómeno del *nearshoring* se traduzcan en mayores niveles de crecimiento económico, empleo, bienestar y prosperidad para las regiones fronterizas y para el país en su conjunto[27].

La creciente complejidad de los fenómenos delictivos asociados a la delincuencia organizada, el terrorismo, el crimen transnacional y los delitos que afectan las cadenas logísticas ha llevado a diversos países a desarrollar

[27] Oropeza García, Arturo; La oportunidad de un nuevo desarrollo económico y social para México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; UNAM, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7437/22.pdf

modelos de coordinación regional y metropolitana que trascienden la organización tradicional de las instituciones policiales. La experiencia internacional demuestra que, frente a amenazas que operan simultáneamente en distintos territorios, la respuesta institucional más efectiva consiste en establecer mecanismos permanentes de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, compartir información de inteligencia en tiempo real y coordinar estrategias operativas bajo un esquema de gobernanza multinivel[28].

En términos generales, los modelos comparados coinciden en que la seguridad pública debe abordarse desde una perspectiva regional cuando los fenómenos delictivos exceden las fronteras administrativas de una ciudad, un municipio o una entidad federativa. Por ello, las políticas contemporáneas de seguridad privilegian la interoperabilidad tecnológica, la inteligencia compartida, la homologación de protocolos, la planeación conjunta y la evaluación mediante indicadores comunes como elementos esenciales para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado[29].

En los Estados Unidos, la coordinación regional constituye uno de los pilares de la estrategia nacional de seguridad interior. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno Federal impulsó la creación de los Fusion Centers o Centros Regionales de Inteligencia, espacios permanentes donde confluyen agencias federales, estatales, locales, tribales y, en determinados casos, autoridades del sector privado para compartir

---

[28] Exámenes de la OCDE sobre las políticas de gestión de riesgos; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-risk-management-policies_19934106.html

[29] The Gobernance of _Land Use in OECD Countries, Policy Analysis and Recommendations; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017; disponible en: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/05/the-governance-of-land-use-in-oecd-countries_g1g74afc/9789264268609-en.pdf

información estratégica, analizar riesgos y coordinar respuestas frente a amenazas relacionadas con el terrorismo, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos cibernéticos y otras actividades criminales. Estos centros operan bajo estándares nacionales de interoperabilidad y permiten la integración oportuna de inteligencia para apoyar la toma de decisiones de las autoridades de seguridad pública[30].

Adicionalmente, en las regiones fronterizas funcionan diversas High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) y Joint Task Forces, que articulan esfuerzos entre el gobierno federal, los estados y las autoridades locales para combatir organizaciones criminales que operan en corredores logísticos de alcance interestatal, fortaleciendo la coordinación operativa y el intercambio de inteligencia[31].

Otro ejemplo es Canadá, ya que ha desarrollado uno de los modelos más avanzados de cooperación fronteriza mediante los Integrated Border Enforcement Teams (IBETs), integrados por la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), la Canada Border Services Agency (CBSA), autoridades policiales provinciales y municipales, así como agencias estadounidenses como el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA) y la U.S. Customs and Border Protection (CBP). Estos equipos realizan investigaciones conjuntas, operaciones coordinadas y análisis compartido de inteligencia para combatir el crimen organizado

[30] Centros de fusión; Centro de Seguridad de Estados Unidos; Homeland Security, disponible en: https://www.dhs.gov/fusion-centers
[31] Zonas de tráfico de drogas de alta intensidad; Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos; septiembre de 2025, disponible en: https://www.hidtaprogram.org/

transfronterizo, el tráfico ilícito de mercancías, personas, armas y drogas, así como otras amenazas a la seguridad regional[32].

El modelo canadiense destaca por privilegiar la coordinación permanente entre instituciones con competencias distintas, evitando la duplicidad de funciones y fortaleciendo la capacidad operativa mediante estructuras flexibles de colaboración interinstitucional.

También está el caso de España, este país ha consolidado un esquema de coordinación multinivel derivado de su organización territorial autonómica. El Sistema de Seguridad Pública permite la actuación coordinada entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas —como los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra—, así como las policías locales, mediante órganos permanentes de coordinación, juntas de seguridad, sistemas compartidos de información y protocolos operativos homologados. Este modelo facilita la actuación conjunta frente a fenómenos criminales que afectan simultáneamente a distintas comunidades autónomas y fortalece la eficiencia en la prevención, investigación y persecución de delitos complejos[33].

Asimismo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) integra información proveniente de múltiples instituciones para elaborar análisis estratégicos y coordinar acciones contra organizaciones criminales y amenazas de alcance nacional e internacional.

---

[32]Definición de integridad fronteriza; Real Policía Montada de Canadá; Centro de Policía Canadiense, disponible en: https://rcmp.ca/en/federal-policing/border-integrity/border-integrity-defined

[33] Ley Orgánica 2/1986; Gobierno de España, disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/1986/03/13/2/con

Alemania, de igual forma, ha desarrollado mecanismos permanentes de coordinación entre la Federación y los Länder para enfrentar fenómenos delictivos que trascienden las competencias territoriales de cada estado. Destacan los Gemeinsame Zentren o Centros Conjuntos, donde participan la Policía Federal (Bundespolizei), la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt), autoridades de los estados federados y organismos especializados en inteligencia y control fronterizo.

Asimismo, la Conferencia Permanente de ministros del Interior (Innenministerkonferenz) constituye un foro institucional para acordar políticas comunes, homologar estrategias operativas, fortalecer el intercambio de información y coordinar acciones entre los distintos cuerpos policiales. Este modelo ha permitido desarrollar estándares nacionales para la interoperabilidad tecnológica y la cooperación interestatal en materia de seguridad pública[34].

Las experiencias internacionales descritas muestran que la coordinación territorial constituye uno de los principales instrumentos para enfrentar con eficacia los delitos de alto impacto y las amenazas derivadas del crimen organizado. A pesar de las diferencias en la organización política y administrativa de cada país, todos estos modelos comparten elementos comunes: estructuras permanentes de coordinación intergubernamental, sistemas integrados de inteligencia, plataformas tecnológicas interoperables,

[34] Ministerio Federal del Interior de Alemania, disponible en: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/nationale-und-internationale-zusammenarbeit/grenzueberschreitende-polizeiliche-zusammenarbeit/grenzueberschreitende-polizeiliche-zusammenarbeit-node.html

protocolos homologados, evaluación basada en indicadores y mecanismos institucionales para la planeación estratégica regional[35].

En este sentido, la propuesta de crear una Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte retoma las mejores prácticas internacionales para fortalecer el federalismo cooperativo en materia de seguridad pública, sin alterar la distribución constitucional de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. La iniciativa busca establecer un modelo de coordinación metropolitana que permita responder de manera más eficaz a los desafíos que plantea la delincuencia organizada en las principales regiones fronterizas del país, incorporando instrumentos modernos de inteligencia compartida, interoperabilidad tecnológica, coordinación operativa y gobernanza regional.

La evolución de los fenómenos delictivos, el crecimiento de las zonas metropolitanas y la consolidación de corredores industriales y logísticos en la región norte del país hacen indispensable modernizar los instrumentos jurídicos mediante los cuales el Estado mexicano coordina las acciones de seguridad pública entre los distintos órdenes de gobierno. Si bien el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha fortalecido la cooperación institucional durante las últimas décadas, los desafíos que enfrentan actualmente las áreas metropolitanas requieren un esquema especializado que permita articular capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia bajo una perspectiva regional, respetando en todo momento el régimen constitucional de distribución de competencias[36].

---

[35] Naciones Unidas; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, disponible en: https://www.unodc.org/unodc/index.html

[36] Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp.htm

La presente iniciativa tiene por objeto expedir una **Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte**, concebida como un instrumento de coordinación intergubernamental que fortalezca el federalismo cooperativo y permita atender, de manera integral, los fenómenos delictivos que trascienden los límites municipales y estatales. Su propósito no es modificar las atribuciones constitucionales de la Federación, las entidades federativas o los municipios, ni crear nuevos niveles de gobierno, sino establecer mecanismos permanentes de coordinación que hagan más eficiente el ejercicio de las facultades que actualmente corresponden a cada autoridad[37].

En este sentido, la iniciativa propone la creación de **Regiones Metropolitanas de Seguridad**, definidas conforme a criterios funcionales, territoriales, económicos y de movilidad, que permitan diseñar estrategias regionales acordes con la realidad operativa de las principales zonas metropolitanas del norte del país. Estas regiones constituirán espacios institucionales para la planeación conjunta, la coordinación operativa y el intercambio permanente de información entre las autoridades responsables de la seguridad pública[38].

Asimismo, se propone la integración de **Consejos Metropolitanos de Seguridad**, como órganos permanentes de coordinación política y técnica, integrados por representantes de la Federación, los gobiernos estatales y los municipios que conformen cada región metropolitana. Dichos Consejos tendrán la responsabilidad de aprobar estrategias regionales de seguridad,

---

[37] Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/publica-dof-ley-general-de-asentamientos-humanos-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano

[38] Reclasifican metrópolis en México, se establecen 92 nuevas delimitaciones; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Gobierno de México; 19 de octubre de 2023, disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/reclasifican-metropolis-en-mexico-se-establecen-92-nuevas-delimitaciones

definir prioridades operativas, coordinar acciones preventivas y evaluar periódicamente los resultados obtenidos mediante indicadores comunes de desempeño[39].

Con el propósito de fortalecer la capacidad de anticipación del Estado frente a la delincuencia organizada, la iniciativa prevé la creación de **Centros Metropolitanos de Inteligencia**, encargados de integrar, procesar y analizar información estratégica proveniente de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia e inteligencia, favoreciendo el intercambio oportuno de datos y la elaboración de diagnósticos regionales que orienten la toma de decisiones. Este modelo retoma las mejores prácticas internacionales desarrolladas en centros de inteligencia regional implementados en diversos países miembros de la OCDE[40].

De igual manera, la propuesta impulsa la **interoperabilidad tecnológica** entre las instituciones participantes, mediante la homologación de plataformas digitales, sistemas de comunicación, bases de datos y herramientas de análisis criminal. La utilización de estándares tecnológicos comunes permitirá mejorar la capacidad de respuesta institucional, reducir tiempos de reacción y facilitar el intercambio seguro de información estratégica entre los distintos órdenes de gobierno[41].

La iniciativa también contempla mecanismos para coordinar el desarrollo y operación de los sistemas metropolitanos de videovigilancia, con el objeto de

---

[39] Malasia: Mantener un alto crecimiento, impulsar la productividad y mejorar la educación; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 28 de julio de 2026; disponible en: https://www.oecd.org/en.html

[40] Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, disponible en: https://www.dhs.gov/pcrcl-fusion-centers

[41] Interoperabilidad: cómo integrar mis servicios de red digital; Servnet México, 10 de junio de 2025, disponible en: https://www.servnet.mx/blog/interoperabilidad-integracion-de-servicios-de-red-digital

integrar la infraestructura existente en los municipios y entidades federativas mediante plataformas compatibles que permitan una supervisión regional de la incidencia delictiva, el seguimiento de eventos críticos y la atención coordinada de emergencias. Esta medida favorecerá un uso más eficiente de los recursos públicos destinados a infraestructura tecnológica para la seguridad[42].

De igual forma, se propone establecer **protocolos operativos homologados** para la actuación de las instituciones policiales participantes, particularmente en operativos conjuntos, persecución de objetivos prioritarios, atención de emergencias, intercambio de inteligencia y protección de infraestructura estratégica. La homologación de procedimientos contribuirá a disminuir diferencias operativas entre corporaciones y fortalecerá la coordinación institucional en situaciones que requieren una respuesta inmediata y conjunta[43].

Con el propósito de garantizar la viabilidad financiera de los proyectos metropolitanos de seguridad, la iniciativa prevé la posibilidad de constituir **Fondos Metropolitanos de Seguridad**, orientados al financiamiento de infraestructura tecnológica, equipamiento, capacitación, inteligencia, videovigilancia y proyectos estratégicos de alcance regional. Dichos recursos deberán asignarse bajo criterios de transparencia, evaluación y rendición de

[42] Noticias Ámbito, 11 de agosto de 2026; disponible en: https://www.ambito.com/mexico/informacion-general/mexico-instala-mas-1200-camaras-alta-tecnologia-coloca-arcos-inteligentes-y-crea-centro-vigilancia-inedito-vigilar-todas-las-carreteras-federales-y-reducir-0-los-delitos-partir-septiembre-2026-n6309464

[43] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica-238637

cuentas, privilegiando proyectos que generen beneficios compartidos entre los municipios y entidades participantes[44].

Asimismo, la ley permitirá establecer mecanismos permanentes para la **coordinación de operaciones interestatales**, particularmente en corredores industriales, carreteros y fronterizos donde la delincuencia organizada desarrolla actividades que afectan simultáneamente a diversas entidades federativas. La coordinación operativa facilitará el despliegue conjunto de recursos humanos y tecnológicos, así como la ejecución de estrategias regionales para combatir delitos de alto impacto[45].

Otro elemento central de la iniciativa consiste en fortalecer el **intercambio de información criminal** entre las instituciones integrantes del Sistema de Coordinación Metropolitana, favoreciendo la integración de bases de datos interoperables, sistemas de análisis geoespacial, registros administrativos y herramientas de inteligencia que permitan identificar patrones delictivos, anticipar riesgos y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. [46]

Finalmente, la iniciativa incorpora un **Sistema de Evaluación Metropolitana**, sustentado en indicadores comunes de desempeño, metas verificables y mecanismos periódicos de seguimiento que permitan medir la eficacia de las políticas implementadas, identificar áreas de mejora y fortalecer la rendición

---

[44] Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8l0w3ky6d0mTYHUOjm2HNIlgFDbfDOqpyoc2TBlAxgaZJ0X5LvxyvnKgOCcA8xQU2rNfNAYrQ==

[45] El Senado de México vota a favor de entregar la Guardia Nacional al ejército; Associated Press, City News, 9 de septiembre de 2022; disponible en: https://toronto.citynews.ca/2022/09/09/mexicos-senate-votes-to-hand-over-national-guard-to-army/

[46] Hernández García, Sandra; La CDMX homologa acciones de seguridad con estados colindantes; La Jornada, 07 de enero de 2026; disponible en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/07/capital/la-cdmx-homologa-acciones-de-seguridad-con-estados-colindantes

de cuentas. La evaluación permanente constituye una condición indispensable para asegurar que la coordinación institucional produzca resultados tangibles en la reducción de la incidencia delictiva y en el fortalecimiento de la seguridad pública regional[47].

En consecuencia, la presente iniciativa **no propone la creación de nuevas corporaciones policiales, ni modifica el régimen constitucional de competencias previsto en los artículos 21, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**. Su finalidad consiste en dotar al Estado mexicano de un instrumento jurídico especializado que fortalezca la coordinación metropolitana, optimice el uso de los recursos públicos, promueva el intercambio de inteligencia y consolide una gobernanza regional más eficiente para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia organizada en las principales zonas metropolitanas del norte del país[48].

La presente iniciativa encuentra sustento en diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen las bases del sistema federal, la distribución de competencias en materia de seguridad pública, la rectoría del desarrollo nacional y los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

En primer término, el **artículo 21** de la Constitución dispone que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, comprendiendo la prevención de los delitos, la investigación para hacerla efectiva y la sanción de las infracciones

---

[47] Programas de Seguridad Pública 2026-2030: implicaciones para los Municipios; Iniciativa Local, disponible en: https://www.iniciativalocal.org.mx/single-post/programas-de-seguridad-p%C3%BAblica-2026-2030-implicaciones-para-los-municipios

[48] Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en: https://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo96855.html

administrativas, así como la reinserción social de las personas sentenciadas. Asimismo, establece que las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse en los términos que señale la ley, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconociendo expresamente el principio de coordinación como uno de los pilares del modelo constitucional mexicano en esta materia[49].

Por su parte, el **artículo 73, fracción XXIII**, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública, así como para organizar y regular el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta disposición constituye el fundamento competencial directo que habilita al Congreso para expedir una legislación especializada que fortalezca los mecanismos de coordinación institucional cuando las circunstancias nacionales así lo demanden, como ocurre actualmente en las zonas metropolitanas de la frontera norte[50].

De igual manera, el **artículo 115 constitucional** reconoce la autonomía municipal y asigna a los municipios la responsabilidad de prestar el servicio de seguridad pública preventiva mediante sus corporaciones policiales, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con los gobiernos estatales y la Federación. En este sentido, la presente iniciativa respeta plenamente la esfera competencial municipal y propone únicamente instrumentos de coordinación metropolitana que permitan hacer más eficiente el ejercicio de las atribuciones constitucionales de cada autoridad[51].

---

[49] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
[50] Ídem
[51] Ídem

Asimismo, el **artículo 116** establece que las entidades federativas organizarán sus instituciones de seguridad pública conforme a los principios previstos por la Constitución y en coordinación con la Federación y los municipios, fortaleciendo el modelo de federalismo cooperativo que inspira la presente propuesta legislativa[52].

Por otra parte, el **artículo 25 constitucional** reconoce la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y establece la obligación de promover condiciones que permitan el crecimiento económico, la competitividad, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. En ese contexto, la seguridad pública constituye un elemento indispensable para garantizar un entorno favorable a la inversión, la productividad, la operación de las cadenas de suministro y el desarrollo de regiones estratégicas como la frontera norte del país, particularmente ante las oportunidades derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del fenómeno de la relocalización de cadenas productivas (*nearshoring*)[53]

En estrecha relación con lo anterior, el **artículo 26, apartado A**, dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento económico. La coordinación metropolitana en materia de seguridad pública constituye un instrumento de planeación regional que contribuye a fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la gobernanza territorial y consolidar políticas públicas integrales para atender fenómenos

[52] Ídem
[53] Ídem

delictivos que trascienden los límites político-administrativos de los municipios y entidades federativas[54].

Por su parte, el **artículo 40** reafirma que México se constituye como una República representativa, democrática, laica y federal, integrada por entidades federativas libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior. Precisamente bajo este principio de federalismo cooperativo, la presente iniciativa no pretende alterar la distribución constitucional de competencias ni crear nuevas estructuras de gobierno, sino fortalecer los mecanismos de coordinación previstos por la propia Constitución para hacer frente a desafíos comunes que requieren respuestas institucionales articuladas[55].

En concordancia con el texto constitucional, la iniciativa resulta plenamente compatible con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual desarrolla el mandato contenido en el artículo 21 constitucional y establece las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. No obstante, dicha legislación no contempla actualmente un modelo específico de coordinación para las zonas metropolitanas, particularmente aquellas ubicadas en la frontera norte del país, donde convergen fenómenos de movilidad regional, comercio internacional, infraestructura estratégica y delincuencia organizada que requieren instrumentos especializados de gobernanza, inteligencia y coordinación operativa[56].

De igual forma, la iniciativa guarda armonía con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la

---

[54] Ídem
[55] Ídem
[56] Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp.htm

cual reconoce la existencia de zonas metropolitanas como espacios funcionales que requieren mecanismos permanentes de coordinación entre órdenes de gobierno. Sin embargo, dicha legislación se concentra en materias de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad, sin incorporar una regulación específica sobre seguridad pública metropolitana. La presente propuesta busca complementar ese marco jurídico mediante la creación de instrumentos especializados de coordinación institucional, sin generar duplicidad normativa ni invadir competencias constitucionales[57].

En consecuencia, la presente iniciativa encuentra pleno sustento constitucional y legal, al fortalecer los principios de coordinación, colaboración intergubernamental, federalismo cooperativo, planeación democrática y seguridad pública previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contribuyendo al mismo tiempo a consolidar un entorno de seguridad que favorezca el desarrollo económico, la competitividad regional y el Estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa que tiene por objeto expedir la Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte, a fin de fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir y combatir los fenómenos delictivos que trascienden los límites territoriales, mediante mecanismos de inteligencia, intercambio de información, interoperabilidad tecnológica y coordinación operativa, sin alterar

[57] Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/publica-dof-ley-general-de-asentamientos-humanos-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano

las competencias constitucionales de cada orden de gobierno, bajo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se expide la Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte, para quedar como sigue:

LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL NORTE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, en lo relativo a las bases y mecanismos de coordinación que correspondan a la Federación, las entidades federativas y los municipios que integren las Regiones Metropolitanas de Seguridad del Norte.

Tiene por objeto establecer las bases jurídicas, institucionales, técnicas y operativas para la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, prevención del delito, inteligencia, intercambio de información, protección de infraestructura estratégica y atención de fenómenos delictivos que, por su naturaleza, organización, movilidad o efectos, trasciendan los límites territoriales de un municipio o entidad federativa.

La aplicación de esta Ley se realizará en estricto apego a las competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios;

II. Establecer un modelo permanente de gobernanza metropolitana en materia de seguridad pública;

III. Prevenir y combatir los fenómenos delictivos que trasciendan los límites municipales y estatales;

IV. Fortalecer la inteligencia regional y el análisis estratégico de la información criminal;

V. Establecer mecanismos seguros y oportunos de intercambio de información;

VI. Promover la interoperabilidad de las plataformas tecnológicas de seguridad pública;

VII. Homologar protocolos de actuación en operaciones de carácter metropolitano;

VIII. Coordinar los sistemas de videovigilancia y monitoreo regional;

IX. Proteger infraestructura estratégica, corredores logísticos y zonas de importancia económica;

X. Fortalecer la seguridad de las regiones fronterizas;

XI. Mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos de alto impacto;

XII. Optimizar el ejercicio de los recursos públicos destinados a seguridad;

XIII. Establecer indicadores comunes para evaluar los resultados de las políticas metropolitanas de seguridad;

XIV. Fortalecer las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo económico, industrial, comercial y logístico de las regiones del norte del país; y

XV. Contribuir a generar condiciones de seguridad y certeza para la inversión nacional y extranjera, particularmente en las regiones vinculadas con el T-MEC y los procesos de relocalización de cadenas productivas.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Centro Metropolitano de Inteligencia: instancia permanente de coordinación, integración, procesamiento y análisis de información en materia de seguridad pública dentro de una Región Metropolitana de Seguridad;

II. Consejo Metropolitano: órgano de coordinación política, estratégica y operativa de cada Región Metropolitana de Seguridad;

III. Delito de impacto metropolitano: aquel cuya planeación, ejecución, movilidad, organización, persecución o efectos involucren dos o más municipios o entidades federativas integrantes de una Región Metropolitana de Seguridad, sin que esta denominación implique la creación de nuevos tipos penales;

IV. Fondo: Fondo para la Seguridad Metropolitana del Norte;

V. Infraestructura estratégica: instalaciones, redes, sistemas, servicios y bienes cuya afectación pueda comprometer la seguridad, movilidad, actividad

económica, comunicaciones, energía, comercio exterior o funcionamiento esencial de una Región Metropolitana de Seguridad;

VI. Plataforma Metropolitana: sistema tecnológico interoperable para el intercambio, consulta, análisis y procesamiento de información en materia de seguridad pública;

VII. Región Metropolitana de Seguridad: área territorial integrada por municipios de una o más entidades federativas que, por sus características económicas, sociales, territoriales, poblacionales, delictivas, logísticas o de movilidad, requiera mecanismos permanentes de coordinación en materia de seguridad;

VIII. Sistema: Sistema de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte; y

IX. Zona Metropolitana: unidad territorial reconocida conforme a las disposiciones aplicables en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Artículo 4. La coordinación prevista en esta Ley no implicará la creación de un nuevo orden de gobierno, la sustitución de las autoridades constitucionalmente competentes ni la transferencia de las facultades de seguridad pública que correspondan a la Federación, las entidades federativas o los municipios.

Las acciones previstas en esta Ley tendrán carácter de coordinación, cooperación, intercambio de información, planeación conjunta y apoyo institucional.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley se regirá por los principios de:

I. Legalidad;

II. Coordinación;

III. Corresponsabilidad;

IV. Federalismo cooperativo;

V. Prevención;

VI. Proporcionalidad;

VII. Inteligencia;

VIII. Interoperabilidad;

IX. Confidencialidad;

X. Transparencia;

XI. Rendición de cuentas;

XII. Eficiencia;

XIII. Evaluación por resultados;

XIV. Perspectiva regional; y

XV. Respeto irrestricto de los derechos humanos.

Artículo 6. Las autoridades participantes deberán privilegiar la prevención, el intercambio de información, la planeación conjunta y la coordinación operativa, evitando duplicidad de funciones, vacíos de responsabilidad y actuaciones contradictorias entre instituciones.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL NORTE
CAPÍTULO I
DE SU INTEGRACIÓN Y NATURALEZA

Artículo 7. Se crea el Sistema de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte como mecanismo permanente de coordinación institucional entre la Federación, las entidades federativas y los municipios que integren las Regiones Metropolitanas de Seguridad.

El Sistema formará parte de los mecanismos de coordinación previstos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se sujetará a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Artículo 8. El Sistema estará integrado por la persona que determine el titular de:

I. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

II. La Guardia Nacional;

III. La Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus competencias;

IV. El Centro Nacional de Inteligencia;

V. La Secretaría de la Defensa Nacional;

VI. La Secretaría de Marina;

VII. Las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas;

VIII. Las fiscalías o procuradurías de justicia de las entidades federativas;

IX. Los municipios que integren las Regiones Metropolitanas de Seguridad; y

X. Las demás instituciones públicas cuya participación resulte necesaria para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 9. Las instituciones integrantes del Sistema conservarán las atribuciones, facultades y responsabilidades que les confieran la Constitución y las leyes.

La participación en el Sistema no podrá utilizarse como fundamento para asumir atribuciones que correspondan exclusivamente a otra autoridad.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA

Artículo 10. Corresponde al Sistema:

I. Establecer las bases generales de coordinación metropolitana;

II. Formular la Política Nacional de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte;

III. Aprobar el Programa Nacional de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte;

IV. Determinar criterios para la integración de las Regiones Metropolitanas de Seguridad;

V. Promover estrategias regionales de prevención y combate al delito;

VI. Coordinar mecanismos de inteligencia;

VII. Promover la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos;

VIII. Establecer protocolos homologados;

IX. Promover operaciones coordinadas;

X. Establecer mecanismos de protección de infraestructura estratégica;

XI. Establecer indicadores comunes;

XII. Evaluar los resultados de las estrategias metropolitanas;

XIII. Promover mecanismos de capacitación conjunta;

XIV. Impulsar proyectos tecnológicos compartidos; y

XV. Emitir recomendaciones para mejorar la coordinación institucional.

Artículo 11. El Sistema deberá reunirse, por lo menos, dos veces al año y podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando las condiciones de seguridad de una Región Metropolitana así lo requieran.

TÍTULO TERCERO
DE LAS REGIONES METROPOLITANAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
DE SU INTEGRACIÓN

Artículo 12. Las Regiones Metropolitanas de Seguridad constituyen unidades territoriales de coordinación institucional para la prevención, análisis, inteligencia y atención de fenómenos delictivos de impacto regional.

Artículo 13. Las Regiones Metropolitanas de Seguridad podrán comprender:

I. Municipios pertenecientes a una misma entidad federativa; o

II. Municipios pertenecientes a dos o más entidades federativas.

Artículo 14. Para determinar la integración de una Región Metropolitana de Seguridad se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:

I. Continuidad territorial;

II. Conurbación;

III. Movilidad poblacional;

IV. Flujos laborales;

V. Incidencia delictiva;

VI. Corredores carreteros;

VII. Corredores ferroviarios;

VIII. Cruces y puertos fronterizos;

IX. Infraestructura estratégica;

X. Zonas industriales;

XI. Centros logísticos;

XII. Interdependencia económica; y

XIII. Patrones regionales de delincuencia.

Artículo 15. La incorporación o modificación de una Región Metropolitana de Seguridad será aprobada por las autoridades competentes conforme a los criterios establecidos por esta Ley y mediante los convenios de coordinación correspondientes.

TÍTULO CUARTO

DE LOS CONSEJOS METROPOLITANOS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN

Artículo 16. En cada Región Metropolitana de Seguridad se constituirá un Consejo Metropolitano de Seguridad como órgano permanente de coordinación estratégica.

Artículo 17. Cada Consejo estará integrado por:

I. Una representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

II. Una representación de la Guardia Nacional;

III. Las personas titulares de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas participantes o la persona titular del área correspondiente.

IV. Las personas titulares de las fiscalías estatales participantes;

V. Las personas titulares de los municipios integrantes;

VI. Una representación de la Fiscalía General de la República;

VII. Una representación del Centro Nacional de Inteligencia;

VIII. Una representación de la Secretaría de la Defensa Nacional;

IX. Una representación de la Secretaría de Marina; y

X. Las demás autoridades cuya participación sea necesaria.

Artículo 18. El Consejo tendrá una Presidencia de carácter rotativo entre las autoridades estatales y municipales participantes, conforme a las reglas que establezca su reglamento.

La participación de las instituciones federales se sujetará a sus respectivas competencias.

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES

Artículo 19. Corresponde al Consejo Metropolitano:

I. Aprobar el Programa Regional de Seguridad;

II. Identificar los principales riesgos de seguridad de la Región;

III. Establecer prioridades regionales;

IV. Coordinar estrategias de prevención;

V. Proponer operativos conjuntos;

VI. Aprobar protocolos metropolitanos;

VII. Promover el intercambio de información;

VIII. Coordinar los sistemas de videovigilancia;

IX. Proponer proyectos tecnológicos;

X. Supervisar el funcionamiento del Centro Metropolitano de Inteligencia;

XI. Evaluar indicadores;

XII. Aprobar programas de capacitación conjunta;

XIII. Proponer proyectos susceptibles de financiamiento;

XIV. Emitir recomendaciones; y

XV. Elaborar informes públicos sobre los resultados de la coordinación.

Artículo 20. Los acuerdos del Consejo deberán constar en actas y establecer, cuando corresponda:

I. Objetivo;

II. Autoridades responsables;

III. Acciones;

IV. Plazos;

V. Recursos requeridos;

VI. Indicadores de cumplimiento; y

VII. Mecanismos de evaluación.

Artículo 21. Los Consejos celebrarán sesiones ordinarias por lo menos una vez trimestralmente y extraordinarias cuando exista una situación que requiera coordinación inmediata.

Artículo 22. Los Consejos podrán crear comités especializados en:

I. Inteligencia;

II. Prevención;

III. Tecnología;

IV. Videovigilancia;

V. Infraestructura estratégica;

VI. Seguridad fronteriza;

VII. Corredores logísticos;

VIII. Capacitación; y

IX. Evaluación y los demás que se requieran.

TÍTULO QUINTO
DE LOS CENTROS METROPOLITANOS DE INTELIGENCIA
CAPÍTULO I
OBJETO Y FUNCIONES

Artículo 23. En cada Región Metropolitana de Seguridad podrá establecerse un Centro Metropolitano de Inteligencia, como instancia de coordinación técnica para integrar, procesar y analizar información relacionada con la seguridad pública.

Los Centros no constituirán nuevas instituciones policiales ni ejercerán funciones de investigación ministerial reservadas a las fiscalías.

Artículo 24. Los Centros tendrán las siguientes funciones:

I. Elaborar análisis criminal regional;

II. Identificar patrones delictivos;

III. Elaborar mapas de incidencia;

IV. Analizar corredores delictivos;

V. Identificar zonas de riesgo;

VI. Integrar información proveniente de las instituciones participantes;

VII. Generar alertas regionales;

VIII. Elaborar evaluaciones de riesgo;

IX. Apoyar la planeación de operaciones;

X. Identificar objetivos y fenómenos criminales de carácter regional, conforme a las competencias de las autoridades;

XI. Elaborar reportes estratégicos; y

XII. Evaluar resultados y las demás que se requieran.

Artículo 25. Los Centros podrán establecer mecanismos de intercambio de información con:

I. Plataforma México;

II. Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública;

III. Registros Nacionales;

IV. Centros C5;

V. Sistemas estatales;

VI. Sistemas municipales; y

VII. Las demás plataformas autorizadas conforme a la legislación aplicable.

Artículo 26. El tratamiento de la información deberá realizarse bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, finalidad, confidencialidad y seguridad de la información.

Queda prohibido utilizar las plataformas del Sistema para fines distintos de los previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO SEXTO
DE LA PLATAFORMA METROPOLITANA DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
INTEROPERABILIDAD

Artículo 27. Se establece la Plataforma Metropolitana de Seguridad del Norte como mecanismo tecnológico de interoperabilidad para facilitar el intercambio seguro de información entre las instituciones participantes.

Artículo 28. La Plataforma deberá garantizar:

I. Interoperabilidad;

II. Disponibilidad;

III. Integridad;

IV. Confidencialidad;

V. Trazabilidad;

VI. Autenticación;

VII. Control de accesos; y

VIII. Ciberseguridad.

Artículo 29. La Plataforma podrá interoperar, conforme a la legislación aplicable, con:

I. Plataforma México;

II. Registro Nacional de Detenciones;

III. Registro Público Vehicular;

IV. Sistemas C5;

V. Sistemas de videovigilancia;

VI. Sistemas de lectura de placas;

VII. Bases de datos estatales; y

VIII. Sistemas municipales.

Artículo 30. El acceso a la información estará sujeto a perfiles, niveles de autorización y mecanismos de auditoria.

Toda consulta deberá quedar registrada para efectos de control y supervisión.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA VIDEOVIGILANCIA Y TECNOLOGÍA

Artículo 31. Las instituciones participantes promoverán la interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia instalados en las Regiones Metropolitanas de Seguridad.

Artículo 32. La coordinación tecnológica tendrá como finalidad:

I. Detectar incidentes;

II. Dar seguimiento a eventos delictivos;

III. Coordinar emergencias;

IV. Facilitar la respuesta institucional;

V. Identificar patrones de movilidad relacionados con hechos delictivos; y

VI. fortalecer la protección de infraestructura estratégica.

Artículo 33. Los sistemas tecnológicos deberán observar las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales, privacidad y derechos humanos.

TÍTULO OCTAVO
DE LOS PROTOCOLOS Y OPERACIONES METROPOLITANAS

Artículo 34. Las instituciones participantes establecerán protocolos homologados para la atención de fenómenos delictivos de impacto metropolitano.

Artículo 35. Los protocolos podrán comprender:

I. Persecuciones intermunicipales;

II. Operativos interestatales;

III. Atención de emergencias;

IV. Protección de infraestructura estratégica;

V. Atención de amenazas contra corredores logísticos;

VI. Coordinación fronteriza;

VII. Búsqueda de personas;

VIII. Atención de delitos de alto impacto; y

IX. Cualquier otra situación que requiera actuación coordinada.

Artículo 36. La participación de las instituciones en operaciones conjuntas no modificará las facultades legales de cada autoridad.

Cada institución será responsable del personal que se encuentre bajo su mando y de las actuaciones que realice.

TÍTULO NOVENO
DE LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Artículo 37. Las autoridades participantes elaborarán un Programa Metropolitano de Protección de Infraestructura Estratégica.

Artículo 38. Se considerarán prioritariamente:

I. Cruces fronterizos;

II. Aduanas;

III. Aeropuertos;

IV. Carreteras;

V. Vías ferroviarias;

VI. Centros logísticos;

VII. Parques industriales;

VIII. Instalaciones energéticas;

IX. Sistemas de agua;

X. Redes de telecomunicaciones;

XI. Centros de distribución; y

XII. Demás instalaciones cuya afectación pueda generar riesgos regionales.

Artículo 39. El Programa deberá identificar riesgos, establecer protocolos de respuesta y determinar mecanismos de coordinación para prevenir ataques, interrupciones, sabotajes o afectaciones criminales.

TÍTULO DÉCIMO
DE LA PLANEACIÓN METROPOLITANA DE SEGURIDAD

Artículo 40. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las instituciones participantes, elaborará el Programa Nacional de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte.

Artículo 41. El Programa deberá contener:

I. Diagnóstico regional;

II. Objetivos;

III. Estrategias;

IV. Metas;

V. Indicadores;

VI. Acciones prioritarias;

VII. Mecanismos de coordinación;

VIII. Requerimientos tecnológicos;

IX. Necesidades presupuestarias; y

X. Mecanismos de evaluación.

Artículo 42. Cada Consejo Metropolitano elaborará un Programa Regional de Seguridad, alineado con el Programa Nacional.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL FONDO PARA LA SEGURIDAD METROPOLITANA DEL NORTE
CAPÍTULO I
OBJETO Y DESTINO

Artículo 43. La Federación podrá establecer un Fondo para la Seguridad Metropolitana del Norte, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a las disposiciones aplicables en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

Artículo 44. Los recursos del Fondo podrán destinarse a:

I. Infraestructura tecnológica;

II. Centros de inteligencia;

III. Videovigilancia;

IV. Interoperabilidad;

V. Capacitación;

VI. Equipamiento;

VII. Ciberseguridad;

VIII. Protección de infraestructura estratégica;

IX. Sistemas de comunicación;

X. Proyectos regionales de prevención; y

XI. Demás proyectos que determine el Consejo conforme a las reglas aplicables.

Artículo 45. Los recursos se asignarán prioritariamente a proyectos que:

I. Beneficien a más de un municipio;

II. Beneficien a más de una entidad federativa;

III. Fortalezcan la interoperabilidad;

IV. Reduzcan tiempos de respuesta;

V. Mejoren la inteligencia regional; o

VI. Atiendan riesgos identificados como prioritarios.

Artículo 46. Los recursos deberán ejercerse con criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Artículo 47. Las instituciones participantes promoverán programas conjuntos de capacitación y profesionalización en:

I. Inteligencia;

II. Análisis criminal;

III. Investigación;

IV. Derechos humanos;

V. Manejo de información;

VI. Ciberseguridad;

VII. Protocolos de coordinación;

VIII. Protección de infraestructura; y

IX. Atención de emergencias metropolitanas.

Artículo 48. Los programas de capacitación deberán considerar las características específicas de las regiones fronterizas y metropolitanas.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 49. El Sistema contará con un Centro de Evaluación Metropolitana de Seguridad.

Artículo 50. La evaluación deberá considerar, entre otros:

I. Incidencia delictiva;

II. Tiempos de respuesta;

III. Número de operaciones coordinadas;

IV. Intercambio de información;

V. Interoperabilidad tecnológica;

VI. Cumplimiento de protocolos;

VII. Percepción de seguridad;

VIII. Protección de infraestructura;

IX. Ejercicio presupuestal; y

X. Cumplimiento de metas.

Artículo 51. Los resultados serán publicados anualmente, con las reservas establecidas por las disposiciones aplicables en materia de seguridad nacional, seguridad pública, información reservada y protección de datos personales.

Artículo 52. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentará anualmente un informe al Congreso de la Unión sobre la implementación de esta Ley.

El informe deberá contener:

I. Resultados;

II. Indicadores;

III. Avance de los programas;

IV. Ejercicio de recursos;

V. Proyectos financiados;

VI. Evaluación institucional; y

VII. Áreas de oportunidad.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 53. Las instituciones integrantes del Sistema deberán garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos y en la implementación de los programas derivados de esta Ley.

Artículo 54. La información generada por el Sistema será pública en los términos de las disposiciones aplicables.

La información cuya divulgación pueda poner en riesgo investigaciones, operaciones, infraestructura estratégica, seguridad pública o seguridad nacional podrá ser clasificada conforme a la legislación correspondiente.

Artículo 55. Los Consejos Metropolitanos podrán establecer mecanismos de participación ciudadana para conocer propuestas y necesidades de la población en materia de prevención y seguridad.

En ningún caso la participación ciudadana comprenderá acceso a información reservada o de inteligencia.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LOGÍSTICO

Artículo 56. Los Consejos Metropolitanos podrán establecer mecanismos de colaboración con los sectores empresarial, industrial, comercial, académico y social para identificar riesgos que afecten la seguridad de las actividades económicas estratégicas.

Artículo 57. La colaboración con el sector privado podrá comprender:

I. Intercambio de información sobre riesgos;

II. Protección de corredores logísticos;

III. Prevención de delitos patrimoniales;

IV. Seguridad de cadenas de suministro;

V. Protección de infraestructura;

VI. Capacitación preventiva; y

VII. Mecanismos de comunicación ante emergencias.

La información proporcionada por particulares será utilizada exclusivamente para los fines establecidos en las disposiciones aplicables.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
RESPONSABILIDADES

Artículo 58. Las personas servidoras públicas que incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley estarán sujetas a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Artículo 59. Constituyen incumplimientos administrativos, sin perjuicio de las conductas previstas en otros ordenamientos:

I. Negarse injustificadamente a participar en los mecanismos de coordinación;

II. Incumplir los acuerdos del Consejo Metropolitano;

III. Obstaculizar injustificadamente el intercambio de información;

IV. Impedir la interoperabilidad de los sistemas;

V. Omitir la actualización de información cuya integración sea obligatoria;

VI. Incumplir injustificadamente los protocolos metropolitanos;

VII. Utilizar los recursos del Fondo para fines distintos a los autorizados;

VIII. Proporcionar información falsa en los informes de evaluación;

IX. Obstaculizar las labores de fiscalización; y

X. Utilizar los mecanismos de coordinación para fines ajenos a los establecidos en esta Ley.

Artículo 60. Las infracciones administrativas serán sancionadas conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, atendiendo a la gravedad de la conducta, daño causado, beneficio obtenido, reincidencia y demás circunstancias previstas en la ley.

Artículo 61. Cuando una conducta pudiera constituir un delito, la autoridad competente deberá dar vista al Ministerio Público, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

CAPÍTULO II
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 62. Las personas servidoras públicas que tengan acceso a información de inteligencia estarán obligadas a preservar su confidencialidad y utilizarla exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 63. El acceso, utilización, modificación, reproducción, extracción o divulgación no autorizada de información estará sujeto a las responsabilidades previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

CAPÍTULO III
FISCALIZACIÓN

Artículo 64. Los recursos federales destinados a los instrumentos previstos en esta Ley estarán sujetos a fiscalización en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 65. Las autoridades participantes deberán proporcionar a los órganos fiscalizadores la información necesaria para verificar el ejercicio de los recursos públicos.

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y MEJORA INSTITUCIONAL

Artículo 66. Cuando una Región Metropolitana presente incumplimientos reiterados en sus metas de seguridad o coordinación, el Consejo Metropolitano deberá aprobar un Programa Extraordinario de Fortalecimiento Institucional.

Artículo 67. El Programa Extraordinario deberá contener:

I. Diagnóstico;

II. Causas del incumplimiento;

III. Acciones correctivas;

IV. Responsables;

V. Metas;

VI. Calendario;

VII. Indicadores; y

VIII. Mecanismos de seguimiento.

Artículo 68. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá emitir recomendaciones técnicas a las autoridades participantes cuando detecte deficiencias graves o recurrentes en los mecanismos de coordinación.

Artículo 69. Las recomendaciones deberán señalar las medidas correctivas, responsables y plazos para su cumplimiento.

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN

Artículo 70. La Federación, las entidades federativas y los municipios podrán celebrar convenios de coordinación para instrumentar las disposiciones de esta Ley.

Artículo 71. Los convenios deberán establecer:

I. Autoridades participantes;

II. Objeto;

III. Obligaciones;

IV. Recursos;

V. Mecanismos de intercambio de información;

VI. Infraestructura;

VII. Indicadores;

VIII. Vigencia;

IX. Mecanismos de evaluación; y

X. Procedimientos para su modificación o terminación.

Artículo 72. Los convenios no podrán establecer disposiciones que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las leyes generales aplicables.

TÍTULO DÉCIMO NOVENO
DE LA COORDINACIÓN FRONTERIZA

Artículo 73. Las Regiones Metropolitanas de Seguridad ubicadas en la frontera norte podrán establecer mecanismos de coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad, migración, aduanas y comercio exterior, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 74. Los mecanismos de coordinación fronteriza tendrán como objetivos:

I. Prevenir delitos transfronterizos;

II. Proteger cruces internacionales;

III. Fortalecer el intercambio de información;

IV. Combatir el tráfico ilícito de personas, armas, drogas y mercancías;

V. Proteger corredores logísticos;

VI. Fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro; y

VII. Atender riesgos que puedan afectar simultáneamente a ambos lados de la frontera.

Artículo 75. Toda cooperación internacional deberá realizarse por conducto de las autoridades competentes y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte.

TÍTULO VIGÉSIMO
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 76. Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse de manera armónica con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general en materia de seguridad pública, protección de datos personales, transparencia, responsabilidades administrativas, presupuesto y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 77. En lo no previsto por esta Ley serán aplicables, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones de la legislación general y federal correspondiente.

Artículo 78. La coordinación prevista en esta Ley deberá orientarse a generar resultados verificables en materia de prevención del delito, reducción de la incidencia delictiva, fortalecimiento institucional y protección de la población.

Artículo 79. La implementación de esta Ley deberá realizarse de manera progresiva, atendiendo a las condiciones presupuestarias, tecnológicas, institucionales y operativas de cada Región Metropolitana de Seguridad.

Artículo 80. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinará la implementación general de la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las demás autoridades integrantes del Sistema.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. El Consejo Nacional de Seguridad Pública emitirá, dentro de los noventa días naturales siguientes a la publicación del Reglamento, los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de las Regiones Metropolitanas de Seguridad y de los Consejos Metropolitanos.

Cuarto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establecerá, durante el primer año de vigencia de la presente Ley, los mecanismos iniciales de coordinación en las regiones metropolitanas de Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y La Laguna, sin perjuicio de que posteriormente se incorporen otras regiones que cumplan con los criterios establecidos en esta Ley.

Quinto. Los recursos necesarios para la implementación inicial de esta Ley se cubrirán con cargo a los presupuestos autorizados a las dependencias y entidades competentes, conforme a las disponibilidades presupuestarias y sin generar presiones adicionales al gasto público.

Las previsiones presupuestarias para los ejercicios subsecuentes deberán sujetarse al procedimiento establecido en la legislación aplicable.

Sexto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las entidades federativas y municipios participantes, elaborará el Programa Nacional de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte dentro de los doscientos setenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que integren las Regiones Metropolitanas de Seguridad deberán celebrar los convenios de coordinación correspondientes dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo tercero transitorio.

Octavo. La Plataforma Metropolitana de Seguridad del Norte deberá implementarse de manera gradual, priorizando la interoperabilidad con los sistemas nacionales y estatales existentes y evitando la duplicación innecesaria de bases de datos e infraestructura tecnológica.

Noveno. Los Centros Metropolitanos de Inteligencia se establecerán de manera progresiva, atendiendo a los criterios de incidencia delictiva, población, movilidad, infraestructura estratégica, capacidad institucional y disponibilidad presupuestaria.

Décimo. Los sistemas de información, videovigilancia y bases de datos que actualmente operen las entidades federativas y municipios conservarán su titularidad y atribuciones correspondientes. Su interoperabilidad con la Plataforma Metropolitana se realizará mediante convenios, protocolos técnicos y mecanismos de seguridad de la información.

Décimo Primero. Las obligaciones establecidas en esta Ley que impliquen erogaciones presupuestarias estarán sujetas a la disponibilidad de recursos

aprobados en los respectivos presupuestos de egresos y a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad hacendaria.

Décimo Segundo. Las disposiciones administrativas que se opongan al presente Decreto quedarán sin efecto en aquello que resulte incompatible con éste.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2026.

A t e n t a m e n t e

Diputado Eduardo Gaona Domínguez
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cámara de Diputados
LXVI Legislatura

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN, LAS EXPORTACIONES Y EL NEARSHORING, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito, Diputado **Eduardo Gaona Domínguez**, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento de la Inversión, las Exportaciones y el Nearshoring**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México se encuentra ante una transformación profunda de la economía mundial. La reorganización de las cadenas globales de suministro, los cambios en los patrones internacionales de comercio, las tensiones geopolíticas y la búsqueda de mayor resiliencia productiva han impulsado la relocalización de actividades económicas hacia países cercanos a los principales mercados de consumo[1].

[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-mexico-2024_b8d974db-en/full-report/component-4.html

En este contexto, el fenómeno conocido como *nearshoring* representa para México una oportunidad estratégica para incrementar la inversión, generar empleos formales, fortalecer las exportaciones, desarrollar infraestructura, incorporar nuevas tecnologías y elevar la participación de empresas mexicanas en las cadenas globales de valor[2].

La posición geográfica de nuestro país, su integración productiva con América del Norte, la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, su infraestructura industrial y su amplia red de acuerdos comerciales constituyen ventajas competitivas que pueden convertir a México en uno de los principales destinos mundiales de inversión productiva[3].

Sin embargo, la oportunidad no debe entenderse exclusivamente como la llegada de capital extranjero. El verdadero objetivo debe consistir en **convertir la relocalización de empresas en una estrategia nacional de desarrollo productivo**, capaz de incrementar el contenido nacional de las exportaciones, generar proveedores mexicanos, elevar la productividad y reducir las brechas económicas entre las regiones del país[4].

La experiencia reciente demuestra que México ya cuenta con instrumentos para aprovechar esta coyuntura, pero éstos se encuentran dispersos en

---

[2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-mexico-2024_b8d974db-en/full-report/component-4.html

[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/a-review-of-mexico-s-participation-in-global-value-chains_1ab1e52e-en.html

decretos, programas, reglas administrativas y disposiciones fiscales de carácter temporal[5].

Esta oportunidad se refleja también en el comportamiento reciente de la inversión. De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante 2025 México recibió **40 mil 871 millones de dólares de inversión extranjera directa**, cifra histórica para un ejercicio anual y 10.8% superior a la cifra originalmente reportada para 2024. Asimismo, las nuevas inversiones registraron un crecimiento anual de 133%, lo que confirma la relevancia de fortalecer las condiciones institucionales, productivas y de infraestructura necesarias para aprovechar la actual reorganización de las cadenas globales de suministro[6].

En octubre de 2023, el Gobierno Federal expidió un decreto mediante el cual otorgó estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora. Entre sus instrumentos se incluyó una deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, con porcentajes que llegaron hasta 89%, así como una deducción adicional de 25% sobre el incremento de los gastos destinados a capacitación.

El esquema estuvo dirigido a sectores estratégicos como semiconductores, automotriz y electromovilidad, eléctrico y electrónico, dispositivos médicos, farmacéutico, agroindustria y otros sectores con vocación exportadora[7]. Posteriormente, mediante el Decreto publicado el 21 de enero de 2025 para apoyar la estrategia denominada **Plan México**, el Gobierno Federal modificó

---

[5] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5704676&utm

[6] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-alcanza-cifra-historica-de-inversion-extranjera-directa-en-2025-40-871-millones-de-dolares-crecio-un-10-8-anual

[7] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5704676

el enfoque para ampliar el acceso a los estímulos y fortalecer la inversión nacional, las cadenas de proveeduría, la capacitación dual y la innovación.

El Decreto del Plan México permite la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo adquiridos durante el periodo correspondiente y contempla una deducción adicional de 25% sobre el incremento del gasto destinado a capacitación o innovación[8].

Además, estableció un mecanismo de evaluación y control mediante un Comité de Evaluación y determinó un límite global de 30 mil millones de pesos para los estímulos durante su vigencia, de los cuales 28 mil 500 millones se destinan al estímulo de inversión y 1 mil 500 millones a capacitación e innovación. Asimismo, contempla un monto mínimo de 1 mil millones de pesos para contribuyentes con ingresos de hasta 100 millones de pesos, con el propósito de favorecer a las MIPYMES[9].

Actualmente, los estímulos a la inversión y las exportaciones se otorgan mediante decretos del Presidente, no mediante una ley aprobada por el Congreso. Esto tiene tres problemas concretos. Primero, un decreto lo puede modificar o cancelar el propio Ejecutivo en cualquier momento, sin necesidad de pasar por el Congreso; una ley, en cambio ofrece mayor estabilidad porque solo puede cambiarse mediante el proceso legislativo. Segundo, los decretos vigentes como el Plan México de enero de 2025 no establecen mecanismos para coordinar a la Federación. Tercero, la evaluación de resultados (por ejemplo, el Comité de Evaluación del Plan México) también fue creada por decreto, no por ley, por lo que no está obligada a rendir cuentas al Congreso

[8] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5747410%26fecha%3D21/01/2025#gsc.tab=0
[9] Gobierno de México, disponible en: https://www.planmexico.gob.mx/

de manera permanente. Esa es la razón concreta por la que se necesita una ley, es necesario dar permanencia, certeza jurídica y rendición de cuentas a algo que hoy depende únicamente de la voluntad del Ejecutivo.

La relocalización productiva no ocurre de manera uniforme en el territorio nacional. Las entidades federativas cuentan con diferentes capacidades en materia de infraestructura, energía, agua, conectividad, capital humano, logística, seguridad, vivienda y servicios urbanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado que México enfrenta importantes diferencias regionales en materia de conectividad digital, infraestructura, disponibilidad energética y gestión del agua, factores que condicionan la capacidad de las distintas regiones para aprovechar plenamente las oportunidades derivadas del *nearshoring*[10].

Por ello, una política nacional de *nearshoring* no debe limitarse a otorgar beneficios fiscales a las empresas que decidan instalarse en México. Debe establecer mecanismos que permitan desarrollar las condiciones necesarias para que las distintas regiones del país puedan competir por nuevas inversiones, fortalecer sus capacidades productivas e integrarse a las cadenas globales de valor[11].

En este sentido, se propone crear un **Sistema Federal de Incentivos para la Inversión, Exportación y Nearshoring**, mediante el cual la Federación,

---

[10]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

[11] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/2024/02/oecd-economic-surveys-mexico-2024_da38dd2d/full-report/component-6.html

las entidades federativas y los municipios puedan coordinar acciones para promover proyectos estratégicos.

La política deberá considerar indicadores objetivos como:

1. Inversión nacional y extranjera;
2. Generación de empleo formal;
3. Incremento de exportaciones;
4. Crecimiento de salarios;
5. Contenido nacional;
6. Incorporación de MIPYMES;
7. Desarrollo de proveedores;
8. Innovación y transferencia tecnológica;
9. Capacitación y educación dual;
10. Infraestructura logística;
11. Disponibilidad y eficiencia energética;
12. Uso sustentable del agua;
13. Reducción de emisiones;
14. Economía circular;
15. Desarrollo regional equilibrado.

La incorporación de estos indicadores responde a la necesidad de que los beneficios del *nearshoring* no se limiten a la llegada de inversión extranjera, sino que contribuyan a integrar a las pequeñas y medianas empresas en las

cadenas de valor, generar mejores vínculos productivos y distribuir de manera más amplia los beneficios del comercio y la inversión[12] [13].

De esta manera, los incentivos dejarían de ser únicamente un beneficio fiscal y se convertirían en una herramienta de política económica vinculada a resultados.

Nuevo León constituye uno de los principales ejemplos del potencial que representa la relocalización de cadenas productivas para México. Su ubicación geográfica, infraestructura industrial, conectividad con Estados Unidos, capital humano y concentración de empresas manufactureras lo han convertido en uno de los principales polos de atracción de inversión vinculada con el *nearshoring*. De acuerdo con información del Gobierno del Estado, durante los últimos años se han instalado en la entidad más de 2,500 empresas extranjeras y más de 250 parques industriales, mientras que las autoridades estatales han identificado a las pequeñas y medianas empresas y a la proveeduría local como elementos fundamentales para consolidar esta nueva etapa de crecimiento industrial[14].

La relevancia de la infraestructura industrial de Nuevo León también se refleja en que el estado cuenta con más de 250 parques industriales distribuidos en 15 municipios y que la demanda de espacios industriales durante 2024 estuvo impulsada, entre otros factores, por el fenómeno del *nearshoring*. Entre los

---

[12] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

[13] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/2024/02/oecd-economic-surveys-mexico-2024_da38dd2d/full-report/component-6.html

[14] Gobierno del Estado de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/boletines/anuncia-gobernador-paquete-economico-para-favorecer-las-pymes-y-la-proveeduria-local

sectores que concentraron una mayor demanda se encuentran el automotriz, eléctrico y electrónico y las cadenas de suministro[15].

Esta experiencia demuestra que la atracción de inversión extranjera debe acompañarse de políticas públicas orientadas a fortalecer la proveeduría nacional. En este sentido, Nuevo León ha impulsado la estrategia denominada **"Hecho en Nuevo León"**, cuyo propósito es fortalecer a las empresas locales, particularmente a las MIPYMES, y facilitar su acceso a nuevas oportunidades de comercialización y a las cadenas de valor.[16]

Asimismo, la entidad ha registrado nuevos proyectos vinculados con manufactura avanzada, logística, inteligencia artificial, robótica e investigación y desarrollo. Entre los proyectos anunciados durante 2025 destacan inversiones de **Volvo, LEGO, KUKA y Rhenus**, además de la creación del primer centro de investigación y desarrollo en robótica de KUKA en México y nuevos proyectos destinados a fortalecer la infraestructura logística[17].

El caso de Nuevo León evidencia que el *nearshoring* puede generar inversión, empleo, innovación y desarrollo de proveedores; sin embargo, también demuestra la necesidad de contar con una política federal que permita replicar estas condiciones en otras regiones del país. La presente iniciativa busca precisamente que los beneficios derivados de la relocalización productiva no se concentren territorialmente, sino que puedan extenderse a

---

[15] Gobierno del Estado de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/boletines/lidera-nuevo-leon-mercado-de-bienes-y-raices-industriales

[16] Gobierno del Estado de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/boletines/relanza-gobierno-del-estado-el-sello-distintivo-hecho-en-nuevo-leon-para-fortalecer

[17] Gobierno del Estado de Nuevo León, disponible en: https://beta.nl.gob.mx/es/boletines/nl-conquista-europa-2-billones-de-dolares-en-inversion-extranjera-y-mas-de-11000-empleos

las distintas entidades federativas mediante incentivos vinculados con infraestructura, capital humano, proveeduría nacional, innovación y desempeño exportador[18].

Uno de los principales problemas de los esquemas tradicionales de incentivos consiste en que pueden medir el monto de inversión anunciada, pero no necesariamente el impacto económico efectivo[19].

Por ello, la presente iniciativa propone que los incentivos estén sujetos a **metas verificables de desempeño**, de manera que su otorgamiento y permanencia se encuentren vinculados al cumplimiento de objetivos económicos, productivos, laborales, tecnológicos y ambientales previamente establecidos[20].

Las empresas beneficiarias deberán acreditar, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, compromisos relacionados con inversión, empleo, capacitación, exportaciones, proveeduría nacional, innovación o sostenibilidad. Este enfoque encuentra un antecedente en el Decreto del *Plan México*, que estableció un Comité de Evaluación encargado de analizar los proyectos de inversión, los convenios de educación dual y los proyectos relacionados con innovación, así como de emitir, en su caso, la constancia de cumplimiento necesaria para aplicar los estímulos fiscales[21].

---

[18] Gobierno del Estado de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/boletines/consolida-secretaria-de-economia-nuevo-leon-como-lider-en-nearshoring
[19] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5747410%26fecha%3D21/01/2025#gsc.tab=0
[20] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5747410%26fecha%3D21/01/2025#gsc.tab=0
[21] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5747410%26fecha%3D21/01/2025#gsc.tab=0

Asimismo, los Lineamientos para aplicar el Decreto del *Plan México* establecen procedimientos, criterios y parámetros de elegibilidad que deben cumplir los contribuyentes para obtener la constancia de cumplimiento y acceder a los estímulos fiscales[22].

Cuando una empresa incumpla injustificadamente las condiciones bajo las cuales recibió un beneficio, deberá restituir los estímulos correspondientes en los términos establecidos por las disposiciones fiscales aplicables. El propio régimen vigente del *Plan México* contempla que los contribuyentes que incumplan los requisitos establecidos en el Decreto y sus Lineamientos deberán cubrir el impuesto correspondiente a la diferencia entre el monto deducido con el estímulo y el monto que les hubiera correspondido deducir sin dicho beneficio[23].

Con ello se busca evitar que los recursos públicos sean utilizados sin generar una contraprestación económica y social suficiente, y establecer un modelo de incentivos basado en el principio de **"beneficio público a cambio de desempeño económico verificable"**. Cuando el beneficiario incumpla las obligaciones establecidas para acceder a un incentivo, este le será retirado, conforme a las disposiciones aplicables. Esta orientación es congruente con el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las evaluaciones deben realizarse con base en indicadores y que sus resultados

---

[22] Mijares Noticias, disponible en: https://www.mijares.mx/noticias/publicacion-de-lineamientos-para-aplicar-estimulos-fiscales-del-plan-mexico
[23] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5757084

deben ser considerados para la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos[24].

En consecuencia, la presente iniciativa propone que la política de incentivos para la inversión, exportación y *nearshoring* incorpore desde la ley mecanismos de seguimiento, evaluación, transparencia y retiro de beneficios, con el propósito de garantizar que los estímulos públicos produzcan efectos verificables en materia de inversión productiva, empleo formal, exportaciones, desarrollo de proveedores, innovación, capacitación y desarrollo regional.

La experiencia internacional demuestra que atraer empresas multinacionales no garantiza por sí mismo el desarrollo de una economía nacional. La experiencia de México en las cadenas globales de valor muestra que, aunque el país se encuentra ampliamente integrado a dichas cadenas, una parte importante de sus exportaciones manufactureras incorpora valor agregado extranjero, mientras que los vínculos hacia adelante y la participación de empresas nacionales pueden fortalecerse[25].

El objetivo debe ser construir **ecosistemas productivos**, en los que las empresas extranjeras que se establezcan en México generen vínculos con empresas nacionales, particularmente micro, pequeñas y medianas empresas, y contribuyan al desarrollo de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación. La OCDE ha señalado que el *nearshoring* representa una oportunidad histórica para integrar con mayor intensidad a las

---

[24] Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf

[25] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/a-review-of-mexico-s-participation-in-global-value-chains_1ab1e52e-en.html

PYMES mexicanas en las cadenas de valor y generar vínculos productivos de mayor valor agregado[26].

Para atender directamente esta debilidad, la presente iniciativa no se limita a otorgar incentivos a la inversión extranjera, sino que crea, como mecanismo legal permanente, un Programa Federal de Desarrollo de Proveedores del Nearshoring, destinado a vincular a las empresas exportadoras con micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. A diferencia de los esfuerzos actuales de vinculación productiva, que operan mediante programas administrativos sin sustento legal permanente, este Programa quedará establecido en ley, con objetivos, componentes y responsables definidos, lo que le da continuidad más allá de cada administración. Esta propuesta es congruente con la estrategia nacional denominada Plan México, que contempla entre sus objetivos desarrollar la proveeduría local y regional, incrementar la inversión y las exportaciones, ampliar la sustitución de importaciones mediante cadenas de valor y fortalecer la participación de las MIPYMES.[27].

Este programa deberá facilitar:

- **Certificaciones internacionales**, particularmente aquellas relacionadas con calidad, seguridad de productos y sostenibilidad ambiental;
- **Financiamiento**, para facilitar las inversiones necesarias para que las MIPYMES puedan cumplir con los requerimientos de las empresas tractoras;

---

[26] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

[27] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5747410

- **Capacitación**, orientada al desarrollo de capacidades técnicas, administrativas y productivas;
- **Digitalización**, para elevar la productividad y facilitar la incorporación de las empresas a cadenas de suministro modernas;
- **Transferencia tecnológica**, para incrementar las capacidades productivas y de innovación;
- **Acceso a cadenas globales de suministro**;
- **Desarrollo de estándares de calidad**; y
- **Vinculación con empresas tractoras**[28].

La OCDE ha señalado específicamente que las certificaciones reconocidas internacionalmente pueden facilitar que las MIPYMES mexicanas se conviertan en proveedoras de empresas de mayor tamaño, particularmente cuando acreditan estándares de calidad, seguridad de productos y sostenibilidad ambiental. Asimismo, recomienda simplificar los procesos de certificación y proporcionar asistencia financiera a las pequeñas empresas, debido a los costos y tiempos que implica cumplir con dichos estándares.

En materia de financiamiento, Nacional Financiera ha establecido como uno de sus objetivos prioritarios para el periodo 2025-2030 **fortalecer el desarrollo de proveedores nacionales e impulsar su participación en las cadenas de valor**, así como ampliar el financiamiento de las MIPYMES y de empresas ubicadas en sectores y regiones estratégicas para promover la relocalización, la inversión productiva, la innovación y la adopción tecnológica[29].

---

[28] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf

[29] Nacional Financiera, disponible en: https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/estrategia_institucional.html

La finalidad es incrementar el contenido nacional de las exportaciones y evitar que México se convierta únicamente en una plataforma de ensamblaje con bajo valor agregado. La OCDE ha advertido que la participación de México en las cadenas globales de valor se encuentra fuertemente determinada por vínculos hacia atrás, es decir, por el uso de valor agregado extranjero en sus exportaciones, por lo que el *nearshoring* constituye una oportunidad para avanzar hacia actividades de mayor valor agregado y fortalecer los vínculos productivos nacionales[30].

Esta orientación coincide con los objetivos establecidos en el **Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030**, que plantea incrementar el contenido nacional en las fases productivas y fortalecer las cadenas de proveeduría, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el Plan México establece como objetivo elevar el contenido nacional y regional, incrementar la proveeduría local de mayor valor y fortalecer la participación de empresas mexicanas en las cadenas productivas[31].

El capital humano constituye uno de los principales factores para determinar la capacidad de México para aprovechar el *nearshoring*. La disponibilidad de trabajadores con las competencias técnicas requeridas, así como la capacidad de las empresas para capacitar y desarrollar talento, son

[30] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/a-review-of-mexico-s-participation-in-global-value-chains_1ab1e52e-en.html

[31] Nacional Financiera, disponible en: https://www.gob.mx/nafin/prensa/presenta-nafin-su-programa-institucional-2025-2030-para-fortalecer-a-mipymes-impulsar-las-cadenas-de-valor-la-proveeduria-y-el-desarrollo?idiom=es

elementos fundamentales para incrementar la productividad y facilitar la integración de las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor[32].

El **Decreto del Plan México** ya reconoce la importancia de la educación dual y establece mecanismos para incentivar la capacitación y la innovación. El propio Decreto contempla estímulos fiscales vinculados con los gastos adicionales en capacitación y con proyectos de innovación, además de establecer mecanismos de evaluación a cargo de un Comité de Evaluación[33].

La presente propuesta busca convertir estos mecanismos en una **política permanente**, incorporando la formación de capital humano, la educación dual, la innovación y la transferencia tecnológica como componentes estructurales de la política nacional de incentivos a la inversión, las exportaciones y el *nearshoring*[34].

Los proyectos beneficiarios podrán obtener incentivos adicionales cuando:

- Incorporen **programas de educación dual**;
- Capaciten **trabajadores mexicanos**;
- Desarrollen **certificaciones técnicas**;
- Establezcan **centros de investigación**;
- Desarrollen **patentes**;
- Realicen **transferencia tecnológica**;
- Colaboren **con instituciones de educación superior**[35].

---

[32] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html
[33] Gobierno de México, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747410&fecha=21/01/2025#gsc.tab=0
[34] Secretaría de Gobernación, disponible en: https://sidofqa.segob.gob.mx/notas/5752575
[35] Ley General de Educación, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

La incorporación de estos criterios permitirá que los incentivos públicos no se concentren exclusivamente en la adquisición de maquinaria, infraestructura o activos fijos, sino que también promuevan la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la formación de trabajadores especializados. La OCDE ha señalado que para aprovechar plenamente las oportunidades derivadas del *nearshoring*, México debe mejorar las competencias de su fuerza laboral, fortalecer la educación y capacitación y generar una mayor vinculación entre las empresas y las instituciones educativas[36].

El propósito es que cada nueva inversión contribuya también a **incrementar las capacidades productivas del país**, fortalecer el capital humano, elevar la productividad y generar condiciones para que México avance hacia actividades de mayor valor agregado dentro de las cadenas globales de valor[37].

No existe *nearshoring* sostenible sin infraestructura. La disponibilidad y calidad de infraestructura productiva constituye una condición fundamental para que México pueda atraer nuevas inversiones y aprovechar plenamente la relocalización de cadenas de suministro. La OCDE identifica expresamente los retos relacionados con el transporte, la conectividad digital, la energía

[36] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html
[37] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-mexico-2024_b8d974db-en.html

renovable y la escasez de agua como factores que deben atenderse para aprovechar las oportunidades del *nearshoring*[38].

La disponibilidad de **electricidad, agua, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y servicios urbanos** constituye un elemento determinante para la localización de nuevas inversiones[39].

El **Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030** reconoce la infraestructura estratégica como un componente fundamental para el desarrollo productivo y establece acciones relacionadas con la expansión ferroviaria, modernización de puertos y aeropuertos, infraestructura energética y seguridad hídrica. Asimismo, el Plan México plantea desarrollar infraestructura productiva para fortalecer la competitividad y reducir costos logísticos[40].

Por ello, la iniciativa contempla que los proyectos de inversión estratégicos puedan vincularse con **programas federales y estatales de infraestructura**, de manera que la política de atracción de inversiones se acompañe de acciones destinadas a resolver las necesidades de conectividad, energía, agua, movilidad y servicios que permitan la instalación y operación sostenible de nuevos proyectos productivos[41].

Se propone crear **Planes Regionales de Competitividad y Nearshoring**, como instrumentos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, mediante los cuales se identifiquen las necesidades de cada

---

[38] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

[39] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf

[40] Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771

[41] GreenbergTraurig, disponible en: https://www.gtlaw.com/en/insights/2025/6/estimulos-fiscales-en-los-polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar

región y se establezcan prioridades de inversión pública, sin que ello implique la imposición de obligaciones a los estados o municipios que no participen voluntariamente en su elaboración.

Este planteamiento encuentra un antecedente directo en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, creados mediante decreto presidencial del 22 de mayo de 2025. Bajo ese esquema, la Secretaría de Economía emite la declaratoria de cada Polo una vez que un Comité Intersecretarial de Promoción dictamina su viabilidad, considerando criterios territoriales, productivos, de comunicación y conectividad, población, servicios, infraestructura, actividades económicas y compatibilidad del uso de suelo; una vez declarado el Polo, sus beneficiarios acceden a estímulos fiscales específicos, como la deducción inmediata de inversiones y la deducción adicional por capacitación e innovación. La presente iniciativa retoma esa misma lógica (identificación territorial con criterios objetivos, seguida de beneficios concretos) pero la eleva a un marco legislativo permanente y aplicable a nivel nacional, en lugar de limitarla a decretos de vigencia acotada a regiones específicas[42].

Los planes deberán considerar particularmente:

- **Energía eléctrica**;
- **Agua**;
- **Infraestructura ferroviaria**;
- **Carreteras**;
- **Cruces fronterizos**;
- **Puertos**;

---

[42] Diario Oficial de la Federación, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5758077%26fecha%3D22/05/2025#gsc.tab=0

- **Conectividad digital**;
- **Vivienda**;
- **Movilidad**;
- **Seguridad**;
- **Infraestructura ambiental**[43].

La planeación regional deberá procurar que la infraestructura pública se anticipe a las necesidades de los proyectos productivos y que las inversiones se orienten conforme a las vocaciones económicas de cada territorio, evitando que la llegada de nuevas empresas genere presiones desproporcionadas sobre los sistemas de agua, energía, movilidad, vivienda o servicios urbanos[44].

Los incentivos no deben profundizar las desigualdades existentes. México presenta **importantes disparidades territoriales en productividad, infraestructura, conectividad, capital humano y capacidad de innovación**, por lo que una política nacional de atracción de inversiones debe considerar las condiciones particulares de cada región[45].

La política nacional de relocalización debe permitir que las regiones con menor desarrollo relativo puedan incrementar su capacidad para atraer inversión, generar empleos formales, desarrollar proveedores locales y participar en las cadenas globales de valor. La OCDE ha señalado que los

---

[43] Secretaría de Gobernación, disponible en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5758079
[44] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html
[45] Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en: https://www.iadb.org/es/blog/analisis-economico/inteligencia-artificial-motor-de-productividad-o-de-desigualdad

beneficios del *nearshoring* no se distribuyen automáticamente entre las regiones y que es necesario fortalecer las capacidades productivas y de infraestructura de los territorios con mayores rezagos[46].

Por ello, se propone establecer un **Índice Federal de Competitividad para el Nearshoring**, que permita identificar las fortalezas y carencias de cada entidad federativa y sirva como instrumento para orientar los incentivos, la inversión pública y las acciones de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno[47].

Los incentivos podrán considerar **criterios de compensación regional** para promover inversiones en entidades con potencial productivo, pero con menores niveles de infraestructura o desarrollo industrial. Este enfoque resulta congruente con la estrategia de los **Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar**, cuyo objetivo incluye promover el desarrollo económico regional, impulsar la inversión y favorecer una distribución más equilibrada de las actividades productivas[48].

Asimismo, la utilización de indicadores regionales permitiría que los incentivos se asignen con base en variables objetivas como infraestructura disponible, conectividad, disponibilidad de energía y agua, capital humano, productividad, participación de MIPYMES, capacidad exportadora, innovación y condiciones de desarrollo económico[49].

---

[46] The Logistic World, disponible en: https://thelogisticsworld.com/actualidad-logistica/la-ocde-plantea-tres-retos-para-que-mexico-aproveche-su-potencial-y-el-nearshoring/
[47] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/igae/
[48] Secretaría de Gobernación, disponible en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5758077
[49] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

Esta medida permitiría avanzar hacia un **modelo de desarrollo más equilibrado**, en el que la relocalización de las cadenas productivas no se concentre exclusivamente en las entidades que actualmente cuentan con mayor infraestructura industrial, sino que contribuya a fortalecer las capacidades productivas de las distintas regiones del país y a reducir las brechas territoriales existentes[50].

Por ejemplo, Estados Unidos ha adoptado una política industrial orientada a fortalecer sectores considerados estratégicos para su seguridad económica y tecnológica. A través del **CHIPS and Science Act,** estableció mecanismos de apoyo para incrementar la capacidad nacional de fabricación de semiconductores, fortalecer la investigación y desarrollo y reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro[51].

El CHIPS for America contempla **39 mil millones de dólares en incentivos para la fabricación de semiconductores** y aproximadamente **11 mil millones de dólares para investigación y desarrollo,** además de recursos destinados a capacitación y desarrollo de talento especializado[52].

La experiencia estadounidense resulta relevante para México porque demuestra que los incentivos pueden vincularse directamente con objetivos de política industrial, particularmente en **sectores estratégicos y de alta**

---

[50] Kavanagh Gorozpe, disponible en: https://www.k-g.com.mx/se-otorgan-estimulos-fiscales-en-los-polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar/

[51] Departamento de Comercio de los Estados Unidos, disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2024/05/investing-america-investing-americans-workforce-development-programs-us

[52] Departamento de Comercio de los Estados Unidos, disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2024/05/investing-america-investing-americans-workforce-development-programs-us

tecnología, y que el apoyo público puede combinar inversión productiva, investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano[53]

De esta experiencia se desprende que los incentivos pueden diseñarse bajo un principio de **"beneficio público a cambio de desempeño económico verificable"**, estableciendo metas relacionadas con inversión, producción, empleo, exportaciones y desarrollo de capacidades nacionales[54].

La Unión Europea también ha fortalecido sus instrumentos de política industrial para incrementar su **autonomía estratégica**, particularmente en sectores relacionados con semiconductores, tecnologías digitales, tecnologías limpias y cadenas de suministro consideradas críticas[55].

A través del **European Chips Act**, la Unión Europea busca fortalecer su capacidad de investigación, innovación y fabricación de semiconductores, así como reducir dependencias estratégicas y aumentar la resiliencia de sus cadenas de suministro[56].

De manera complementaria, el **Clean Industrial Deal** y su **Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)** permiten a los países de la Unión Europea apoyar inversiones en energía limpia, descarbonización industrial y tecnologías limpias, mediante un esquema de ayudas que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030[57].

---

[53] Revista Norteamérica UNAM, disponible en: https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/753/985
[54] Credit.org, disponible en: https://credit.org/es/financial-blogs/basics-of-incentives
[55] GMF, disponible en: https://www.gmfus.org/news/eus-industrial-accelerator-act-puts-pedal-metal
[56] Comisión Europea, disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/european-chips-act
[57] Comisión Europea, disponible en: https://competition-policy.ec.europa.eu/about/contribution-clean-just-and-competitive-transition/clean-industrial-deal-state-aid-framework-cisaf_en

Lo que México puede tomar de este modelo no es su mecanismo de control, sino la idea de que los incentivos deben tener un tiempo límite y estar sujetos a revisión, en vez de otorgarse de manera permanente y sin condiciones. Por eso esta Ley ya establece límites de presupuesto cada año y evaluaciones periódicas de los incentivos[58].

Además, como México pertenece a la Organización Mundial del Comercio y al T-MEC, los incentivos de esta Ley se otorgan por metas de inversión, empleo, capacitación y uso de proveedores nacionales, y no por la cantidad de exportaciones. Esto es importante porque, si un incentivo se otorga directamente por exportar más, otros países podrían considerarlo una práctica desleal de comercio y aplicar sanciones o cuotas a los productos mexicanos.

Las experiencias comparadas permiten identificar cuatro elementos que deben incorporarse a la política mexicana de *nearshoring*:

I. Incentivos vinculados a **resultados verificables;**

II. Priorización de **sectores estratégicos;**

III. Fortalecimiento de **proveedores nacionales y contenido local;** y

IV. Evaluación periódica del impacto económico, productivo, laboral y social de los recursos públicos destinados a los incentivos[59].

La presente iniciativa retoma estos elementos y los adapta al marco constitucional, económico y comercial de México, particularmente a las condiciones derivadas del **T-MEC** y de la integración productiva de **América del Norte**. La relevancia de esta integración se refleja en que México y

---

[58] ALUS, disponible en: https://www.alus.com.mx/blog/el-nuevo-horizonte-de-los-incentivos-laborales-en-mexico

[59] Comisión Europea, disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act

Estados Unidos mantienen cadenas de suministro estrechamente vinculadas en sectores como automotriz, electrónico, dispositivos médicos y textil, mientras que el T-MEC constituye el marco jurídico que estructura una parte sustantiva del comercio regional[60].

En consecuencia, México no debe competir exclusivamente mediante la reducción de costos o el otorgamiento de estímulos fiscales, sino mediante una **política integral** que combine infraestructura, talento, innovación, proveeduría nacional, certidumbre jurídica y acceso a mercados internacionales[61].

La lección común de estas experiencias es que la competencia internacional por la inversión ya no depende únicamente de ofrecer menores costos laborales o beneficios fiscales. Los países compiten mediante **infraestructura, talento, innovación, energía, logística, certidumbre jurídica y políticas industriales activas**[62].

México debe responder con una estrategia propia que aproveche sus ventajas regionales y su integración con América del Norte, pero que, al mismo tiempo, genere capacidades nacionales suficientes para que la inversión extranjera se traduzca en **mayor contenido nacional, empleos de calidad, innovación, desarrollo de proveedores y crecimiento de las exportaciones de mayor valor agregado**[63].

---

[60] United States Trade Representativ, disponible en:https://ustr.gov/countries-regions/americas/mexico
[61] Noticias Talla Política, disponible en: https://www.tallapolitica.com.mx/el-siguiente-reto-de-mexico-no-es-solo-exportar-mas-tecnologia-sino-producir-mas-valor-aqui-haces-barba/
[62] Comisión Europea, disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act
[63] Noticias Expansión, disponible en: https://expansion.mx/opinion/2026/08/17/mexico-entre-norteamerica-y-europa-una-nueva-plataforma-para-la-inversion-estrategica

La iniciativa encuentra sustento principalmente en los artículos **25, 26 y 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,** que establecen las bases constitucionales para la rectoría económica del Estado, la planeación nacional del desarrollo y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de desarrollo económico, inversión, transferencia tecnológica y desarrollo científico y tecnológico[64].

El **artículo 25 constitucional** establece la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y dispone que éste debe ser integral y sustentable. Asimismo, vincula la competitividad con el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, estableciendo que la competitividad comprende las condiciones necesarias para promover la inversión y generar empleo[65].

Esta disposición resulta particularmente relevante para la presente iniciativa, pues permite sustentar constitucionalmente una política federal orientada a promover la inversión productiva, fortalecer las exportaciones, incrementar la productividad y generar empleos mediante instrumentos de política económica vinculados con la relocalización de cadenas productivas[66].

El artículo 26 constitucional establece las bases del **Sistema Nacional de Planeación Democrática**, mediante el cual el Estado organiza la planeación del desarrollo nacional y establece los mecanismos para que los programas

---

[64] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[65] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2016/2/2_204469_3714_firmado.pdf
[66] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

de la Administración Pública Federal se articulen con los objetivos, estrategias y prioridades de la planeación nacional[67].

En este sentido, la creación de mecanismos de coordinación, indicadores de desempeño y planes regionales de competitividad y *nearshoring* resulta compatible con el mandato constitucional de planeación democrática y permite vincular la política de incentivos con objetivos nacionales de desarrollo económico y regional[68].

Por su parte, **el artículo 73, fracción XXIX-D,** faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre **planeación nacional del desarrollo económico y social,** así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional; **la fracción XXIX-E** lo faculta para expedir leyes relativas a la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico; y la **fracción XXIX-F** le confiere atribuciones para legislar en materia de promoción de la inversión mexicana, regulación de la inversión extranjera, transferencia de tecnología y generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional[69].

Estas facultades constitucionales guardan una relación directa con el objeto de la presente iniciativa, toda vez que el **Sistema Federal de Incentivos para la Inversión, Exportación y Nearshoring**, los mecanismos de desarrollo de proveedores, los incentivos a la innovación y capacitación, así como los

---

[67] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[68] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, disponible en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes-programas-e-instrumentos/?theme=1&id=46590
[69] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Planes Regionales de Competitividad y Nearshoring, se encuentran orientados a promover inversión productiva, fortalecer capacidades nacionales y desarrollar condiciones que permitan una mayor integración de México en las cadenas globales de valor[70].

De manera complementaria, el **artículo 28 constitucional** establece que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas que la propia Constitución señala y, asimismo, reconoce la posibilidad de otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación, debiendo el Estado vigilar su aplicación y evaluar sus resultados[71].

Esta última disposición resulta especialmente relevante para la iniciativa, pues proporciona un parámetro constitucional para que los incentivos económicos se encuentren vinculados con **actividades prioritarias, reglas de aplicación, mecanismos de vigilancia y evaluación de resultados**, principios que se retoman en el diseño propuesto[72].

En materia presupuestaria, la instrumentación de los incentivos deberá observar los principios de responsabilidad hacendaria y las disposiciones aplicables de la **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, particularmente aquellas relativas a la programación,

---

[70] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://constitucionenlenguas.inali.gob.mx/articulos/073
[71] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://constitucionenlenguas.inali.gob.mx/articulos/028
[72] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://constitucionenlenguas.inali.gob.mx/articulos/028

presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los recursos públicos federales[73].

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto **establecer un marco jurídico federal permanente para promover la inversión, las exportaciones y la relocalización de cadenas productivas en México, mediante incentivos vinculados al desempeño económico, la generación de empleo, el desarrollo de proveedores nacionales, la innovación, la capacitación, la sostenibilidad y el desarrollo regional equilibrado.**

Con ello se busca que el *nearshoring* deje de ser únicamente una coyuntura internacional y se convierta en una **verdadera estrategia nacional de desarrollo productivo**, orientada a fortalecer las capacidades nacionales, incrementar el contenido nacional de las exportaciones, generar empleos de calidad, impulsar la innovación y promover un desarrollo económico regional más equilibrado.

La propuesta busca, asimismo, que los incentivos públicos se encuentren sujetos a criterios de elegibilidad, metas verificables, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, de manera que los beneficios otorgados por el Estado se traduzcan en resultados económicos y sociales comprobables, como se muestra en el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

[73] Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf

ÚNICO. Se expide la Ley Federal para el Fomento de la Inversión, las Exportaciones y el Nearshoring, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN, LAS EXPORTACIONES Y EL NEARSHORING

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional.

Tiene por objeto establecer las bases para la coordinación de la Federación con las entidades federativas y los municipios para promover:

I. La inversión nacional y extranjera;

II. El incremento y diversificación de las exportaciones;

III. La relocalización de cadenas productivas;

IV. El desarrollo de proveedores nacionales;

V. La generación de empleo formal y de alto valor agregado;

VI. La innovación y transferencia tecnológica;

VII. La capacitación y educación dual;

VIII. El desarrollo de infraestructura estratégica;

IX. La sustentabilidad ambiental y el uso eficiente de los recursos naturales; y

X. El desarrollo económico regional equilibrado.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Comité: Comité Federal de Incentivos para la Inversión, Exportación y Nearshoring;

II. Entidades exportadoras: entidades federativas que desarrollen actividades productivas con capacidad exportadora o potencial para incorporarse a cadenas globales de valor;

III. Incentivos: beneficios fiscales, financieros, administrativos, de infraestructura o de capacitación establecidos conforme a la legislación aplicable;

IV. Nearshoring: estrategia de relocalización o establecimiento de actividades productivas y cadenas de suministro en México por empresas nacionales o extranjeras para atender mercados regionales o internacionales;

V. Proyecto estratégico: inversión que, por su monto, generación de empleo, impacto exportador, innovación, desarrollo regional o integración productiva, sea considerada prioritaria;

VI. Proveeduría nacional: bienes y servicios producidos o prestados por empresas establecidas en México;

VII. MIPYMES: micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la clasificación vigente;

VIII. Polos de desarrollo: espacios territoriales determinados por las autoridades competentes para promover actividades económicas estratégicas.

Artículo 3. La aplicación de esta Ley se sujetará a los principios de:

I. Legalidad;

II. Transparencia;

III. Rendición de cuentas;

IV. Competitividad;

V. Desarrollo regional;

VI. Sustentabilidad;

VII. Adicionalidad de la inversión;

VIII. Evaluación por resultados;

IX. Igualdad de oportunidades;

X. Responsabilidad hacendaria; y

XI. Máximo beneficio económico y social.

TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA FEDERAL DE INCENTIVOS

Artículo 4. Se crea el **Sistema Federal de Incentivos para la Inversión, Exportación y Nearshoring**, como mecanismo permanente de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales competentes.

Artículo 5. El Sistema tendrá como objetivos:

I. Coordinar las políticas de atracción de inversión;

II. Promover la relocalización de empresas;

III. Fortalecer las exportaciones;

IV. Incrementar el contenido nacional;

V. Impulsar cadenas productivas regionales;

VI. Facilitar la instalación de empresas;

VII. Promover infraestructura estratégica;

VIII. Impulsar la innovación y capacitación; y

IX. Reducir las brechas regionales de competitividad.

TÍTULO TERCERO
COMITÉ FEDERAL DE INCENTIVOS

Artículo 6. Se crea el **Comité Federal de Incentivos para la Inversión, Exportación y Nearshoring**, como órgano de coordinación interinstitucional.

El Comité estará integrado por las personas titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Podrán participar representantes de las entidades federativas, organismos empresariales, instituciones académicas y especialistas, conforme a las disposiciones reglamentarias.

Artículo 7. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Evaluar proyectos estratégicos;

II. Emitir criterios para la asignación de incentivos;

III. Establecer indicadores de desempeño;

IV. Coordinar políticas federales;

V. Promover proyectos regionales;

VI. Evaluar resultados;

VII. Publicar información sobre los incentivos otorgados; y

VIII. Las demás que establezca esta Ley.

TÍTULO CUARTO
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y EXPORTACIÓN

Artículo 8. Los incentivos podrán comprender:

I. Estímulos fiscales, conforme a las leyes tributarias aplicables;

II. Financiamiento preferencial;

III. Garantías;

IV. Capacitación;

V. Asistencia técnica;

VI. Facilitación administrativa;

VII. Infraestructura estratégica;

VIII. Desarrollo de proveedores;

IX. Innovación y transferencia tecnológica; y

X. Otros mecanismos previstos en las disposiciones aplicables.

Artículo 9. Los incentivos deberán priorizar proyectos que:

I. Generen empleo formal;

II. Incrementen las exportaciones;

III. Incorporen proveedores nacionales;

IV. Incrementen el contenido nacional;

V. Desarrollen tecnología;

VI. Promuevan educación dual;

VII. Generen inversión productiva;

VIII. Reduzcan impactos ambientales;

IX. Utilicen eficientemente agua y energía; y

X. Contribuyan al desarrollo económico regional.

TÍTULO QUINTO
ESTÍMULOS FISCALES

Artículo 10. Los estímulos fiscales previstos en esta Ley se otorgarán mediante las disposiciones fiscales correspondientes y deberán observar los principios de temporalidad, adicionalidad, transparencia, evaluación y responsabilidad hacendaria.

Artículo 11. Los estímulos podrán considerar, conforme a las leyes fiscales aplicables:

I. Deducción inmediata o acelerada de inversiones;

II. Deducciones adicionales por capacitación;

III. Deducciones adicionales por innovación;

IV. Incentivos a la investigación y desarrollo;

V. Incentivos a la incorporación de proveedores nacionales; y

Artículo 12. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá anualmente los límites presupuestarios de los estímulos fiscales previstos en esta Ley, los cuales se incorporarán al Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley de Ingresos.

TÍTULO SEXTO
DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES

Artículo 13. Se crea el **Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para el Nearshoring**, cuyo objeto será incorporar empresas mexicanas a las cadenas nacionales, regionales e internacionales de suministro.

Artículo 14. El Programa promoverá:

I. Certificaciones;

II. Financiamiento;

III. Digitalización;

IV. Capacitación;

V. Innovación;

VI. Transferencia tecnológica;

VII. Vinculación empresarial; y

VIII. Acceso a mercados internacionales.

Artículo 15. Los proyectos que acrediten una participación creciente de proveedores nacionales podrán obtener incentivos adicionales conforme a las disposiciones fiscales y presupuestarias aplicables.

TÍTULO SÉPTIMO
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN DUAL E INNOVACIÓN

Artículo 16. Los programas de incentivos deberán promover la formación de capital humano especializado.

Artículo 17. Se otorgarán incentivos adicionales a las empresas que:

I. Implementen programas de educación dual;

II. Celebren convenios con instituciones educativas;

III. Capaciten trabajadores;

IV. Desarrollen certificaciones;

V. Generen patentes;

VI. Realicen investigación aplicada; o

VII. Desarrollen nuevas tecnologías.

TÍTULO OCTAVO
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Artículo 18. La Federación, en coordinación con las entidades federativas, podrá establecer Planes Regionales de Competitividad y Nearshoring.

Artículo 19. Los Planes deberán identificar necesidades de:

I. Energía;

II. Agua;

III. Transporte;

IV. Ferrocarriles;

V. Carreteras;

VI. Puertos;

VII. Aeropuertos;

VIII. Telecomunicaciones;

IX. Vivienda;

X. Movilidad; y

XI. Seguridad.

TÍTULO NOVENO
DESARROLLO REGIONAL

Artículo 20. La Secretaría de Economía elaborará un **Índice Federal de Competitividad para el Nearshoring**, que deberá considerar, entre otros:

I. Infraestructura;

II. Energía;

III. Agua;

IV. Capital humano;

V. Logística;

VI. Seguridad;

VII. Conectividad;

VIII. Innovación;

IX. Exportaciones; y

X. Desarrollo de proveedores.

Artículo 21. Los incentivos podrán priorizar proyectos localizados en LAS regiones con menor desarrollo conforme a los datos de crecimiento económico estatal, siempre que acrediten viabilidad económica y contribuyan a la reducción de brechas regionales.

TÍTULO DÉCIMO
SOSTENIBILIDAD

Artículo 22. Los proyectos beneficiarios deberán observar la legislación ambiental, energética y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Artículo 23. Se podrán otorgar incentivos adicionales a proyectos que:

I. Reduzcan emisiones;

II. Utilicen energías limpias;

III. Implementen economía circular;

IV. Reduzcan consumo de agua;

V. Utilicen tecnologías de eficiencia energética; y

VI. Incorporen infraestructura para el tratamiento y reutilización del agua.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN

Artículo 24. La Secretaría de Economía publicará anualmente un informe sobre los incentivos otorgados.

El informe deberá incluir:

I. Beneficiarios;

II. Monto de los incentivos;

III. Inversión generada;

IV. Empleos creados;

V. Exportaciones generadas;

VI. Contenido nacional;

VII. Proveedores incorporados;

VIII. Capacitación realizada;

IX. Innovaciones desarrolladas; y

X. Impacto regional.

Artículo 25. Los incentivos estarán sujetos a mecanismos de evaluación periódica para determinar su eficacia, eficiencia, impacto y permanencia.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
INCUMPLIMIENTO Y RETIRO DE INCENTIVOS

Artículo 26. Cuando un beneficiario incumpla las obligaciones establecidas para acceder a un incentivo, las autoridades competentes podrán suspender o cancelar los beneficios y ejercer las acciones de retiro correspondientes.

Artículo 27. En los casos en que se compruebe que los incentivos fueron obtenidos mediante información falsa, simulación o cualquier otra conducta ilícita, se procederá conforme a las disposiciones fiscales, administrativas y penales aplicables.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 28. Las entidades federativas podrán celebrar convenios con la Federación para:

I. Promover inversiones;

II. Desarrollar infraestructura;

III. Facilitar trámites;

IV. Capacitar trabajadores;

V. Desarrollar proveedores;

VI. Promover exportaciones; y

VII. Ejecutar proyectos estratégicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

TERCERO. La Secretaría de Economía instalará el Sistema Federal de Incentivos para la Inversión, Exportación y Nearshoring dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. El Comité Federal de Incentivos deberá instalarse dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, la Secretaría de Economía deberá emitir el Índice Federal de Competitividad para el Nearshoring.

SEXTO. Los instrumentos de estímulos fiscales vigentes deberán armonizarse con la presente Ley, sin afectar los derechos adquiridos por los contribuyentes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes.

SEPTIMO. La Secretaría de Economía presentará anualmente a las Cámaras del Congreso de la Unión un informe de resultados sobre la aplicación de la presente Ley.

OCTAVO. El Ejecutivo Federal deberá considerar en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales correspondientes las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

NOVENO. Dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir las reglas

generales que precisen los estímulos fiscales a que se refiere el Artículo 8, fracción I, de esta Ley, especificando el tipo de estímulo, los sujetos a quienes aplica, los requisitos para acceder a él y los límites aplicables en cada caso.

DECIMO. Dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir las reglas generales que precisen los incentivos adicionales a que se refiere el Artículo 15 y 17 de esta Ley, especificando el porcentaje mínimo de incremento en la participación de proveedores nacionales que dará derecho a dichos incentivos, el tipo y monto de los incentivos adicionales aplicables, los requisitos para acceder a ellos y la definición de proveedor nacional para efectos de este artículo.

DECIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con las dependencias competentes en materia de energía, agua, transporte, telecomunicaciones y vivienda, emitirán las reglas de operación del TÍTULO OCTAVO dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

DECIMO SEGUNDO. La Secretaría de Economía en coordinación con las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirán las reglas de operación de los Planes Regionales de Competitividad y Nearshoring a que se refiere el Artículo 18, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. Dichas reglas precisarán la naturaleza de los Planes Regionales como instrumentos de planeación de mediano plazo, congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales aplicables en términos de la Ley de Planeación; el procedimiento para su aprobación por parte del Comité Federal de Incentivos; la autoridad responsable de su ejecución y el procedimiento para que las

entidades federativas y municipios se incorporen mediante convenio, sin que ello genere obligaciones para quienes no lo suscriban; y las fuentes de su financiamiento, con cargo a la disponibilidad presupuestaria aprobada anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, a las aportaciones de las entidades federativas y municipios participantes.

DECIMO TERCERO. Las autoridades competentes emitirán dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley las reglas que precisen el procedimiento para la suspensión o cancelación de incentivos y para el ejercicio de las acciones de retiro a que se refiere el Artículo 26, las cuales deberán establecer las causas específicas de incumplimiento, la autoridad competente para resolver en cada caso y el derecho del beneficiario a ser notificado, a manifestar lo que a su derecho convenga y a ofrecer pruebas antes de que se resuelva la suspensión o cancelación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2026.

A t e n t a m e n t e

Diputado Eduardo Gaona Domínguez
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cámara de Diputados
LXVI Legislatura

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO FISCAL, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito, Diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del federalismo fiscal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El federalismo constituye uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano. Desde la Constitución de 1917, el pacto federal ha reconocido la existencia de diversos órdenes de gobierno con competencias propias, autonomía política y responsabilidades compartidas para garantizar el desarrollo nacional[1].

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

No obstante, el diseño financiero del federalismo mexicano ha evolucionado hacia un esquema de alta centralización de los ingresos públicos. Actualmente, la Federación recauda la mayor parte de los ingresos tributarios del país, mientras que las entidades federativas y los municipios dependen, en una proporción considerable, de las participaciones y aportaciones federales para financiar sus funciones constitucionales[2].

Esta concentración de recursos ha generado una marcada dependencia financiera de los gobiernos locales respecto de la Federación, limitando su capacidad de planeación de largo plazo, debilitando su autonomía presupuestaria y reduciendo los incentivos para fortalecer la recaudación propia[3].

De acuerdo con diversos estudios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial, México es uno de los países federales con mayor concentración de ingresos en el gobierno central.

Mientras que en otros sistemas federales los gobiernos subnacionales participan de manera más amplia en la recaudación y administración de impuestos, en México las entidades obtienen apenas una fracción reducida de sus ingresos mediante impuestos locales[4].

---

[2] Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, disponible en: https://www.sncf.gob.mx/
[3] Confederación Patronal de la República Mexicana, disponible en: https://coparmex.org.mx/downloads/senalcoparmex/144/SC_144_Federalismo.pdf
[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en; https://www.oecd.org/en/topics/fiscal-federalism-network.html

Esta realidad ha provocado que numerosos gobiernos estatales enfrenten limitaciones para atender con oportunidad las crecientes demandas sociales relacionadas con la seguridad pública, la infraestructura, la movilidad, la salud, la educación y el desarrollo económico. La dependencia de las transferencias federales reduce los márgenes de planeación financiera de largo plazo y limita la posibilidad de implementar políticas públicas acordes con las necesidades específicas de cada entidad federativa[5].

Esta situación ha generado diversos problemas estructurales, entre los que destacan la dependencia excesiva de las transferencias federales, la incertidumbre en la distribución de los recursos, los escasos incentivos para fortalecer la recaudación local, la persistencia de desigualdades regionales y los conflictos recurrentes entre los distintos órdenes de gobierno en torno a la distribución del gasto público.

La problemática adquiere especial relevancia en entidades federativas con un elevado dinamismo económico, como Nuevo León, cuyo crecimiento industrial, comercial y logístico ha incrementado considerablemente la demanda de infraestructura, movilidad, servicios públicos, vivienda y seguridad. La consolidación de dicha entidad como uno de los principales destinos de inversión nacional y extranjera, particularmente derivada del fenómeno del nearshoring, evidencia la necesidad de contar con un sistema de coordinación fiscal que permita responder de manera eficiente a las

[5] Instituto Mexicano para la Competitividad, disponible en: https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2025/

nuevas exigencias del desarrollo regional, sin menoscabo de los principios de solidaridad y equilibrio que caracterizan al pacto federal[6].

Asimismo, la ausencia de principios constitucionales específicos sobre coordinación fiscal ha permitido que numerosos aspectos fundamentales permanezcan regulados únicamente por leyes secundarias susceptibles de modificación mediante mayorías simples[7].

Lo anterior genera incertidumbre jurídica respecto de la estabilidad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya que aspectos esenciales para la distribución de recursos entre la Federación y las entidades federativas pueden modificarse sin una discusión constitucional de fondo, afectando la previsibilidad financiera de los gobiernos locales[8].

Resulta indispensable elevar a rango constitucional los principios esenciales del federalismo fiscal para otorgar mayor estabilidad, certidumbre jurídica y equilibrio entre la Federación y las entidades federativas.

La creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980 representó un avance importante para eliminar la doble tributación y ordenar la distribución de competencias tributarias entre los distintos órdenes de gobierno[9].

---

[6] Gobierno de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/boletines/nl-se-prepara-para-la-segunda-ola-de-nearshoring-sin-aranceles-y-con-acceso-total-al
[7] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/190635
[8] Banco Mundial, disponible en: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099225502022316135/pdf/P175449-fe142c0d-913d-45db-9505-e3808607c8ff.pdf
[9] Ley de Coordinación Fiscal, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCF.pdf

Sin embargo, más de cuatro décadas después, las condiciones económicas, demográficas y fiscales del país han cambiado profundamente.

Entre los principales retos destacan el incremento de las responsabilidades de los estados en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura; las crecientes necesidades de inversión pública a nivel regional; el crecimiento de las zonas metropolitanas; la persistencia de la desigualdad territorial; los impactos del cambio climático; y los nuevos desafíos derivados del nearshoring y de la relocalización industrial[10].

A ello debe añadirse el crecimiento acelerado de regiones estratégicas para la economía nacional, particularmente en el norte del país. Estados como Nuevo León han experimentado un aumento significativo en la llegada de inversiones productivas, lo que ha incrementado la demanda de infraestructura carretera, redes hidráulicas, transporte público, vivienda, servicios urbanos y seguridad pública.

Estas circunstancias evidencian que el actual modelo de coordinación fiscal enfrenta nuevos desafíos que no estaban presentes cuando fue diseñado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hace más de cuarenta años[11].

Estas circunstancias exigen un modelo fiscal más equilibrado, transparente y corresponsable.

En este contexto, la presente reforma constitucional responde a la necesidad de fortalecer el federalismo fiscal mexicano mediante la incorporación de

---

[10] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pibent/PIBE2024_CP.pdf
[11] Gobierno de México, disponible en: https://www.proyectosmexico.gob.mx/banco_del_conocimiento/nearshoring-relocalizacion/

principios constitucionales que doten de mayor estabilidad, certeza jurídica, transparencia y equilibrio al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La experiencia acumulada durante más de cuatro décadas ha evidenciado que los retos derivados de la creciente demanda de servicios públicos, las desigualdades regionales, la transformación económica del país y fenómenos como la relocalización de cadenas productivas (*nearshoring*) requieren un marco constitucional que garantice una distribución más objetiva, equitativa y eficiente de los recursos públicos entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, fortaleciendo la capacidad institucional de los gobiernos subnacionales para responder a las necesidades de infraestructura, movilidad, seguridad y desarrollo económico que exige el nuevo contexto nacional e internacional[12].

Las entidades federativas requieren contar con mayores capacidades institucionales para generar ingresos propios sin depender exclusivamente de las transferencias federales[13].

Una mayor autonomía financiera fortalece la democracia local, mejora la rendición de cuentas y permite diseñar políticas públicas acordes con las necesidades regionales[14].

---

[12] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/improving-fiscal-federal-relations-for-a-stronger-mexico_5k42213gqpr3-en.html

[13] Camara de Diputados, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-07-21.pdf

[14] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/topics/fiscal-federalism-network.html

Las participaciones federales constituyen recursos de libre disposición que pertenecen a las entidades federativas una vez determinadas conforme a la ley[15].

Por ello, resulta indispensable garantizar constitucionalmente que su entrega sea objetiva, transparente y libre de cualquier utilización discrecional o política, fortaleciendo con ello la seguridad jurídica del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal[16].

El federalismo fiscal debe reducir las brechas de desarrollo entre las distintas regiones del país[17].

La distribución de los recursos debe atender criterios objetivos, entre los que se encuentran la población, los niveles de pobreza, el esfuerzo recaudatorio, el desarrollo económico, las necesidades de infraestructura y el desempeño institucional[18]

El fortalecimiento del federalismo no implica únicamente mayores recursos para los estados, sino también mayores obligaciones de transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas[19].

La corresponsabilidad fiscal constituye un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y asegurar que los recursos públicos

---

[15] Ley de Coordinación Fiscal, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCF.pdf
[16] Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2016/9/2_208172_4188_firmado.pdf
[17] Decentralization.net, disponible en: https://decentralization.net/resources/fiscal-decentralization-primer/1-fiscal-decentralization-and-intergovernmental-fiscal-relations/
[18] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pibent/PIBE2024_CP.pdf
[19] Secretaría de Gobernación, disponible en: https://idefomm.org/wp-content/uploads/2022/03/Disciplina-Financiera-morelos-2021.pdf

sean administrados bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[20].

Es necesario fortalecer los mecanismos permanentes de diálogo entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para construir acuerdos fiscales de largo plazo mediante órganos técnicos permanentes[21].

Diversos países con estructura federal han desarrollado mecanismos constitucionales para garantizar un reparto equilibrado de recursos[22].

En Alemania, la Ley Fundamental establece un sistema de compensación financiera entre la Federación y los Länder basado en principios constitucionales de solidaridad[23].

En Canadá, la Constitución reconoce mecanismos permanentes de igualación fiscal entre provincias[24].

En Australia, la Commonwealth Grants Commission determina fórmulas objetivas para la distribución de recursos[25].

---

[20] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[21] Confederación Patronal de la República Mexicana, disponible en: https://coparmex.org.mx/coparmex-coincide-con-la-conago-en-convocar-a-una-convencion-nacional-hacendaria-y-la-necesidad-de-renovar-el-pacto-fiscal
[22] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/fiscal-federalism-2022_201c75b6-en.html
[23] Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, disponible en: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
[24] Gobierno de Canada, disponible en: https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/federal-transfers/equalization.html
[25] Gobierno de Australia, disponible en: https://www.cgc.gov.au/reports-for-government/2026-update

Brasil reconoce constitucionalmente fondos de participación para estados y municipios[26].

Estos modelos demuestran que los principios del federalismo fiscal deben contar con respaldo constitucional y no depender exclusivamente de legislación secundaria.

La iniciativa pretende fortalecer constitucionalmente el federalismo fiscal, garantizar la autonomía financiera de las entidades federativas, proteger la entrega oportuna de las participaciones federales, incorporar principios constitucionales de coordinación fiscal, establecer mecanismos de corresponsabilidad hacendaria, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, e impulsar un desarrollo regional más equilibrado.

Derivado de lo anterior, se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para consolidar los principios de autonomía financiera, corresponsabilidad hacendaria, equidad regional, transparencia, coordinación institucional y suficiencia financiera, fortaleciendo con ello el pacto federal y la capacidad de los tres órdenes de gobierno para atender eficazmente las necesidades de la población, preservando en todo momento la unidad nacional y la sostenibilidad de las finanzas públicas, bajo la siguiente:

Propuesta

[26] El Economista, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/comparativa-modelos-federalismo-fiscal-lecciones-mexico-20250108-741019.html

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	
Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 25. ... ... **Sin correlativo.**	**Artículo 25. ...** ... **La rectoría del desarrollo nacional se ejercerá conforme a los principios del federalismo fiscal cooperativo, procurando el equilibrio entre la Federación, las entidades federativas y los municipios mediante mecanismos de coordinación hacendaria, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia, equidad territorial, suficiencia financiera y sostenibilidad de las finanzas públicas, con el objeto de fortalecer el desarrollo regional y garantizar el ejercicio eficaz de las competencias constitucionales de cada orden de gobierno.** ... ...

...	...
...	...
...	...
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:	**Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:
Del **I.** a **XXIX-Y.** ...	Del **I.** a **XXIX-Y.** ...
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y	**XXIX-Z.** Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, **asimismo, se garantizará que la legislación en materia de coordinación fiscal observe los principios de autonomía financiera, corresponsabilidad hacendaria, transparencia, objetividad, equidad regional, suficiencia financiera, máxima publicidad y coordinación institucional entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Asimismo, establecerá mecanismos permanentes de evaluación y revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que**

	aseguren su actualización conforme a las condiciones económicas y sociales del país, y
Del **XXX**. a **XXXII.** ...	Del **XXX**. a **XXXII.** ...
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:	**Artículo 74.** Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
Del **I.** a **III.** ...	Del **I.** a **III.** ...
IV. ...	**IV. ...**
Sin correlativo.	**En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación deberán observarse los principios de equilibrio del federalismo fiscal, suficiencia financiera, transparencia, objetividad y equidad regional, garantizando la distribución oportuna de los recursos federales que correspondan a las entidades federativas y municipios conforme a la Constitución y las leyes aplicables.**
....	...
...	...
...	...

...	...
Del **V.** a **IX.** ...	Del **V.** a **IX.** ...
Artículo 115. ...	**Artículo 115.** ...
Del **I.** a **III.** ...	Del **I.** a **III.** ...
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:	**IV.** Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, **asimismo, con apoyo de los gobiernos de los estados y de la federación promoverán mecanismos permanentes de coordinación y colaboración institucional para fortalecer las haciendas municipales, incentivar el incremento de la recaudación propia, modernizar la administración tributaria municipal y consolidar la libre administración hacendaria mediante el fortalecimiento de sus capacidades financieras, respetando las competencias previstas en esta**

	Constitución y en las leyes y en todo caso:
a) a c)...	**a) a c)...** ... ...
Del **V. a la X. ...**	Del **V. a X. ...**
Artículo 134. ...	**Artículo 134. ...** ...
Sin correlativo.	**La programación, distribución, transferencia, administración y evaluación de los recursos públicos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se sujetarán, además de los principios previstos en este artículo, a los de autonomía financiera, corresponsabilidad hacendaria, equidad regional, objetividad, transparencia, máxima publicidad y coordinación institucional entre los órdenes de gobierno, privilegiando la eficiencia del gasto público y el desarrollo equilibrado de las regiones del país.**

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

Derivado de lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del federalismo fiscal, para quedar como siguiente proyecto de:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único. Se adicionan un párrafo tercero al artículo 25, recorriéndose en orden los subsecuentes; un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 74; un tercer párrafo al artículo 134 recorriéndose en orden los subsecuentes; se reforman la fracción XXIX-Z del artículo 73 y la fracción IV del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

...

La rectoría del desarrollo nacional se ejercerá conforme a los principios del federalismo fiscal cooperativo, procurando el equilibrio entre la Federación, las entidades federativas y los municipios mediante mecanismos de coordinación hacendaria, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia, equidad territorial, suficiencia financiera y sostenibilidad de las finanzas públicas, con el objeto de fortalecer el desarrollo regional y garantizar el ejercicio eficaz de las competencias constitucionales de cada orden de gobierno.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Del **I.** a **XXIX-Y.** ...

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, **asimismo,**

se garantizará que la legislación en materia de coordinación fiscal observe los principios de autonomía financiera, corresponsabilidad hacendaria, transparencia, objetividad, equidad regional, suficiencia financiera, máxima publicidad y coordinación institucional entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Asimismo, establecerá mecanismos permanentes de evaluación y revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que aseguren su actualización conforme a las condiciones económicas y sociales del país, y

Del **XXX**. a **XXXII.** ...

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Del **I.** a **III.** ...

IV. ...

En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación deberán observarse los principios de equilibrio del federalismo fiscal, suficiencia financiera, transparencia, objetividad y equidad regional, garantizando la distribución oportuna de los recursos federales que correspondan a las entidades federativas y municipios conforme a la Constitución y las leyes aplicables.

...

...

...

...

Del **V.** a la **IX.** ...

Artículo 115. ...

De I a III...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, **asimismo, con apoyo de los gobiernos de los estados y de la federación promoverán mecanismos permanentes de coordinación y colaboración institucional para fortalecer las haciendas municipales, incentivar el incremento de la recaudación propia, modernizar la administración tributaria municipal y consolidar la libre administración hacendaria mediante el fortalecimiento de sus capacidades financieras, respetando las competencias previstas en esta Constitución y en las leyes** y en todo caso:

a) a c) ...

...

...

...

Del **V. a X.** ...

Artículo 134. ...

...

La programación, distribución, transferencia, administración y evaluación de los recursos públicos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se sujetarán, además de los principios previstos en

este artículo, a los de autonomía financiera, corresponsabilidad hacendaria, equidad regional, objetividad, transparencia, máxima publicidad y coordinación institucional entre los órdenes de gobierno, privilegiando la eficiencia del gasto público y el desarrollo equilibrado de las regiones del país.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para adecuar la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás ordenamientos aplicables.

Tercero. En un plazo no mayor a un año, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, deberá emitir un nuevo Programa Nacional de Coordinación Fiscal con participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo no mayor a 180 días, implementará mecanismos digitales de transparencia para la publicación en tiempo real de las transferencias federales

Quinto. La Auditoría Superior de la Federación emitirá, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos para evaluar el cumplimiento de los principios constitucionales del federalismo fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2026

A t e n t a m e n t e

Diputado Eduardo Gaona Domínguez
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Cámara de Diputados
LXVI Legislatura



Secretario de Servicios Parlamentarios: Hugo Christian Rosas de Léon; **Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria:** Gilberto Becerril Olivares; **Directora del Diario de los Debates:** Eugenia García Gómez; **Jefe del Departamento de Producción del Diario de los Debates:** Oscar Orozco López. Apoyo Documental: **Dirección General de Proceso Legislativo,** José de Jesús Vargas, director. Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión 66, edificio E, cuarto nivel, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969. Teléfonos: 5036-0000, extensiones 54039 y 54044. **Página electrónica:** http://cronica.diputados.gob.mx